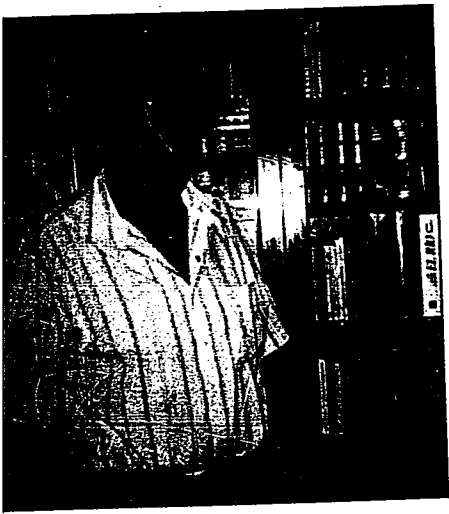


EL NEOLIBERALISMO REALMENTE EXISTENTE



Jaime Ornelas Delgado

Economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; obtuvo la maestría y el doctorado en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Desde 1966 es docente e investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, de la cual ha sido director y actualmente es Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado. Ocupó el cargo de director de Extensión Universitaria y de la revista *Crítica* de la BUAP.

Sus libros más recientes son: *Estructuración del territorio y política regional en México* (1993); el capítulo "Estructura urbano-regional del estado de Puebla", en el libro *Treinta años de economía 1965-1995. Una visión desde Puebla* (1996); y "La teoría general de Keynes y la política económica. Una aproximación a sus posibilidades y limitaciones", en el libro *Keynes... hoy* (1997). Ha publicado más de 60 artículos y ensayos en revistas especializadas.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

EL NEOLIBERALISMO
REALMENTE EXISTENTE

Jaime Ornelas Delgado



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Dirección General de Fomento Editorial

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 Enrique Dóger Guerrero
Rector
 Guillermo Nares Rodríguez
Secretario General
 Carlos Contreras Cruz
Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura
 Víctor Espíndola Cabrera
Director Editorial

Primera edición, 2001
 ISBN: 968 863 515 4

©Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Dirección General de Fomento Editorial
 Av. Juan de Palafox y Mendoza 406
 Teléfono y fax 29 55 00, ext. 5768
 Puebla, Pue.

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	9

I EL NEOLIBERALISMO 13

Antecedentes	13
La propuesta de Friedrich A. Hayek	14
Los primeros pasos	19
Fundamentos ideológicos del modelo neoliberal	21
Imposición de la razón económica	27
Características generales de la estrategia económica neoliberal	29
La modernización conservadora	31
El modelo neoliberal. Sus principales rasgos	35

II NEOLIBERALISMO A LA MEXICANA 39

Antecedentes	39
La ruptura: el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)	42
Todo cambió pero la crisis siguió ahí: el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)	43
Más de lo mismo, pero en tono menor: el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)	53
La inversión extranjera directa	56
Política monetaria restrictiva	59
Comportamiento del Producto Interno Bruto	61
La producción industrial	65
El sector externo	66
La industria maquiladora de exportación	69
El 2 de julio de 2000: una jornada histórica	71

Nada del cambio prometido: el proyecto económico de Vicente Fox Quesada (2000-2006)	74
Las promesas de campaña	76
Bienvenidos a la realidad	82
Las primeras acciones	84
Una primera apreciación	85
El modelo neoliberal mexicano. Sus principales rasgos	87

III

LOS RESULTADOS

91

Introducción	91
Una economía dependiente y extranjerizada	91
La crisis del campo	93
Deuda externa	97
Privatizaciones	99
El sistema bancario	105
Los saldos sociales: salario, ingreso y empleo	108
La pobreza	112

IV

LA PERSPECTIVA

119

Un cambio necesario y verdadero	120
Un Estado renovado	121
BIBLIOGRAFÍA	125
APÉNDICE ESTADÍSTICO	133

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La aceptación de la primera edición de *El neoliberalismo realmente existente* muestra la validez de las razones iniciales para publicarlo: la necesidad de conocer con mayor precisión el significado del neoliberalismo y sus propuestas a partir de sus formulaciones teóricas, tanto como de la evaluación crítica de sus resultados.

Esta segunda edición no podía ser una mera reproducción de la primera. La realidad se ha transformado rápidamente, pero además existe una mayor cantidad de información para hacer juicios más precisos de la sociedad y la economía mexicanas bajo el neoliberalismo. De esta manera, la presente edición no sólo ha sido corregida sino también ampliada y actualizada.

Aunque se mantiene la estructura inicial del texto, se han incluido mayores razones teóricas, sobre todo del austriaco Friedrich Hayek reconocido como el iniciador del modelo neoliberal, para permitir al lector conocer mejor los fundamentos teóricos y prácticos del neoliberalismo. Asimismo, el debate permanente y la continuidad en el análisis nos han permitido ser más claros sobre lo que ese modelo significa social y económicamente.

Al mismo tiempo, para el caso de México se ha recopilado mucha más información, actualizada hasta el año 2000 y, en algunos casos posibles, al primer trimestre del 2001. Esto es, se hace una evaluación completa del sexenio de Ernesto Zedillo y se exponen las propuestas contenidas en el programa de Vicente Fox, además de incluir sus primeras acciones ya como presidente de la República.

Por último, se traza la perspectiva del país, desde el punto de vista del autor, además de analizar lo que podría ser una nueva visión del Estado mexicano en un régimen democrático, es decir, donde se

haya recuperado la razón política en favor de la sociedad y la economía.

Espero que esta edición permita la necesaria reflexión sobre el presente y el futuro de la sociedad mexicana y anime el debate, sobre todo ahora que existe extendida la voluntad de cambiar al neoliberalismo por un modelo cuya preocupación central deje de ser el mercado y la ganancia, para atender de nuevo el crecimiento y la distribución de la riqueza y el ingreso.

Jaime Ornelas Delgado
Puebla de Zaragoza, abril de 2001

INTRODUCCIÓN

Durante ya un buen tiempo, el neoliberalismo ha estado en la primera línea de las preocupaciones nacionales y ha suscitado un intenso debate lleno de advertencias, por parte de las autoridades, para evitar a los mexicanos caminos largos y dolorosos hacia el desarrollo y, sobre todo, se ha denunciado al culpable principal del atraso: el Estado paternalista y sobre protector.

A lo largo de todo su mandato, el último presidente de la República emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Zedillo, tuvo a bien alertar al pueblo mexicano “contra el oscurantismo económico que ha hecho del neoliberalismo el diablo de nuestro tiempo, cuando fue el estatismo el que provocó los daños que hoy padecemos”.¹ Incluso, en franca cruzada internacional, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el mismo ex presidente convocó a los 12 presidentes reunidos en el marco de la Décima Cumbre del Grupo de Río, a terminar de una vez por todas con los estatistas: “En estos momentos —dijo— es esencial ganar el debate a los nostálgicos del estatismo económico” y calificó de retrógrados a quienes “sostienen que los males de la región han sido causados por políticas que reciente e incluso tardíamente, empiezan a encaminarla a una genuina economía de mercado y a una democracia plena” y

¹ De esta opinión participaba también Carlos Abascal, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y posteriormente nombrado por Vicente Fox secretario del Trabajo y Previsión Social, quien afirmaba en aquel entonces que “las causas, el origen de la pobreza, la marginación, el desempleo, el subempleo, la debilidad del estado de derecho que hemos vivido son el autoritarismo, el estatismo y el pragmatismo”. (Periódico *Síntesis*, Puebla, martes 17 de septiembre de 1996: 21.)

alertó a no “caer en las trampas de los falsos debates”. (Periódico *Síntesis*, Puebla, 4 de septiembre de 1996.)²

Así, hablando de la necesidad de debatir para, inmediatamente después, implorar no caer en “falsos debates”, el ex presidente Zedillo demandó discutir su modelo económico para luego quejarse de que la discusión no fluyera y, por último, advertir: “Sigo esperando el debate”, aunque casi siempre descalificaba por adelantado a quienes se atrevían a disentir, ya que según su presidencial punto de vista, “realmente el nivel de análisis y de crítica no se corresponde con la gravedad e importancia de los temas que se discuten [...] En realidad, concluyó el presidente, estoy observando una suerte de oscurantismo, una suerte de maniqueísmo, de nuevo”.

Aún más, en defensa de su estrategia económica alguna vez en la ciudad de Monterrey, enfáticamente “desechó por completo cualquier posibilidad de debatir su programa económico porque a su juicio es el más corto y el menos costoso para alcanzar el crecimiento, pero a cambio invitó a sus críticos a hacer explícita su propuesta e imprimirle un mínimo de rigor intelectual”. (Periódico *El Financiero*, 6 de julio de 1996: 5.) Más adelante, llegó a decir: “No deja de ser curioso que todos los males económicos y sociales que hoy aquejan a nuestros países quieran ser atribuidos por algunos a las políticas de liberalización económica que, en una perspectiva de largo plazo, apenas están naciendo” (Periódico *Crónica*, martes 15 de octubre de 1996: 5), sin admitir discusión alguna sobre el camino por el que su estrategia económica llevaba al país. Del autoritarismo, con toda tranquilidad, pasaba a la ofensa pues creía, o por lo menos decía creer, que “ese debate se rehuye, y me preocupa —declaró en una entrevista con Rolando Cordera— que lo que esté ocurriendo es que no haya propuestas que pasen la prueba del rigor intelectual”. (Revista *Proceso*, número, 1049, 6 de octubre de 1996: 8.)

Por su parte y en la misma tesitura, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, José Ángel Gurría Treviño (1996:

² Ya antes, Carlos Salinas de Gortari (1990: 28), a principios de los noventa había mostrado su militancia anti estatista al escribir: “El Estado crecientemente propietario se volvió rápidamente incapaz ante el incremento de las necesidades de una población en rápido aumento; ante una planta productiva sobreprotegida y poco competitiva; ante la demanda de mayor calidad de bienes y servicios; ante la existencia de más transparencia en las relaciones del Estado y la sociedad y, todo ello, en medio de una crisis fiscal sin precedente.”

13), reforzaría las posiciones del titular del Ejecutivo e iría más allá para denunciar casi como complotistas a los críticos del neoliberalismo y descalificar, sin más ni más, sus propuestas, sobre todo a quienes se permitían dudar que hubiera un solo camino para el país. “Recientemente y más aún a raíz de la crisis económica de México —afirmó el canciller al inaugurar una de esas reuniones que creyó era sólo para criticar sin fundamento a su jefe y al neoliberalismo— han proliferado los foros para denunciar el llamado ‘modelo neoliberal’. Cada quien —continuó inmutable Gurría— parece tener un concepto propio de lo que constituye dicho modelo, por lo que el debate se vuelve con frecuencia emotivo, poco riguroso y altamente politizado”.

Así, en general, el tono autoritario y la descalificación grosera han sido y son en México el recurso del método de la propuesta neoliberal, en ello han sustentado también su negativa a discutir sus propuestas, o reconocer la posibilidad de cambiar el rumbo de la economía.³

Frente a estas “razones” y porque la democracia requiere del debate constante, resulta del mayor interés tratar de establecer las características generales del modelo económico que se aplica en México para determinar si éstas pueden identificarse con el llamado modelo neoliberal y sus posibilidades futuras, dado su comportamiento pasado y presente. Por supuesto, a diferencia de lo que pensaba el ex presidente Zedillo y sus colaboradores, reconocemos en los ciudadanos, los economistas, sociólogos y otros científicos sociales, su capacidad y rigor crítico-propositivo frente a la estrategia neoliberal, de antes y ahora, pero sobre todo es de exaltar sus actitudes, equivocadas o no, siempre impregnadas de una gran pasión por México, lo que muchas veces, por atender exclusivamente a las

³ Por ejemplo, José Córdoba Montoya (1991: 41), según se sabe el segundo hombre del poder en el sexenio salinista, escribió una magnífica muestra del autoritarismo con el cual los neoliberales manejan la verdad única: “Resulta casi imposible sujetar las distintas medidas de liberalización comercial a una negociación precisa con la comunidad empresarial. Negociar las medidas es tanto como cancelar la apertura. El gradualismo es menos importante que la credibilidad. Cuando los empresarios se convencer de que no habrá oportunidad de revertir el proceso de liberalización comercial, pronto concentran sus esfuerzos en ajustarse a los nuevos patrones de producción.”

necesidades del capital, está ausente en las propuestas y acciones gubernamentales.

Antes de emprender la tarea de señalar las regularidades del modelo neoliberal, debemos recordar que todo modelo tiene características generales que lo identifican pero también, y además, adquiere peculiaridades propias de acuerdo con la realidad económica, política y social donde se aplica.

Hecha esta advertencia, resta señalar que la primera parte del presente trabajo se refiere a los aspectos teóricos y de estrategia económica que forman el núcleo duro del modelo neoliberal, para enseguida establecer las características que permiten diferenciarlo, tanto en sus propuestas teóricas como en sus formas de funcionamiento, de otros modelos económicos. Por último, nos referimos al neoliberalismo mexicano, sus peculiaridades, la manera como se ha impuesto y operado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, así como a sus efectos sociales y económicos en México tales como el crecimiento de la economía, la distribución del ingreso, el empleo, los salarios y, en particular, la generalización de la pobreza, tarea ésta en la que no ha fallado ninguno de los gobiernos neoliberales, para concluir con una breve mirada al futuro nacional.

I EL NEOLIBERALISMO

Antecedentes

A finales de la década de los setenta, la situación económica en el mundo suscitó una especie de generalizada desconfianza respecto de la capacidad del Estado para sostener el ritmo de crecimiento de la economía a tasas suficientes como para evitar la crisis en los países industrializados y permitir a los países dependientes cubrir sus pagos internacionales. Esto último aumentaba la preocupación entre las naciones desarrolladas dado que han sido y son las acreedoras exclusivas de las naciones empobrecidas.

La crisis, sin embargo, estalló por el agotamiento de la acumulación de capital sustentada en la creciente intervención estatal y la sobreproducción observada en los países de mayor industrialización. De esta manera, la crisis de los años setenta al mismo tiempo que económica resultó ser una crisis de regulación,⁴ en tanto que los instrumentos a disposición de los aparatos gubernamentales del Estado se mostraban incapaces como para frenar la profundización de la recesión y ofrecer la estabilidad necesaria al proceso de acumulación del capital.

En el aspecto teórico, en esa época se acentúa la crítica a los modelos económicos basados en la teoría de Keynes, o en alguna de sus variantes que enfatizaban la posibilidad de una estrategia eco-

⁴ "Por regulación entendemos no sólo el empleo de ciertos instrumentos o de determinadas políticas sino el mecanismo de operación de las leyes económicas y la relación entre ambos, y en un sentido más profundo, el sistema conforme al cual el capitalismo intenta asegurar la continuidad del proceso de la acumulación de capital en cada etapa de su desarrollo." (Aguilar, 1986: 32.)

nómica donde el Estado actuaba como agente activo y decisivo de la economía estimulando la demanda. En contraposición, se plantea otorgar la iniciativa a los particulares para hacer crecer la economía y alcanzar el equilibrio.

En la práctica, se pasa del empleo muy extendido hasta entonces de esquemas de planeación (inductiva o directiva) a considerar al mercado como mecanismo óptimo en la asignación de los recursos productivos, una de cuyas variantes es el neoliberalismo.⁵ En realidad, esta corriente como propuesta "teórica" nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial como una vehemente reacción, también política e ideológica, encabezada por Friedrich A. Hayek —hoy reconocido como el primer teórico del neoliberalismo— contra el Estado intervencionista y benefactor confundiendo al fascismo con el socialismo, identificándolos y convirtiéndolos en sistemas enemigos de la libertad individual.

La propuesta de Friedrich A. Hayek

Inglés de origen austriaco, Friedrich A. Hayek inició su carrera como investigador publicando obras de carácter esencialmente económico y sería hasta 1944 cuando diera a conocer su primera obra de filosofía económica y política: *Camino de servidumbre*.⁶

⁵ Otra es la teoría neoclásica, donde se considera que todos los agentes económicos son iguales (es decir, conocen a la perfección el mercado), totalmente racionales y su único objetivo es maximizar la ganancia actuando racionalmente en un mercado perfecto, es decir, sin intervención de ninguna especie.

⁶ Friedrich A. Hayek nace en Viena, Austria, el 8 de mayo de 1899. En 1917 y 1918 forma parte del ejército austro-húngaro, bajo el cual combate en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. Estudia en la Universidad de Viena, donde obtiene el doctorado en Jurisprudencia (1921) y el de Relaciones Políticas (1923). Desde estudiante, Hayek actuó como consultor legal del gobierno austriaco y encargado de la ejecución de las disposiciones del Tratado de Paz. En 1923, se traslada a Estados Unidos donde realiza estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York. De vuelta a Viena, se desempeña como director del Instituto Austriaco para la Investigación del Ciclo Económico y profesor en la Universidad de Viena impartiendo las materias de Economía y Estadística (1929-1931). A partir de 1931 y durante dos décadas, en Londres se dedica en la *London School of Economics and Political Science* a la docencia y la investigación en ciencias económicas. Desde 1950 y hasta 1962, es profesor de ciencia social y moral en la Universidad de Chicago. Concluye su vida académica en 1968 en la Universidad de Albert Ludwig de Friburgo, Alemania. Su obra fundamental, *Camino de servidumbre*

Las décadas de los años setenta y ochenta, vieron el renacimiento del pensamiento de Hayek. Por esos años, ya ningún responsable político del mundo consideraba necesario reforzar la intervención del Estado y, mucho menos, planificar la economía. Casi la totalidad de los gobernantes, en cambio, trataba de encontrar la mejor manera de liberar las fuerzas del mercado y privatizar todo aquello susceptible de serlo.

En *Camino de servidumbre*, Hayek señala que después del nacional-socialismo era preciso volver al sendero perdido. No hay que olvidar, decía, que los esfuerzos espontáneos y libres de los individuos determinan un sistema complejo de actividades económicas. En todos los casos en que fueron abolidos los obstáculos al libre ejercicio de la capacidad de los individuos, el hombre se volvió rápidamente capaz de satisfacer sus necesidades esenciales. En esta línea de pensamiento, concluye Hayek, no se puede reemplazar el mecanismo impersonal y anónimo del mercado por una dirección colectiva y "consciente" de todas las fuerzas sociales con el fin de llegar a objetivos predeterminados.

Además, el hecho de existir un conocimiento fragmentado, es decir, el que cada miembro de la sociedad tenga conocimiento de una parte mínima del saber poseído por el conjunto de la sociedad, significa que cada uno ignora la mayoría de los hechos sobre los cuales descansa el funcionamiento de la sociedad. Por eso, en tanto es imposible el conocimiento total de los hechos sociales —si ocurriera estaríamos hablando de una racionalidad perfecta, tal como lo plantean los economistas neoclásicos—, el Estado, o cualquier otra organización política, resulta incompetente para introducir cualquier forma de racionalidad en la economía. De otra manera dicho: "La planificación y el intervencionismo resultan ser métodos inferiores de coordinación de los esfuerzos humanos frente al sistema

(*The road to Serfdom*), publicada simultáneamente en Londres y Chicago en 1944, fue escrita originalmente en inglés y ha sido traducida a más de 10 idiomas. En 1974 comparte con Gunnar Myrdal el Premio Nóbel de Economía, "por ser los iniciadores de la teoría de las fluctuaciones monetarias y económicas, y por su penetrante análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales", según dictaminó la Academia Sueca de Ciencias.

No deja de llamar la atención que las ideas económicas que hoy tienen mayor influencia en el mundo del capitalismo, provengan de un académico juriconsulto y politólogo.

de precios en un régimen de competencia". (Guillén 1997: 14.) Por esa simple razón, los hombres deben dejar de reglamentar el conjunto de la vida social y evitar que cualquier forma de planeación suplante a la competencia.

Al respecto, Hayek (1944/1990: 65) explica:

El liberalismo económico se opone, pues, a que la competencia sea suplantada por métodos inferiores para coordinar los esfuerzos individuales. Y considera superior la competencia, no sólo porque en la mayor parte de las circunstancias es el método más eficiente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad.

La oposición a la planificación, advierte Hayek, no debe confundirse con "una dogmática actitud de *laissez faire*" (dejar hacer), tal como lo plantean los economistas neoclásicos. En otras palabras, Hayek (1944/1990: 65) reconoce la necesidad de algunas regulaciones gubernamentales. Por ejemplo:

El uso eficaz de la competencia como principio de organización social excluye ciertos tipos de intervención coercitiva en la vida económica, pero admite otros que a veces pueden ayudar muy considerablemente a su operación e incluso requiere ciertas formas de intervención oficial.

En todo caso, prohibir por parte de la autoridad el uso de sustancias tóxicas o exigir precauciones especiales para su utilización, limitar las horas de la jornada de trabajo, o demandar algunas instalaciones sanitarias, es algo absolutamente compatible con la preservación de la competencia.

De este modo, Hayek reconoce que no existe un sistema racionalmente operativo donde el Estado no tenga absolutamente nada que hacer. Pero el Estado debe limitarse a establecer reglas adaptadas a las condiciones generales, a las situaciones tipo, y debe garantizarle al individuo la libertad de acción en circunstancias específicas. Sólo el individuo puede conocer perfectamente las circunstancias particulares que le permiten moldear su propia conducta, es decir, la cuestión no es tanto el hecho de que el Estado interfiera en la economía advierte Hayek (1944/1990: 113), sino que:

Lo importante es si el individuo puede prever la acción del Estado y utilizar este conocimiento como un dato al establecer sus propios planes, lo que supone que el Estado no puede controlar el uso que se hace de sus instrumentos y que el individuo sabe con exactitud hasta dónde estará protegido contra la interferencia de los demás, o si el Estado está en situación de frustrar los esfuerzos individuales.

De esta propuesta, Hayek deriva la falta de razón de existir de los sindicatos. Para él, resulta fundamental que el acceso a los diferentes empleos se abra sin restricciones para todas las personas, y bajo las mismas condiciones. En consecuencia, la ley debe prohibir cualquier restricción al derecho al trabajo en una industria determinada y en la economía en su conjunto. En este marco, los sindicatos no tienen razón de existir, ni mucho menos de actuar sobre el mercado de trabajo porque constituyen un monopolio que, como todo monopolio, llega a provocar distorsiones en el mercado laboral.

Por otra parte, para Hayek resulta innecesario el control estatal del comercio exterior. El libre tránsito de las mercancías, dice, salva a los individuos de la tiranía del Estado. De este modo, la libertad de trabajo de los individuos y de circulación de las mercancías se convierten en los puntos centrales en las propuestas de Hayek, y evitar el monopolio su preocupación fundamental, incluso llega a decir que si la formación de un monopolio es inevitable, es necesario impedir por todos los medios posibles que éste caiga en manos del Estado, lo mejor sería dejarlo en manos privadas.

Muestra también Hayek una permanente preocupación por el "orden espontáneo" en la sociedad. Por "orden" entendemos siempre, dice Hayek, un estado de cosas en el que una multiplicidad de elementos de naturaleza diferente se encuentran en una relación tal, los unos con los otros, que podemos aprender a hacer pronósticos, conociendo ciertos componentes espaciales o temporales del conjunto, con fuertes probabilidades de que nuestros resultados sean correctos. (Guillén, 1997: 19.)

De esta manera, la cohesión de una sociedad libre no puede asegurarse mediante la fuerza ni mediante el poder, sino mediante leyes que reflejen el "orden espontáneo" de la sociedad. Estas leyes fijan los modelos de conducta que van a permitir una estabilidad razonable de la vida económica y social, con lo que su evolución se torna previsible para los individuos. No obstante, en la mayoría de

los casos, el gobierno se revela indispensable para vigilar que las reglas sean respetadas en tanto permiten conservar el orden social.

Por lo general, además de la tarea de hacer observar las reglas sobre las cuales queda establecido el orden, la sociedad demanda del gobierno la prestación de otros servicios que el "orden espontáneo" no puede suministrar adecuadamente. En este caso, cuando se analiza el papel del sector público es necesario tomar en cuenta dos aspectos. El primero es que por el hecho de que algunos servicios deban ser financiados mediante los impuestos, eso no implica que, necesariamente, dichos servicios deban ser administrados por el gobierno. Una vez resuelto el problema del financiamiento, "el método más eficaz será dejar que las empresas en competencia se encarguen de la organización y de la gerencia de estos servicios y basarse en las preferencias expresadas de alguna manera por los consumidores en cuanto a la manera de recolectar los fondos necesarios para los productores". (Guillén, 1997: 30.)

El segundo aspecto que no debe olvidarse al analizar al sector público, es que en el caso de los bienes colectivos resulta necesario echar mano de un método de abastecimiento considerado *inferior*, es decir, proporcionarlos mediante la acción gubernamental debido a que no se llegaron a reunir todas las condiciones que habrían permitido obtener estos servicios mediante el método más eficaz del mercado. (Por ejemplo, la baja tasa de ganancia, la cuantía de la inversión, o su recuperación a largo plazo.)

Respecto de la propiedad de los medios de producción, Hayek (1944/1990: 139) es contundente y en franca apología al individualismo y a la economía capitalista, sostiene que únicamente la propiedad privada garantiza la libertad, que se anula cuando los medios de producción se colectivizan:

El sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quienes no la tienen. No hay quien tenga poder completo sobre nosotros, y, como individuos, podemos decidir, en lo que hace a nosotros mismos, gracias tan sólo a que el dominio de los medios de producción está dividido entre muchas personas. Si todos los medios de producción estuvieran en una sola mano, fuese nominalmente la de la 'sociedad' o fuese la de un dictador, quien ejerciese ese dominio tendría un poder completo sobre nosotros.

En general, de la propuesta de Hayek resulta una actividad económica sustentada en el libre mercado y para que éste funcione adecuadamente, es decir, con todas las bondades que el propio Hayek le atribuye a este sistema, el gobierno debe mantener las mínimas y necesarias regulaciones, sin intervenir directamente en el proceso económico.

Los primeros pasos

En 1947, ya extendidas sus ideas aunque todavía con escasa aceptación, Hayek convoca a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña ciudad de Mont Pelérin, Suiza. Al llamado de Hayek acudieron, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robins, Ludwig Von Mises, Walter Lippman y Salvador de Madariaga.

Los asistentes a la reunión formaron la *Sociedad de Mont Pelérin*, "una suerte de francmasonería neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir al keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro, y libre de reglas para el futuro". (Anderson, 1995: 8.)

El trabajo de la *Sociedad* fue difícil en sus primeros tiempos, dado que el capitalismo estaba entrando a una larga fase de auge sin precedentes. Las décadas de los cincuenta y los sesenta presentan el crecimiento más rápido de la historia de este modo de producción, lo cual hacía poco verosímiles los anuncios neoliberales respecto del "riesgo" que representaba la intervención del Estado en la economía. Sólo al momento del estallido de la crisis de finales de los sesenta, el modelo "estatista" keynesiano se vio sometido a una severa crítica:

La llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra en 1973, cuando todo el mundo capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, combinando, por primera vez, bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, todo cambió. A partir de ahí las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas.

tivas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales. (Anderson, 1995: 8)

Todo ello presupone una propuesta de modernización del Estado, ya que —se argumenta— las políticas benefactoras generaron un sistema asistencialista costoso, responsable del despilfarro y el malgasto de los recursos estatales. Así:

El neoliberalismo puso en duda el manejo del estado asistencial (benefactor) denunciándolo como costoso, centralista e ineficiente y responsable del estancamiento, así como del carácter desestabilizador de las tendencias igualitarias que planteaba. Dado el peso que adquirió la intervención estatal en la economía y en los aspectos político-sociales, a juicio del neoliberalismo las decisiones perdieron su racionalidad; éstas fueron el resultado de negociaciones y de acuerdos políticos que alteraron por lo mismo la gestión gubernamental. (Jiménez, 1992: 58)

Frente a la crisis que desbordaba rápidamente los mecanismos regulatorios, la intervención estatal en la economía empezó a perder legitimidad, lo cual significó la búsqueda de nuevos paradigmas en algunos casos para su aplicación en aras de superar las dificultades económicas y, en otros, como respuesta ideológica al estatismo y, sobre todo, al socialismo soviético cuya influencia crecía en el mundo subdesarrollado.

Los primeros ensayos neoliberales de aplicación concreta se produjeron en Chile, después del golpe de Estado militar ocurrido el 11 de septiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet, contra Salvador Allende; en Uruguay, después de 1974 y en Argentina, a partir de 1976, con la instauración de la dictadura más sangrienta que se recuerda en este país. La implantación del modelo fue acometida por gobiernos militares, autoritarios y con distintos resultados. (Foxley, 1982: 5.) Sin embargo, será en la década de los ochenta cuando se generaliza su aplicación en Latinoamérica y en buena parte de los países más desarrollados de Europa por la vía de la democracia electoral.⁷

⁷ En 1979, en Inglaterra fue elegido el gobierno de Margaret Thatcher, “el primer régimen de un país capitalista avanzado empeñado en poner en práctica un pro-

El hecho de que en América Latina hayan sido gobiernos militares los que aplicaron los primeros programas neoliberales, deja entrever una situación que conviene señalar para evitar una confusión respecto de uno de los rasgos esenciales del neoliberalismo. Este modelo para su operación requiere de un Estado fuerte capaz de reprimir, por cualquier medio, el descontento social que pudiera provocar el ajuste económico, o utilizar “todo su poder” para enfrentar a quienes se oponen al modelo y la política neoliberales; pero a la vez, paradójicamente quizá, se requiere de un Estado parco, muy parco sobre todo en lo referente a los gastos sociales y limitado severamente en sus posibilidades de intervención en la economía, aunque capaz de regular el eficiente funcionamiento del mercado.

Fundamentos ideológicos del modelo neoliberal

El neoliberalismo se propone, explícitamente, alcanzar a través del libre funcionamiento del mercado la máxima eficiencia productiva y la asignación óptima de los factores de la producción, nunca la satisfacción de las necesidades sociales.

Su filosofía es el llamado individualismo *egoísta-utilitarista* pregonado desde el siglo XVIII por autores como Adam Smith (Escocia, 1723-1790) y Jeremy Bentham (Inglaterra, 1748-1832), donde los individuos movidos más por el egoísmo que por cualquier otra razón resultan capaces de colaborar entre sí en procesos voluntarios de intercambio si ambas partes obtienen los beneficios que cada una de ellas espera alcanzar, convirtiéndose el mercado el sitio donde todos los individuos pueden lograr los máximos beneficios.

En este sentido, para Adam Smith (1776/1961: 18), por ejemplo:

El hombre necesita casi constantemente de la ayuda de sus semejantes, y sería inútil que la esperase únicamente de su benevolencia.

grama neoliberal”. Un año más tarde, en 1980, Ronald Reagan llega a la presidencia de Estados Unidos. En 1982, Helmut Kohl derrotó al régimen social-liberal de Helmut Schmidt en Alemania. En 1983, en Dinamarca, Estado modelo del bienestar escandinavo, cayó bajo el control de una coalición derechista con un programa económico neoliberal. “En seguida, casi todos los países del Norte de Europa, con excepción de Suecia y Austria, también viraron a la derecha neoliberal”. (Anderson, 1995: 8/9) Para conocer las primeras medidas de los gobiernos neoliberales en Europa pude consultarse Owers y Coelen, 1986: 45 y ss.

cia. Es más probable que la consiga si logra interesar en favor suyo el egoísmo de los demás [...] No esperamos nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero; la esperamos del cuidado que ellos tienen de su propio interés. No nos dirigimos a su sentimiento humanitario, sino a su egoísmo, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos lograrán.

Por su parte, Jeremy Bentham señala como base de la vida social y principio supremo de la moral la *utilidad*. La moral, el derecho y todas las relaciones sociales, incluida la economía, descansan en el principio utilitario que acepta todo aquello que es motivo de placer y rechaza lo que causa sufrimiento.⁸ “La naturaleza, decía Bentham, ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el placer y el dolor” (Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, citado por Lekachman, 1959: 117) y agrega que el principio de utilidad es el fundamento de su obra, donde “se especifica que cada acción, sea cual fuere, se aprueba o desaprueba de acuerdo con la tendencia que aumenta o disminuye la felicidad”.

Estimaba Bentham que, desde el punto de vista utilitario, todo se reduce a una suma *placeres y penas*, “cuyo saldo dará la tendencia del hecho, si es favorable al placer, la tendencia es buena respecto a los intereses personales de ese individuo; si está del lado de los pesares, la tendencia es mala”.

En este marco, el *dejar hacer-dejar pasar* resulta fundamental. El mercado, si funciona libremente, es decir, sin interferencia o restricciones resulta suficiente por sí solo tanto para garantizar la eficiencia óptima en la asignación de los recursos y el crecimiento con pleno empleo a largo plazo, como la realización de los intereses personales tendientes al placer, cuya suma pudiera permitir la realización del bien social: “Nosotros, dice Adam Smith (1776/1991: 377), estamos muy seguros de que la libertad de comercio nos proporcionará siempre el vino que necesitamos, sin que el Gobierno se preocupe de ello”.

⁸ Bioy Casares, en su obra *Plan de evasión*, se refiere a Jeremy Bentham considerando como “economista, filósofo y jurisconsulto inglés (1748-1832), fundador de la escuela *utilitaria*, según la cual el interés es el único móvil de todas las acciones humanas”.

El libre juego de las fuerzas del mercado (la oferta y la demanda), garantiza entonces el equilibrio del propio mercado y, en consecuencia, la intervención del Estado sólo altera el funcionamiento del mecanismo de fijación de los precios, distorsiona la aplicación de recursos haciéndola ineficiente y resulta en elevados costos económicos y políticos.⁹

En consecuencia, para los pensadores liberales, como posteriormente para los neoliberales, el Estado debe encargarse exclusivamente de garantizar la seguridad nacional y la paz interna.

Nuevamente en palabras de Adam Smith (1776/1961: 601):

De acuerdo con este sistema de libertad natural, el soberano sólo tiene que atender a tres obligaciones, que son, sin duda, de grandísima importancia, pero que se hallan al alcance y a la comprensión de una inteligencia corriente: primera, la obligación de proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes; segunda, la obligación de proteger hasta donde eso es posible, a cada uno de los miembros de la sociedad de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de la misma, es decir, la obligación de establecer una exacta administración de la justicia; y tercera, la obligación de realizar y conservar determinadas obras públicas y determinadas instituciones públicas, cuya realización y mantenimiento no pueden ser nunca de interés para un individuo particular o para un pequeño número de individuos, porque el beneficio de las mismas

⁹ Para autores como Milton y Rose Friedman (1980/1983: 97), la creciente intervención del Estado “ha significado un coste en términos económicos. Las limitaciones que esta actuación impone a nuestra libertad económica amenazan con liquidar dos siglos de progreso económico. La intervención ha tenido también un coste político: ha limitado considerablemente nuestra libertad humana”, dados los enormes y complicados controles burocráticos que impiden el libre desarrollo de las actividades de los hombres y las empresas. (Friedman, 1980/1983: 97.) Entre otros, los ejemplos a los que recurren Milton y Rose Friedman para sustentar su afirmación, son los siguientes: “Nuestro médico de cabecera no es libre para recetarnos muchos fármacos que puede considerar los más adecuados para nuestras dolencias, aun cuando esos fármacos puedan comprarse fácilmente en el exterior. Carecemos de libertad para comprar un coche sin cinturones de seguridad.” (Friedman, 1980/1983: 99.) O bien: “No somos libres de abrir un banco, entrar en la industria del taxi, o en la venta de electricidad o de servicio telefónico, o explotar una línea de ferrocarril, autobús o aérea, sin antes recibir una autorización de un funcionario gubernamental.” (Friedman, 1980/1983: 100.)

no podría nunca rembolsar de su gasto a ningún individuo particular o a ningún pequeño grupo de individuos, aunque con frecuencia rembolsan con gran exceso a una gran sociedad.

Bajo esta óptica, el Estado es espectador no-protagonista de la actividad productiva y, por tanto, debe tener una política económica pasiva, lo que incluye una activa política de desregulación "para reducir las trabas económicas y privatizar toda la economía pública" (Villarreal, 1993: 305) con el fin de garantizar y fortalecer el buen funcionamiento del mercado. Esto implica, por supuesto, que las empresas públicas no tengan lugar en la economía y de existir, todas sin excepción, deben privatizarse.

Un aspecto al que los economistas neoliberales prestan la mayor atención, en tanto deriva de la acción gubernamental, es la inflación. Para ellos, ésta es siempre un fenómeno monetario. Por ejemplo, Milton y Rose Friedman (1980/1983: 353) reconocen la inflación como "una enfermedad muchas veces fatal" que ataca por igual a naciones de economía capitalista como socialista, o de diferente nivel de desarrollo, y enfatizan que ese proceso es "en el mundo moderno, un fenómeno relacionado con la impresión de billetes", y agregan que reconocer la inflación como "un fenómeno monetario representa sólo el inicio de una comprensión de sus causas y soluciones".

La causa del proceso inflacionario creen verla estos autores en un aumento del dinero más rápido que el incremento de la oferta de bienes y servicios: "Cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta", y concluyen afirmando que "probablemente no existe en economía una proposición tan bien establecida como ésta".

Conocida la causa, el remedio surge casi de manera natural: "Del mismo modo que un aumento excesivo en la cantidad de dinero es la única causa importante de la inflación, la reducción de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es el único remedio para eliminarla". (Friedman, 1980/1983: 372.)¹⁰ Además, agregan los Friedman, que los excesivos gastos del gobierno en su empeño por intervenir tratando de lograr la ocupación plena y emitiendo canti-

¹⁰ Aplicada esta receta en México, en el primer trimestre del 2001 el retiro de dinero de la circulación (llamado "corto") ascendía a 400 millones de pesos diarios.

dades crecientes de dinero para financiar su gasto, forman parte también de los orígenes de la inflación.¹¹

En consecuencia, una de las propuestas privilegiadas por la estrategia neoliberal para contener la inflación es mantener presupuestos públicos equilibrados, cuando no superavitarios. Y como la filosofía implícita en este enfoque es una especie de *darwinismo* social (la sobrevivencia del más apto), se reducen de manera significativa los gastos gubernamentales destinados a la educación, la salud, la vivienda, la recreación y la alimentación, con el fin de obligar a su privatización pues se considera que todas esas necesidades, al final de cuentas, son individuales y pueden solventarse en el mercado. En este caso, el Estado sólo debe crear el marco legal para la operación de las empresas que atienden esas demandas.¹² De esta mane-

¹¹ En México, los economistas neoliberales aceptan y aplican este tipo de propuestas y, siguiendo la Ley de Say ("Toda oferta crea su propia demanda"), pretenden explicar la inflación y, al mismo tiempo, justificar su rechazo a la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, Carlos Jarque y Luis Téllez (1993: 30), afirman: "En general, el déficit del sector público es el componente de la demanda agregada que hace que ésta supere las posibilidades de producción de la economía y que ejerza presión sobre los precios", y ofrecen la siguiente explicación: "El gasto en *consumo privado* se financia con el pago que se hace a los factores de la producción (sueldos y salarios a los trabajadores, pagos al capital, etc.), de tal manera que lo que se está generando en valor de la producción por un lado, se consume por el otro, siendo el valor total del consumo equiparable con una fracción del valor de la producción. De esta forma, el gasto en consumo agregado no ejerce presiones inflacionarias por no ser la demanda en este rubro mayor a la oferta total. Por otra parte, la *inversión privada* se financia con utilidades retenidas o con créditos otorgados por el sector bancario. Estos créditos tienen su contrapartida en el ahorro que se obtuvo en la economía y nuevamente es un porcentaje del ingreso que se generó en ésta [...] Por lo tanto, estos dos componentes de la demanda agregada no son los que originan una inflación de demanda [...] La inflación de demanda se debe a un desbordamiento del gasto del gobierno y, por consiguiente, a un alto déficit fiscal."

¹² Por ejemplo, Milton y Rosa Friedman (1980/1983: 214), aseguran que: "El papel del Estado, cada vez mayor, ha tenido muchos de esos efectos adversos tanto en la enseñanza superior como en la primaria y secundaria. Ha fomentado una atmósfera que tanto los enseñantes interesados como los estudiantes serios encuentran con frecuencia adversa al aprendizaje". Y, más adelante (Friedman 1980/1983: 256-257), afirman: "Creemos que el papel creciente desempeñado por el Estado en la financiación y administración de la enseñanza ha llevado no sólo a una enorme pérdida de dinero en los contribuyentes, sino también a un sistema educativo mucho peor que el que podría haberse desarrollado de haber tenido un papel más importante la cooperación voluntaria". En consecuencia, estos autores recomiendan

ra, la educación y la salud dejan de ser derechos sociales para convertirse en mercancías únicamente al alcance de la población con ingresos suficientes como para adquirirlas.

Por su parte, el gasto público además de ser equilibrado, jamás debe utilizarse como instrumento para reactivar la demanda (tal como proponen los keynesianos), ya que eso provocaría presiones inflacionarias. Más bien, el gobierno debe orientar sus acciones y su gasto a la atención de aquellas carencias que los empresarios no pueden, o no quieren atender, en tanto que la tasa de ganancia implicada en las actividades para satisfacerlas es muy baja, o su recuperación es a largo plazo, lo cual las hace poco atractivas al capital privado.

También bajo el neoliberalismo, las políticas sectoriales —industrial, agropecuaria o de cualquier otro tipo— carecen de importancia, o son francamente inexistentes, pues se considera que cuando el gobierno apoya o estimula una u otra actividad provoca distorsiones en el libre juego de las fuerzas del mercado, en otras palabras, es actuar en contra de la igualdad de oportunidades que ofrece el mercado. “Bajo el neoliberalismo la política sectorial no existe porque constituye una intromisión en el ‘correcto’ funcionamiento que provee la ‘mano invisible’. De haber intervención, ésta sólo produciría ineficiencias” (Villarreal, 1993: 296), además de crear privilegios a favor de unas empresas o personas, marginando a otras. Esto, incluso, podría significar que mediante el apoyo gubernamental algunas empresas ineficientes se mantuvieran en el mercado, lo cual, además de ser injusto para aquellas firmas que logran permanecer en la actividad productiva mediante su modernización y eficacia productiva, distorsionaría el funcionamiento del mercado donde no caben las ineficiencias.

Desde esta óptica, el Estado es concebido apenas como un mero instrumento necesario para lograr el funcionamiento eficiente del mercado y alentar la iniciativa individual en el uso de los recursos. En este sentido, dice Samir Amín (1999: 31): “Para funcionar, el capitalismo requiere la intervención de una autoridad colectiva que

que el Estado deje la **industria educativa** en manos de particulares, y en ese mercado libre educativo: “sólo sobrevivirían las escuelas que satisficieran a sus clientes; del mismo modo que sólo continúan los restaurantes y los bares que agradan a sus clientes. La competencia se ocuparía de ello”. (Friedman, 1980/1983: 236-237.)

represente al capital globalmente considerado. De ahí que no pueda separarse al Estado del capitalismo.”

Por último, aun y cuando no al final, para los economistas neoliberales —coincidiendo en este punto específico con la escuela neoclásica—, la flexibilidad de los salarios, de los precios y las tasas de interés asegura el mecanismo natural que conduce, tarde o temprano, al equilibrio y la ocupación plena. En otras palabras, en un mundo donde no existan sindicatos (que actúan como monopolios de la oferta de trabajo), o instituciones gubernamentales que fijen los salarios al margen de la productividad marginal; ni monopolios que determinen los precios de los bienes y servicios de acuerdo a su conveniencia y por encima de las fuerzas del mercado; y que, por el contrario, la tasa de interés se fije libremente a un nivel que aliente un monto de ahorro tal que en su totalidad se destine a la inversión, el equilibrio general de la economía estará asegurado, lo mismo que la ocupación plena.

Con estos criterios, la desocupación siempre resulta ser temporal (incluso voluntaria, si los trabajadores no aceptan ocuparse con el salario que corresponde a su productividad marginal), y la ocupación plena se alcanzará cuando el ajuste de la economía permita el equilibrio macroeconómico y se evite la inflación, propósitos estos contenidos en toda estrategia que se precie de neoliberal.

Imposición de la razón económica

Una de las peculiaridades destacadas del neoliberalismo es la imposición de la económica como la razón suprema de la actividad humana, es decir, si algo novedoso —que no virtuoso— tiene el neoliberalismo, resulta ser su propuesta del predominio de lo económico sobre lo político o social. En todos sentidos, el neoliberalismo, resulta un modelo estrictamente economicista, con todas las consecuencias sociales que esto pueda significar.

Los panegiristas del neoliberalismo sostienen la idea de que el modo de producción capitalista es la expresión más elevada de la racionalidad económica. Al respecto, un conocido economista norteamericano (Heilbroner, 1997: 67), escribe: “Nunca ha existido un mecanismo social para el progreso económico sostenido como el de la acumulación capitalista”, y destaca lleno de admiración la capa-

cidad de autotransformación que tiene el capitalismo. En esta misma línea de pensamiento, muchos empresarios y quienes los representan ideológicamente consideran al modo de producción capitalista no sólo como la expresión más alta de la organización económica sino, por eso mismo, inamovible pues representa el "fin de la Historia"¹³ y por lo tanto, una vez establecido en todo el mundo, jamás desaparecerá porque se sustenta en algo sustancial a los individuos: la búsqueda permanente de la ganancia en cualesquiera de sus formas. De esta manera, la asunción acrítica que presupone razonar dentro de un sistema cerrado, implica una fe ciega en el neoliberalismo y sus soluciones. En efecto, diría Fukuyama (1994: 14): "La democracia liberal es la única aspiración política coherente que abarca las diferentes culturas y regiones del planeta."

En estos términos, el mercado y la ganancia se convierten en los ejes ordenadores no sólo de la actividad económica, sino también la vida social y política. En estos tiempos, escribe Vivian Forrester (1998: 23), bajo el neoliberalismo:

Todo se organiza, prohíbe y realiza en función de la ganancia, que por lo tanto parece ser insoslayable, unida al meollo mismo de la vida hasta el punto que no se la distingue de ella. Opera a la vista de todos, pero no se la percibe. Aparece activamente por todas partes pero jamás se la menciona a no ser bajo la forma de esas púdicas "creaciones de riquezas" consideradas beneficiosas para toda la especie humana y proveedoras de multitudes de puestos de trabajo. Por consiguiente, todo cuanto afecta a esas riquezas es criminal.

En consecuencia, ninguna acción que pueda reducir la ganancia, o afectar el libre funcionamiento del mercado, debe emprenderse, pues nos alejarían de la sociedad civilizada y democrática. Por lo tanto, el país, sus regiones y sus habitantes (sobre todo los trabajadores), deben adecuarse y prepararse para atraer a las inversiones

¹³ En su momento escribiría Fukuyama (1990): "Lo que nosotros estamos atestiguando no es sólo el final de la Guerra Fría o el de un periodo particular de la historia de la posguerra a otro, sino el fin de la historia como tal; es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma decisiva del gobierno humano." Así no sólo el capitalismo es inmortal, sino que, además, el neoliberalismo llegó para quedarse.

extranjerías, y en un mundo tan competido resulta preciso sacrificarlo todo (los trabajadores, por ejemplo, salarios y prestaciones), pues se dice que detrás de ellas llegan el bienestar y la civilización, el Primer Mundo y sus manes.

Para George Soros (1999: 147), el multimillonario especulador, las cosas son más sencillas y contundentes: en estos tiempos, afirma, "no es una exageración decir que el dinero regula la vida de las personas en mayor grado que nunca".

De esta manera, al prevalecer la razón económica sobre la política, la lógica de aquélla secuestra la de ésta. La ganancia y la afanosa búsqueda de dinero "porque nos ofrece las más amplias posibilidades de elección en el goce de los frutos de nuestros esfuerzos" (Hayek, 1944/1990: 123), condicionan la vida individual y colectiva.

Bajo estas condiciones, el combate a la inflación, la ganancia y la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos, en otras palabras la acumulación de capital se impone a cualquier precio y sustituye a los propósitos del desarrollo económico y el bienestar de la población mayoritaria como preocupación fundamental y justificación de la actividad económica.

Características generales de la estrategia económica neoliberal

René Villarreal (1993: 288), reconoce "tres políticas generales, como la apertura, la privatización y la desregulación, que pueden ser caracterizadas en principio como líneas de política neoliberal".

Por su parte, según Gert Rosenthal, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existe un amplio consenso respecto de la caracterización como *neoliberales* de las políticas puestas en práctica, a partir del decenio de los ochenta, en la mayor parte de los países latinoamericanos.

Los rasgos comunes de estas políticas, señala Rosenthal (1996: 2), son los siguientes:

Una manifiesta tendencia hacia la liberalización, mayor confianza en las fuerzas del mercado como el principal mecanismo de asignación de recursos, menor intervención de las políticas públicas y mayor coherencia en la formulación de las políticas macroeconómicas. En otras palabras, así como la crisis de los años treinta dio origen a la sustitución de las importaciones y a una mayor in-

tervención del sector público, la crisis de los años ochenta marcó el comienzo de un desplazamiento hacia economías más abiertas y orientadas hacia el mercado.

Manuel Aguilera Verduzco (1992: 79-80), señala que el esquema neoliberal, denominado también *economía de la oferta* “en contraposición a una interpretación parcial de la teoría general (de Keynes) que la caracteriza como un sistema de política económica orientado exclusivamente al análisis de la demanda”, tiene varios elementos característicos en su diseño y aplicación:

Primeramente, la política económica ha procurado mejorar el funcionamiento de los diferentes mercados (financiero, de trabajo y de bienes y servicios), reduciendo y, en algunos casos, eliminando los controles gubernamentales. En segundo término, el diseño de la política económica en este contexto ha reducido el control estatal sobre los recursos económicos y sobre su asignación, a través del proceso de *privatización* de empresas públicas. En tercer término, la política tributaria se ha orientado fuertemente a impulsar, por medio de reducciones en el pago de impuestos, el proceso privado de ahorro-inversión, entendido causalmente en ese sentido. Y en cuarto lugar, la política neoliberal ha actuado firmemente para tratar de reducir la capacidad negociadora de los sindicatos obreros frente a las empresas.

A su vez, el norteamericano Perry Anderson (1995: 9) advierte que la “prioridad inmediata del neoliberalismo era detener la inflación de los años setenta, para lo cual, por ejemplo, los gobiernos de corte neoliberal en Europa, encabezados por la Inglaterra de Margaret Thatcher, y por supuesto también la mayor parte de los latinoamericanos:

Contrajeron la emisión monetaria, elevaron las tasas de interés, bajaron drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolieron los controles sobre los flujos financieros, crearon niveles de desempleo masivos, aplastaron huelgas, impusieron una nueva legislación anti-sindical y cortaron los gastos sociales. Y finalmente —esa fue una medida sorprendentemente tardía— se lanzaron a un amplio programa de privatización, comenzando con la vivienda pública y pasando enseguida a las industrias básicas, como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el agua.

Para Alejandro Foxley (1982: 6), los programas de estabilización con los que se inició el tiempo de las políticas neoliberales, sobre todo en Latinoamérica, consistieron en la reducción de los gastos gubernamentales, un menor crecimiento de la oferta monetaria, la devaluación de la moneda nacional y “una política de liberación de precios, de manera que el mercado se transformara en el principal mecanismo de asignación de recursos”. En síntesis, enfatiza Foxley: “La apertura de la economía al comercio internacional y a los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y la drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía constituyen elementos fundamentales de los nuevos programas” neoliberales en América Latina, rasgos que, sobre todo, son formulados e impuestos por los organismos financieros internacionales.

En general, con la aparición y consolidación de este nuevo modelo económico sustentado en el mercado concluye en los países dependientes la época de una economía orientada a lograr el desarrollo económico (o de *crecimiento hacia adentro*), para ser sustituida por otra donde el ajuste estructural orienta la actividad económica a procurar su inserción en la globalización (es decir, impulsar su *crecimiento hacia afuera*) y hacerla capaz de cubrir el pago de los adeudos adquiridos con los centros financieros del Primer Mundo, propósito que se convertía en prioridad indiscutible de los países subdesarrollados.

La orientación *hacia afuera* de nuestras economías, advierte Hans Singer, ha permitido a los países en desarrollo más que lograr una solución a sus problemas económicos estructurales, “contar con los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos financieros derivados del servicio de su deuda externa” (citado por Aguilera, 1992: 91), situación que se mantiene al iniciarse el siglo XXI.

*La modernización conservadora*¹⁴

Con el propósito de mostrar los orígenes históricos de la estrategia neoliberal, conviene recordar la manera en que fue impuesta en Es-

¹⁴ “Usualmente la palabra modernización se asigna a los procesos de cambio y comprende una diversidad de transformaciones, que han encarnado preferentemente en medidas gubernativas tales como la privatización, des-regulación y liberalización. [De esta manera] La modernización es abordada como un mecanismo de superación de la crisis y un remedio general de los males de la época actual”. (Guerrero, 1992: 7)

tados Unidos de Norteamérica por Ronald Reagan puesto que ésta se convirtió en el prototipo de las reformas estructurales aplicadas en América Latina.

A principios de 1981, inmediatamente después de haber tomado posesión como presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan propuso al Congreso de su país un "Programa para la Recuperación Económica", con tres objetivos clave:

- a. Estabilización de la economía;
- b. Reducción de la tasa de inflación; y
- c. Recuperación del crecimiento económico.

Explícitamente, el programa se dirigía a redistribuir el ingreso a favor de los sectores más ricos de la población, "que —se decía— después los invertirían para generar más riqueza para todos". Al efecto, se redujo el límite máximo del impuesto sobre la renta a 30 por ciento, garantizando con ello a los ingresos más altos mayores recursos para su libre expansión.

El plan de Reagan señalaba, también, que la regulación se había convertido en una maraña de códigos cuyo resultado eran precios altos, mayor desempleo y menor productividad; en consecuencia, se determinó limitar la acción reguladora aunque no suprimirla en tanto permitiera la acción eficiente del mercado.

Por último, el plan invocó la política monetarista para combatir la inflación. La menor oferta de dinero tenía un papel determinante en evitarla. Al respecto, Reagan explicó al Congreso su propuesta de la siguiente manera: "Un programa exitoso en alcanzar pautas de crecimiento estables y moderadas, fundamentado en la restricción del dinero, mantendrá bajas la inflación y las tasas de interés y restaurará el vigor de nuestras instituciones financieras y mercados." (Citado por Dos Santos, 1999: 515.)

Arregladas, desde su punto de vista, las cosas en el interior y "en cumplimiento de las tareas encargadas a Estados Unidos por la Providencia", Ronald Reagan se dispuso a poner orden en el mundo y para hacerlo señaló:

Me gustaría ver menor transferencia de recursos y más de aquello que llamamos construcción de instituciones y transferencia tecnológica [...] Las políticas, los programas, la voluntad del Tercer Mundo son los que impulsarán el tipo de progreso que éste necesita y merece (Citado por Dos Santos, 1999: 516).

En otras palabras, nada de recursos económicos destinados a los países subdesarrollados para que éstos los utilizaran de acuerdo con sus propios intereses y necesidades, sino más dependencia e imposición de instituciones, políticas y programas decididos en la metrópoli del capitalismo mundial y operados por los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En efecto, Samir Amín (1999: 28) señala enfático: "Con la llegada al poder de Ronald Reagan y su evangelio de doctrinas neoliberales extremas, dichas instituciones se convirtieron instantáneamente al neoliberalismo", conversión que se concretó con "un simple y universal programa de actuación", conocido como "Programa de Ajuste Estructural".

El traslado del programa de ajuste para imponer el libre mercado en los países del Tercer Mundo, siguiendo a Theotonio Dos Santos (1999: 517 y ss.), puede sintetizarse de la siguiente manera:

1. Se impuso como objetivo central de la estrategia económica el combate a la inflación, para lo cual se diseñó una política de tipo monetarista con metas de control de emisión de moneda, elevación de las tasas de interés y restricción del consumo impidiendo el crecimiento real de los sueldos y salarios.
2. Se aplicó un férreo control y recorte del gasto público, primero de la inversión, luego del gasto corriente y, por fin, en los renglones sociales con el propósito de evitar una reforma fiscal a fondo que gravara a los sectores de mayores ingresos.
3. Mediante las devaluaciones cambiarias permanentes y la reducción del ritmo de crecimiento, se alentó la creación de superávits comerciales en los países del Tercer Mundo con el fin de utilizarlos en el pago del servicio de la deuda externa.
4. Se presionó con mucha fuerza la privatización del patrimonio estatal para generar liquidez y transferir al capital financiero internacional, mediante elevadas tasas de interés y el servicio de la deuda, los excedentes acumulados en reservas y los fondos derivados de las privatizaciones.¹⁵

De esta manera, la nueva estrategia neoliberal al desplazar el keynesianismo y convertir al mercado sin regulación en el para-

¹⁵ Estos puntos fueron el sustento de lo se conoce como la acción estatal "por el lado de la oferta" (*supply-side*), con la que se sustituyeron las políticas keynesianas de fortalecimiento de la demanda.

digma hegemónico, hizo del combate a la inflación, mediante el control de la demanda y el equilibrio presupuestal, el eje de toda la acción estatal, abandonándose así los propósitos de crecimiento y distribución como fines de la intervención del Estado en la economía.

A fines de los setenta y principios de los ochenta, estalla la crisis de la deuda vinculada al deterioro fiscal del Estado de Bienestar, lo cual alienta la ofensiva contra el Estado y facilita la dogmática imposición del ajuste estructural en América Latina. No obstante, la propia crisis significó el fortalecimiento del Estado en tanto fue necesaria su presencia para controlar el estallido social dado el rápido deterioro de los niveles de vida, pero sobre todo para asegurar los recursos necesarios para el pago de los vencimientos e intereses al capital financiero internacional. El Estado así, se ofrecía al capital financiero trasnacional como un interlocutor válido en el proceso de reestructuración de la deuda y como el mejor garante de su pago mediante la apresurada apertura financiera y comercial, atrayendo al capital especulativo con altas tasas de interés y alentando el establecimiento de empresas trasnacionales exportadoras, o maquiladoras, a través de la creación de ventajas competitivas y, particularmente, privatizando los activos gubernamentales.¹⁶

¹⁶ En efecto, cuando los países del Tercer Mundo se endeudaron al grado de no poder cubrir los vencimientos e intereses de sus créditos externos, es decir, al momento de la devaluación de la deuda del Tercer Mundo, el gran capital, el principal acreedor de nuestros países, busca una salida que lo favorezca y "propone e impone (en nombre del libre mercado) que los estados nacionales se deshagan de su patrimonio para pagar sus deudas, dando sustancia así a una parte de los enormes excedentes especulativos sobrantes en escala mundial. De esta forma, documentos inútiles y sin valor reciben el respaldo de bienes públicos que se convierten en patrimonio de especuladores financieros. Este es claramente el principio que orienta las llamadas 'conversiones' de la deuda externa. Por medio de ellas, los documentos devaluados de los bancos, supuestos valores de deudas, se convierten en empresas y bienes sustraídos del sector público. Una forma ideal de evitar la quiebra general de los bancos y de las empresas privadas sería remplazarlas por la quiebra de los Estados. (Cosa que ya ocurre en muchos casos.) Es mucho más difícil obligar a los contribuyentes a aceptar la idea de apoyar indefinidamente a las empresas y a los bancos en quiebra. Ante todo porque cada año aumenta el volumen de esas bancarrotas y disminuye la posibilidad de que el Estado las financie [...] Se trata, pues, de un neoliberalismo del capitalismo monopolista de Estado que consiste en el aumento de la intervención estatal para garantizar la sobrevivencia del capital, sobre todo de los grandes monopolios y del capital financiero. Cuando se trata de defender estos intereses, la economía de mercado se manda a pasear, pues no cabe

Las consecuencias de la política de ajuste estructural fueron poco menos que desastrosas y, de acuerdo con Samir Amín (1999: 28), su puesta en marcha significó:

Un fuerte incremento del desempleo; un descenso en la remuneración salarial; un aumento de la dependencia alimentaria; un grave deterioro del medio ambiente; un deterioro de los sistemas de atención sanitaria; una disminución notoria de la capacidad productiva de muchas naciones; el sabotaje de los sistemas democráticos, y el crecimiento continuado de la deuda externa.

Un análisis, incluso sin mucha profundidad, de la situación de la economía mexicana bajo el neoliberalismo, avalaría puntualmente las conclusiones de Samir Amín y agregaría la ampliación de la pobreza social y regional, así como la agudización de la crisis en el campo y la creciente pérdida de soberanía.

Ante la gravedad de la situación debido al fracaso de las primeras acciones neoliberales, se modificó la propuesta económica inicial a seguir en los países del Tercer Mundo y se "abrió la vía a una nueva fase de las economías de la región, basada en monedas vigorosas, déficit comercial y atracción de capitales financieros. México adoptó este modelo completamente, le siguió Argentina y después Brasil" (Dos Santos, 1999: 518) y aunque si bien en esos países se fortaleció la macroeconomía (se equilibraron las finanzas públicas y, temporalmente, se contuvo la inflación y se corrigió el déficit de la balanza comercial), las condiciones de desempleo, deterioro salarial y desigualdad en la distribución de la riqueza, es decir, de pobreza de buena parte de la población, no sólo se mantuvieron sino que, en muchos casos, se extendieron y profundizaron.

El modelo neoliberal. Sus principales rasgos

De todo lo visto, podemos reunir los rasgos comunes del modelo neoliberal y sus principales propuestas económicas, en los siguientes grandes rubros:

en el mundo de los monopolios, oligopolios y corporaciones trasnacionales que dominan la vida económica de nuestros días." (Dos Santos, 1999: 524.)

1. El libre funcionamiento del mercado se considera como el instrumento único, por ser el más eficaz, para la asignación de los recursos productivos en la actividad económica.
2. Apertura total e irrestricta del país a las mercancías y los flujos de capital internacionales.
3. Reducción de la injerencia del Estado en la actividad económica, lo cual implica:
 - a. disminuir el gasto público para mantener el equilibrio de las finanzas gubernamentales;
 - b. menor influencia de las políticas públicas en la economía;
 - c. privatización de todos los activos gubernamentales y las empresas públicas;
 - d. desregulación de la economía; y
 - e. eliminación de toda política para actuar en la economía, diseñada y aplicada por el Estado.
4. La única acción legítima del Estado es permitir el funcionamiento pleno del libre mercado en la economía.
5. Se sustituye la política monetaria neutra por una activa, consistente en la restricción de la circulación monetaria. Asimismo, se contrae el gasto público para combatir la inflación, considerada como un fenómeno estrictamente monetario y cuyo control, por tanto, depende tanto de la astringencia monetaria (frenar el consumo y la inversión), como de la disciplina en el gasto público y su equilibrio.
6. Creciente importancia al logro de los equilibrios macroeconómicos.
7. Liberación de los precios de todos los bienes y servicios y desaparición de subsidios generalizados al consumo.
8. Flexibilización laboral, es decir, menor intervención de los sindicatos en la fijación de los salarios y las prestaciones laborales, así como eliminación de los contratos colectivos.
9. Imposición de la razón económica sobre la política, es decir, el mercado y la ganancia se convierten en los ejes rectores de la organización social en su conjunto.
10. Se abandonan los objetivos de crecimiento y distribución de la riqueza como razón de ser de la actividad económica, para ser sustituidos por el combate a la inflación y los equilibrios macroeconómicos, es decir, se privilegia la acumulación del capi-

tal a toda costa. En otras palabras, la razón económica se impone a la razón social.

11. En el aspecto intelectual el neoliberalismo tiende al pensamiento único y, en el político, a considerar como la única opción posible la democracia liberal representativa.

II NEOLIBERALISMO A LA MEXICANA

Antecedentes

Hacia los finales de la década de los setenta, el modelo de sustitución de importaciones seguido en México desde los años de la posguerra, entra en una severa crisis.¹⁷ Esa crisis resultó ser estructural, es decir, afectó al sistema en su conjunto al reducir la tasa de ganancia y dejar de asegurar la reproducción del capital a niveles satisfactorios. Pero al mismo tiempo, en México la crisis de ese momento resultó ser también una crisis de regulación (ver nota 4), es decir, donde los instrumentos existentes a disposición de los aparatos gubernamentales del Estado se mostraron incapaces para detener la caída de la tasa de ganancia y hacer estable el proceso de acumulación de capital.

La debilidad del Estado puso en un serio predicamento al modelo nacional-revolucionario construido en México a partir de 1935 cuando se consolida en el poder la fracción triunfante del proceso

¹⁷ Este proceso que, en términos generales, en América Latina consistió "en la promoción de una industrialización de tipo horizontal en la que el Estado intervino usando las tarifas arancelarias para proteger la naciente actividad industrial" (Foxley, 1980: 12), desempeñó en México, en el periodo 1940-1970, "el papel del sector estratégico en el crecimiento económico nacional." (Boltvinik y Hernández, 1981: 459.) Desde el punto de vista oficial: "El objeto de la sustitución de importaciones es el siguiente: en primer lugar, reducir la dependencia del país respecto del exterior y facilitar así el desarrollo económico sin que éste se vea atado a través de la balanza de pagos. Segundo, propiciar el crecimiento industrial del país mediante la promoción de nuevas industrias (aquellas que están sustituyendo importaciones), las cuales contribuirán a un aumento generalizado en la tasa de crecimiento del sector industrial." (Trejo, 1973: 152.) Una evaluación de los resultados de la política de sustitución de importaciones en México, puede verse en Perzabal, 1979: 31 y ss.

revolucionario de 1910-17. En ese momento, convertido el Estado en el poder central sólido e indiscutible asume la mesiánica tarea de reconstruir la nación, para lo cual fue todo, o casi todo: definió la nacionalidad y el concepto de soberanía; diseñó el civismo de los mexicanos; generalizó los símbolos patrios según su propia versión de los hechos históricos; sometió, modeló y neutralizó la voluntad ciudadana; expropió las elecciones y el quehacer político, construyendo para tal efecto un partido único de Estado, además de arrogarse la facultad de decidir sobre la existencia o inexistencia de los partidos políticos mediante el sencillo expediente de otorgarles, negarles o cancelarles el registro; convirtió la reforma agraria en un procedimiento meramente burocrático, excluyendo a los campesinos del proceso mismo; en los asuntos laborales, organizó a la clase trabajadora y la ató a su proyecto de nación, decidió sobre la existencia o inexistencia de los sindicatos y respecto de las huelgas los aparatos gubernamentales asumieron la facultad para decidir sobre su legalidad o ilegalidad, más allá de la propia voluntad de los protagonistas. Y, desde esa época, el Estado mexicano fue, en distintos momentos, abarrotero, financiero, hotelero, restaurantero, editor de periódicos, libros y revistas, dueño de empresas radiofónicas y televisoras, de empresas aéreas y, mediante su política económica, incluso, definió a los beneficiarios y a los marginados del sistema.

En la historia del nacionalismo revolucionario, que termina a principios de los ochenta, es posible distinguir tres momentos definitivos en este modelo de tutelaje e intervencionismo estatal: la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 (que en 1938 se refundaría como Partido de la Revolución Mexicana y más tarde, en enero de 1946, se transformaría en el actual Partido Revolucionario Institucional); la expropiación del petróleo, decretada por Lázaro Cárdenas en 1938; y la nacionalización de la banca en 1982.

Con la fundación del partido de Estado, se establecen las bases necesarias para consolidar en el poder a las fracciones triunfantes del movimiento revolucionario que encontrarían en el partido los espacios necesarios para resolver pacíficamente sus diferendos; mientras los otros dos momentos expresan nítidamente la autonomía estatal: la expropiación petrolera frente al capital extranjero y la nacionalización de la banca respecto de los grupos internos de la burguesía privada.

Así, mientras la creación del PNR es el inicio de la hegemonía de una fracción sobre el resto de la clase dominante y de la sociedad en su conjunto, y la expropiación petrolera es el sometimiento del capital extranjero al Estado de Derecho mexicano, el punto culminante de la autonomía estatal se alcanza cuando el primero de septiembre de 1982, en su último informe de labores, José López Portillo anuncia, ante el azor de los dueños del capital, de sus representantes y sus empleados, la nacionalización de la banca.

Pero como siempre que se alcanza el punto más elevado se inicia el descenso, la nacionalización bancaria señala también la declinación irreversible de la autonomía estatal. Por ello, podemos señalar ese momento como el inicio del fin del modelo estatista mexicano. En ese momento, esta forma de regulación de la vida económica se vio sometida a las más diversas y severas críticas resultado de la crisis que vivía el sistema. Pero no sería la sociedad mexicana sino la fracción hegemónica en el aparato gubernamental la que decidiría y proclamaría, haciendo uso y abuso de su poder frente a la sociedad civil, el fin del paradigma estatista seguido hasta entonces para imponer uno nuevo, como en su momento se había impuesto el nacionalismo revolucionario, sin contar con la voluntad expresa de la población.

Las críticas al modelo estatista se convirtieron en una verdadera revuelta ideológica y sus líderes surgieron del propio aparato gubernamental. Ellos, que habían sido los mayores beneficiarios del modelo que concluía, ahora contribuían con singular entusiasmo a su entierro.¹⁸

La economía mexicana, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), fue sometida a un proceso de ajuste estructural de orientación al mercado que se reforzó y profundizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se continuó de manera empecinada a lo largo de la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) y hay indicios claros de que se seguirán las lí-

¹⁸ En este proceso podemos encontrar una significativa similitud con el ocurrido en la Unión Soviética, donde los críticos del sistema y quienes lo derrumbaron no fueron miembros de un partido de oposición, o accedieron al poder mediante elecciones y derrotando al partido en el poder con propuestas de transformación, o mediante una revolución, sino que surgieron del propio aparato gubernamental y se decían ser miembros del partido gobernante.

neas generales de la estrategia neoliberal en el gobierno, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Vicente Fox Quezada.

Las siguientes páginas describen y analizan algunos de los aspectos más sobresalientes de la estrategia económica seguida por cada uno de estos gobiernos, estrategia que entendemos se inspira en los principios del neoliberalismo expuestos en el primer capítulo.

La ruptura:

*El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988)*

El primero de diciembre de 1982, al momento de asumir la Presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado anunció al pueblo mexicano la necesidad de modernizar al país y, además, advirtió que esa modernización no pasaba por la expansión del Estado sino, al contrario, por su *achicamiento* y *adelgazamiento* para hacerlo eficiente y permitirle cumplir con sus funciones de gobierno.

“Renovación moral” fue la consigna de entonces y eso suponía su implícita contraparte: terminar con el “Estado patrimonialista y corrupto” existente hasta entonces. Se rechazó en aquel momento, como enfatizarían después Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, al Estado “obeso, complaciente, subsidiador y feudalizado” (aunque jamás se mencionó su carácter represivo mostrado en más de una ocasión), que hasta entonces y a nombre de los “más altos intereses de la nación” había administrado el pacto histórico surgido de la Revolución Mexicana.

Se aseguraba que la nueva situación interna y, sobre todo la externa, requerían de un Estado “adelgazado”, acotado en sus facultades intervencionistas en todos los ámbitos de la sociedad. Estado rector y nunca más empresario, fue la nueva imposición, tal y como en su momento fue la del Estado intervencionista.

Adelgazar al Estado se convirtió en la nueva obsesión, especie de *misión histórica* de los gobiernos de la era neoliberal iniciada con Miguel de la Madrid; y será precisamente en su gobierno cuando se inicia la venta, cierre y liquidación del sector paraestatal;¹⁹ se

¹⁹ Esta acción fue, quizá, la que con mayor fuerza emprendió el gobierno de Miguel de la Madrid, ya que entre 1982 y 1988, “se autorizó el proceso de desincorporación de 724 entidades paraestatales (63 por ciento de todas las existentes al

reducen el gasto público y los subsidios al consumo; se inicia la privatización de la banca y se facilita la formación de una nueva fracción financiera mediante la creación de una especie de banca paralela constituida por casas de bolsa vinculadas más al capital especulativo que a la economía real; y, después de un intento fallido en el gobierno de José López Portillo, México se incorpora al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés. El GATT fue sustituido, en 1995, por la Organización Mundial de Comercio) iniciándose con ello un rápido proceso de apertura de la economía nacional a las mercancías y los flujos de capital extranjeros.

*Todo cambió pero la crisis siguió ahí:
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994)*

Con Carlos Salinas de Gortari se acentúa el retiro del Estado de la actividad económica bajo su propuesta del “liberalismo social” que el propio presidente (Salinas, 1992: 19) definió como “el proyecto de reforma de la Revolución”.

Aun más, para el gobierno de Carlos Salinas la crisis del modelo construido en México sobre la base de un Estado interventor, sólo era posible superarla con la “reforma al Estado” y llevar hasta sus últimas consecuencias el proyecto de “cambio estructural de orientación al mercado”. (Salinas, 1990.)

El Estado concebido por el salinismo no es intervencionista ni nacionalizador sino promotor, articulador y garante del funcionamiento del libre mercado, para que al emprender cualquier actividad económica cada quien pudiera alcanzar su propio interés, porque la suma de los intereses particulares forma el bien nacional. En otras palabras, la nación deja de ser un proyecto colectivo para convertirse en el resultado del esfuerzo individual empeñado en mejorar la posición personal en la sociedad, sin importar los demás o mejor si se les puede utilizar para escalar socialmente. Bajo esta óptica, se dice que las tareas del Estado

inicio del periodo señalado), de las cuales 262 correspondían a liquidación, 136 a extinción, 81 a fusión, 28 a transferencia y 218 a venta, lo que adicionadas a las 48 desincorporadas vía Ley Federal de las Entidades Paraestatales, dan en total 772 entidades desincorporadas de la Administración Pública Federal”. (Bautista, 1991: 50-51.)

no deben suplir o modelar a la sociedad –perversión de la cual se acusa al Estado preneoliberal–, sino procurar “abrir mayores oportunidades para las decisiones de los ciudadanos”. Se visualiza así un Estado donde las oportunidades –que aprovechan los más capaces, los más competentes, los más inteligentes, o más oportunistas– sustituyen a los derechos, que dejan de existir por onerosos y “porque anulan la iniciativa individual”, la que por cierto sólo es capaz de realizarse plena y eficazmente si persigue alguna ganancia.

Este esquema se completa con un gobierno promotor enérgico del sector exportador. En consecuencia, el mercado externo y ya no el doméstico será en adelante el parámetro de la eficiencia empresarial. La racionalidad y la competitividad habrán de ser medidas por la eficiencia de la economía para insertarse en los mercados internacionales, sin importar su capacidad para satisfacer las necesidades internas.

El “esfuerzo modernizador”, como se denominó al conjunto de estas acciones en el *Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994* (PND 1989-1994: 18): “Es el reconocimiento de que el desarrollo en el mundo moderno no puede ser resultado sólo de las acciones del Estado, sino también precisa la participación amplia de particulares”.

El PND 1989-1994 (p. 18), explícitamente señala que, con la modernización económica, “se persigue el crecimiento con estabilidad de precios [...] a partir de un renovado impulso a la inversión privada, la expansión de las exportaciones no petroleras, la inversión pública en infraestructura y el fortalecimiento gradual del mercado interno”.

Esta estrategia de *modernización* fue acompañada de una política económica cuyas líneas generales se exponen también en el PND 1989-1994 (p. 58), agrupadas de la siguiente manera:

1. Llevar a cabo una reforma fiscal, que permita el financiamiento equilibrado de las actividades del sector público.
2. Lograr el equilibrio de las finanzas públicas mediante una política de gasto público determinada por la disponibilidad de financiamiento no inflacionario, es decir, sin poner a funcionar la máquina de “hacer dinero”.
3. Aplicar una política monetaria, financiera y crediticia que propicie el crecimiento de los agregados monetarios compatible con

el mantenimiento de la estabilidad de precios, fortalezca el ahorro interno y promueva una intermediación financiera eficiente.

4. Sustener una política cambiaria que apoye la estabilidad de precios con el uso de todos los demás instrumentos de política económica para evitar ajustes cambiarios abruptos sobre la base de un comportamiento favorable de la economía, particularmente de la balanza de pagos.
5. Llevar adelante una política de concertación que contribuya a mantener, mediante compromisos de los sectores, certidumbre en la evolución de los precios y propicie gradualmente una mayor determinación automática de los mismos a medida que se consolide la estabilidad necesaria para la operación ordenada de los mercados y se proteja el poder adquisitivo de los salarios.

En otras palabras, la reducción del gasto público y una menor participación del gobierno en el proceso económico; un intenso proceso de liberalización y desregulación económica; la apresurada apertura comercial y financiera; así como estrategias monetaria, financiera, crediticia y cambiaria orientadas a combatir la inflación mediante la “concertación entre los sectores”; y el propósito de dejar al mercado la fijación de los precios, representan las características más peculiares de los dos primeros gobiernos neoliberales, de forma tal que, advierte Huerta Quintanilla (1995: 69), desde los años ochenta la economía empezó a vivir:

Un proceso de transformación basado en la desregulación y reducción de la participación del Estado en la economía; la liberalización de las relaciones económicas con el exterior y la entronización de la iniciativa privada como motor y principal impulsor de la dinámica económica.

O bien, como dijera Pedro Aspe Armella (1993: 11), secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari:

La estabilización de la economía a partir de un manejo realista del presupuesto, la privatización de empresas paraestatales, la reforma fiscal, la desregulación económica, la reforma financiera, la liberalización del comercio, la renegociación de la deuda externa y el fortalecimiento de la tenencia de la tierra, es el nuevo

camino con que el pueblo de México y su gobierno están llevando a cabo una ambiciosa Reforma del Estado.

En particular, el obsesivo combate a la inflación emprendido durante el gobierno de Carlos Salinas —que desplazó de las ocupaciones y preocupaciones gubernamentales por el desarrollo económico y las cuestiones sociales de la economía—, determinó una política de rápida e indiscriminada apertura al exterior y un tipo de cambio fijo antiinflacionario,²⁰ es decir, un peso sobrevaluado que al abaratar los productos del exterior tenía como objetivo, por un lado, modernizar la planta productiva para hacerla más eficiente frente a la competencia externa y convertir al sector exportador en el nuevo motor del crecimiento económico del país y, por otro, facilitar las importaciones de productos cuyos precios, al ser menores que el de los bienes producidos internamente, impedirían el crecimiento del índice interno de los precios al consumidor.

La expectativa era la siguiente: los precios más bajos de los productos importados, cuya entrada al país sería sin restricciones, no sólo permitiría reducir la inflación interna sino que obligaría a las empresas establecidas en México a ser más eficientes y competitivas. (Ver, Jarque y Téllez, 1993: 16.) Con esta medida, la inflación efectivamente se redujo de manera sensible a partir de 1988 y logra desde 1993 y 1994 índices de un dígito, aunque el Producto Interno Bruto (PIB) mostró una desalentadora lentitud en su ritmo de crecimiento, ya que registró un promedio anual de crecimiento de -0.05 por ciento en el gobierno de Miguel de la Madrid y 3.2 por ciento en el Carlos Salinas de Gortari, con un errático comportamiento de la inflación, aunque en algunos años se logren reducciones notables

²⁰ “La política basada en el tipo de cambio fijo para combatir las presiones inflacionarias se estableció a finales de febrero de 1988. A principios de 1989 se introdujo un sistema de deslizamiento cambiario. Éste se fijó originalmente en un peso por día (equivalente a una tasa anual de depreciación del 16 por ciento); en 1990 se redujo a 80 centavos (11 por ciento anual), y en 1991 a 40 centavos diarios. (Cinco por ciento anual). En noviembre de 1991 este régimen se modificó al establecerse una tasa de cambio que fluctuaba entre los límites de una banda de flotación cuyo techo se ajustaba diariamente en 0.0002 nuevos pesos. En octubre de 1992 este ajuste se incrementó a 0.0004 nuevos pesos por dólar. El 20 de diciembre de 1994 el techo aumentó 15 por ciento y se mantuvo el incremento diario de 0.0004 pesos. Esta política mostró ser insostenible y se abandonó poco después para adoptarse un régimen cambiario basado en una tasa de flotación.” (Lustig, 1995: 376, n. 9.)

(Cuadro 1 y A-1 del Apéndice Estadístico), siempre a costa de provocar serios desequilibrios en la balanza comercial, pues la sobrevaluación del peso hizo que las importaciones superaran rápidamente a las exportaciones.

En efecto, el rápido aumento de las compras al extranjero, debido a la sobrevaluación del peso, provocó la ampliación del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos,²¹ que empezó a crecer de manera excesiva y “fue de casi 25 mil millones de dólares en 1992; 23 mil millones en 1993, y se calcula cercano a 28 mil millones de dólares en 1994”, cifra cercana al 8 por ciento del PIB calculado para ese año. (Cuadro 1.)²²

Cuadro 1
México: comportamiento de su Producto
Interno Bruto, el saldo de la cuenta
corriente y la inflación (1983-2000)

AÑO	PRODUCTO INTERNO BRUTO*	SALDO EN CUENTA CORRIENTE (% del PIB)	INFLACIÓN*
1983	-4.2	4.0	80.8
1984	3.6	2.3	60.4
1985	2.6	0.8	65.9
1986	-3.8	-1.0	103.1
1987	1.7	3.0	159.0
1988	1.2	-1.4	46.8
1989	3.3	-2.8	19.7
1990	4.4	-3.0	29.9
1991	3.6	-5.2	18.8
1992	2.8	-7.5	11.9
1993	2.0	-6.5	8.0

²¹ La balanza de pagos está integrada por dos grandes balanzas: la de transacciones en cuenta corriente y la de capitales. La de cuenta corriente se integra, a su vez, con la balanza comercial (importaciones y exportaciones de mercancías) y la de servicios, donde se incluyen los ingresos y pagos por concepto de servicios prestados al exterior o recibidos de éste.

²² Mensaje del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, al dar a conocer el “Programa de Emergencia Económica”, periódico *El Sol de Puebla*, 31 de diciembre de 1994.

1994	4.5	-7.6	7.1
1995	-6.2	-0.5	52.0
1996	5.2	-0.7	27.7
1997	6.7	-1.9	15.7
1998	4.8	-3.8	18.6
1999	3.7	-2.9	12.3
2000	6.9	-3.0	9.1

* Tasa anual de crecimiento.

FUENTES: Para el PIB. De 1983 a 1994: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. INEGI, *Estadísticas históricas de México*, t. II, México, 1995. De 1995 a 1998: *Examen de la Situación Económica de México*, Banamex-Accival, Vol. LXXV, núm. 879, México, marzo de 1999, p. 89. Para 1999: SHCP. Boletín de prensa 023/00, 16 de febrero del 2000. Para el 2000, SHCP. Cuenta Corriente: Unidad Técnica de Economía (UNITÉ), con datos del Banco de México. Inflación: de 1983 a 1988: Arturo Ortiz Wadgyrmar. *Política Económica de México 1982-1995*, Nuestro Tiempo, México, 1995: 69, cuadro 5.1. De 1989 a 1995: *El Mercado de Valores*, año LV, núm. 1, Nafinsa, México, enero de 1995: 80, cuadro 3 y *El Mercado de Valores*, año LVI, núm. 7, Nafinsa, México, julio de 1996: 72, cuadro 3. De 1996 a 1999: Unidad Técnica de Economía (UNITÉ) con datos del Banco de México.

No obstante el creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, su magnitud nunca fue preocupación prioritaria del gobierno salinista en tanto pudo ser financiado con la entrada masiva de capital extranjero al país²³ que si bien se ubicó en cartera permitió al gobierno de Carlos Salinas, por lo menos en el corto plazo, hacer frente al desequilibrio externo sin tener necesidad de devaluar la moneda. En efecto, en 1993, por cierto el año del mayor resplandor del salinismo, la inversión de recursos foráneos en cartera representaba el 87 por ciento de la inversión extranjera total. (Ver, Cuadro 2.)

Por supuesto, para atraer esos recursos hubo necesidad de ofrecer altas tasas de interés que, por un lado, desalentaron la inversión en la economía real y, por el otro, la alentaban en el sector especu-

²³ Hay un principio esencial en las relaciones económicas de un país con el resto del mundo: el saldo de la balanza en cuenta corriente es siempre igual al saldo de la balanza de capitales, pero de signo contrario. Esto se traduce en lo siguiente: cualquiera que sea el saldo negativo de la cuenta corriente, será igual al financiamiento que reciba del exterior. (Ver, Torres, 1975: 206 y ss.)

lativo. De esta manera, la mayor parte de los recursos foráneos que llegaron a México a partir de 1990 se dirigieron a la inversión en cartera, que obtuvo grandes rendimientos sin contribuir a modernizar la estructura productiva del país o crear empleos y empresas.

A partir de 1990, la inversión extranjera total crece rápidamente hasta 1995 cuando cae estrepitosamente debido a que, a lo largo de ese año de crisis, el capital especulativo huye del país disminuyendo ese año la inversión extranjera en cartera en 9 mil 715 millones dólares provocando una desinversión de 188 mil millones de dólares, es decir, ese único año salieron más recursos al exterior de los que entraron (Cuadro 2), manifestación clara de la crisis de la insolvencia financiera del país que sólo pudo ser resuelta con los recursos en préstamo aportados por William Clinton, en ese momento presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el FMI y la banca privada extranjera.

Cuadro 2
México: inversión extranjera 1990-2000
(Miles de dólares)

AÑO	TOTAL	DIRECTA	CARTERA
1990	6,003,715	2,633,238	3,370,477
1991	17,514,653	4,761,498	12,753,155
1992	22,433,908	4,392,799	18,041,109
1993	33,308,145	4,388,801	28,919,344
1994	19,154,711	10,972,501	8,182,210
1995	-188,381	9,526,300	-9,714,681
1996	22,603,916	9,185,451	13,418,465
1997	17,866,643	12,829,556	5,037,087
1998	11,023,215	11,602,386	-579,171
1999	22,879,601	11,914,624	10,964,977
2000	10,936,949	13,161,535	-2,224,586

FUENTE: Banco de México.

Estos capitales buscaban ganancias rápidas y las obtuvieron, pero cuando los tiempos presagiaron tormenta, apresuradamente, abandonaron el país. Es decir, la estancia de esos capitales en México fue efímera de tal manera que a las primeras dificultades, justo cuando en Estados Unidos se inició la recuperación económica y la Reserva

Federal decidió incrementar el rendimiento de sus instrumentos financieros,²⁴ el flujo de capitales —que es muy sensible a la evolución de la tasa de interés norteamericana— dejó de orientarse hacia México y los que estaban aquí empezaron a salir rápidamente, al grado que si bien al inicio de 1994 las reservas internacionales en el Banco de México alcanzaban la cifra de 26 mil 84 millones de dólares, en febrero de 1995 habían disminuido a 8 mil 900 millones de dólares. (Lustig, 1995: 378.)

De esta manera, el alza de la tasa de interés en Estados Unidos no sólo aumentó las presiones financieras sobre los sectores económicos endeudados en dólares alentados por la modernidad ofrecida por el gobierno de Salinas, sino que también disminuyó el atractivo de invertir fuera de aquel país, lo cual frenó la entrada de capitales a México e incrementó la incertidumbre respecto de la evolución de la economía mexicana dado que la cuenta corriente de la balanza de pagos ya no podía ser financiada de la misma manera como se hizo a lo largo del gobierno salinista, con capital especulativo, esto es, con recursos inestables y de corto plazo.

A pesar de ello y de la salida de capitales ocurrida desde finales de marzo de 1994 cuando ocurre el fatal atentado contra Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República, el entonces secretario de Industria y Comercio, Jaime Serra Puche, a mediados de noviembre de ese mismo año, declaraba: “México se convirtió en uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera; un polo de libre comercio internacional y adquirió una nueva dimensión en la economía mundial.” (Periódico *El Financiero*, 17 de noviembre de 1994: 22.) En cambio, la realidad iba por otro rumbo: tan sólo en el mes de diciembre de 1994 salieron de la Bolsa Mexicana de Valores casi 33 mil millones de dólares. (Periódico *El Financiero*, 14 de enero de 1995.) Desafortunadamente, como ya había ocurrido en otras ocasiones, fueron capitales propiedad de mexicanos los primeros en abandonar el país.²⁵

²⁴ Los bonos del Tesoro estadounidense, en enero de 1994, ofrecían un rendimiento de 3.02 por ciento. Un año después, en enero de 1995, los rendimientos habían ascendido a 5.81 por ciento (Lustig, 1995: 378.)

²⁵ “La descapitalización que padece el país es producto de una fuga de capitales mexicanos más que de la disminución del ritmo de la inversión extranjera, reconoció Luis Germán Cárcoba García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El dirigente del organismo cúpula de la iniciativa privada aseguró que hace una semana, cuando estalló la crisis financiera, ‘comenzó a salir primero el dinero

El hecho de que la mayor parte de los recursos foráneos que llegaron a México a lo largo del sexenio salinista se ubicaran en cartera y no fueran a la inversión directa, permite concluir que los capitales extranjeros vinieron atraídos por las elevadas tasas de interés que se les ofrecía;²⁶ eso sí, llegaron en grandes cantidades dispuestos a ganar mucho dinero y a corto plazo sin arriesgar nada, sin crear empleos o nuevas empresas, ni ayudar a la modernización de la planta productiva nacional y siempre en condiciones de emprender la huida al momento de encontrar en otros mercados tasas de interés más atractivas, o cuando el país enfrentara algunas dificultades que pusieran en riesgo su solvencia financiera.

En fin, los capitales se fugaban rápidamente y el 20 de diciembre de 1994, cuando se intentó frenar su salida modificando la banda de flotación del dólar en 15 por ciento, la medida resultó inútil, la estampida se había iniciado y nada detendría lo que el secretario de Hacienda de entonces, Guillermo Ortiz Martínez (1995: 16), llamó en un artículo por cierto publicado inicialmente en el periódico norteamericano *The Wall Street Journal*, “un fuerte ataque especulativo a la moneda”.

Por su parte, en un documento titulado “La Política Monetaria de México para 1995” el Banco de México (1995: 17) explica la crisis de la siguiente manera:

Durante casi todo 1994, se mantuvo vigente el régimen cambiario adoptado desde noviembre de 1991, consistente en dejar que el tipo de cambio flotara dentro de una banda que se ensanchaba diariamente. El 20 de diciembre de 1994 se elevó 15 por ciento el nivel del techo de la banda de flotación y se prosiguió con el mismo desliz. Ello no resultó sostenible, así que el esquema de banda se abandonó, pasándose a un régimen de flotación a partir del 22 de diciembre.

Frente a estos hechos, los integrantes del “Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento”, anunciaron que:

La medida adoptada el día 20 de diciembre, ampliando el límite superior de la banda cambiaria, no detuvo el proceso especulativo

de los mexicanos’, situación que calificó de penosa”. (Periódico *La Jornada*, 31 de diciembre de 1994, 1 y 33.)

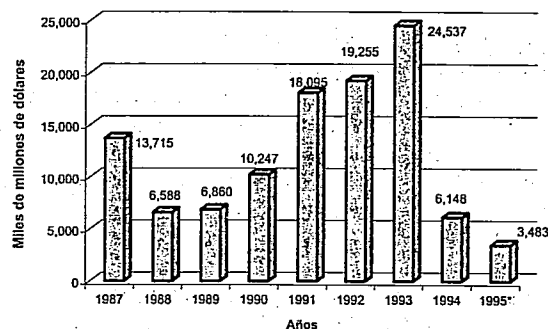
²⁶ Todavía en marzo y abril de 1995, las tasas de los Cetes a 28 días fueron de 69.54 y 74.75 por ciento, respectivamente, y el promedio anual fue de 48.1 por ciento. (Periódico *El Financiero*, 6 de enero de 1996, p. 9.)

desatado en los mercados financieros. Por ello —concluían desolados los abajo firmantes—, comprendemos la decisión de las autoridades financieras de permitir que la oferta y la demanda determinen libremente el tipo de cambio.

En realidad, la fuga de capitales del mercado bursátil se inició en abril de 1994, coincidiendo con la fecha de la muerte violenta del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. En ese sentido, el informe anual del Banco de México correspondiente a 1994, señala lo siguiente: “La reserva internacional del Banco de México, que en la fecha del asesinato sumaba 28 mil 321 millones de dólares, cayó casi 11 mil millones en los siguientes 30 días, en tanto que las tasas de interés se incrementaron aún más”. (*Informe*, 1995: 16.) Esto provocó que la reserva internacional siguiera reduciéndose hasta llegar a ser un poco más de 6 mil millones de dólares en diciembre de ese año y 3 mil 483 millones en enero de 1995.²⁷ (Gráfica 1.)

Gráfica 1

Comportamiento de las reservas internacionales mexicanas 1987-1995 (enero)



* Enero

FUENTE: Banco de México
Elaboró Pedro García Caudillo

(Centro de Procesamiento de Datos, Escuela de Economía, BUAP)

²⁷ Información del Banco de México, publicada en el periódico *Síntesis*, Puebla, 31 de mayo de 1995.

El 22 de diciembre, cuando las reservas internacionales habían llegado a “límites peligrosos”, el Banco de México decidió dejar de intervenir en el mercado cambiario para permitir que la oferta y la demanda fijaran el precio de la divisa, con lo que, dada la sobrevaluación del peso, la devaluación se hizo inminente y comenzó una de las crisis más severas de la economía mexicana en los últimos 60 años, pulverizándose así la esperanza vendida a los mexicanos por Carlos Salinas de ingresar al Primer Mundo.

*Más de lo mismo, pero en tono menor:
el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León
(1994-2000)*

Ernesto Zedillo Ponce de León asume el gobierno de la República el primero de diciembre de 1994 con una economía que, a lo largo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entre otras cosas sólo benefició a un puñado de empresarios con privatizaciones sospechosas (como el caso de Telmex y la banca),²⁸ una apertura económica apresurada e indiscriminada que mantuvo a México como un socio cada vez más importante y profundamente dependiente de la economía de Estados Unidos.

Asimismo, las primeras acciones del gobierno zedillista fueron poco afortunadas, aunque obligadas por dos razones: una, que la situación económica requería modificar el tipo de cambio devaluando

²⁸ Rafael Rodríguez Castañeda (1995), documenta exhaustivamente el proceso de privatización de Teléfonos de México. Por otra parte, el 5 de diciembre de 1995, el diario *El Financiero* publicó la siguiente información: “Los datos que aparecen en el libro de información de los procesos de desincorporación, editados por las secretarías de la Contraloría y de Hacienda y Crédito Público, no coinciden con los libros blancos de cada una de las instituciones bancarias. Pero, además, en algunos casos los datos no son congruentes con el libro sobre los procesos de desincorporación que elaboró el ahora secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz”, quien entonces era el encargado del Comité de Desincorporación Bancaria. Un caso puede ilustrar esta situación: mientras el libro blanco de Banca Cremi señala que el gobierno, después de la auditoría de compra (aclaración en el precio de venta), devolvió a los compradores 23 millones de nuevos pesos, equivalentes al 3.07 por ciento del total pagado; el compendio elaborado por la Contraloría y Hacienda, señala que a los adquirentes se les devolvieron 180 millones de nuevos pesos, esto es, el 24.05 por ciento del total pagado, una diferencia de 157 millones de nuevos pesos.

el peso; y otra, el empecinamiento gubernamental por mantener el modelo neoliberal sin cambios sustanciales. En esas circunstancias, la devaluación fue una medida tardía e insuficiente. Tardía porque debió haberse hecho en 1992 cuando el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a ser de 7.6 por ciento del PIB (Cuadro 1) y se tomó, en cambio, a finales de 1994 cuando si bien el déficit era similar las reservas internacionales prácticamente se habían agotado debido a la fuga de capitales, con lo cual se iniciaba una crisis financiera de enorme magnitud; fue insuficiente, porque no ofrecía solución alguna a los problemas fundamentales de la economía nacional y sí desató un intenso proceso inflacionario que provocó un rápido aumento en el número de pobres de todo el país.

Por otra parte, resultó evidente el empecinamiento del gobierno por mantener el rumbo neoliberal de la economía. Desde esa época, José Luis Calva (1995: 26) advertía que la estrategia económica anunciada por las nuevas autoridades en el "Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica" (AUSEE), en el "Marco Macroeconómico para 1995" y en la "Carta de intención" dirigida por el Ejecutivo al FMI, se retomaban:

Los severos programas de ajuste recesivo aplicados en México entre 1983 y 1988 (contracción de la demanda interna agregada a través de la reducción de los salarios reales; de la disminución de la inversión y el gasto público, y el escaseamiento y encarecimiento del crédito), cuyo resultado general fue el crecimiento económico cero (0.22% anual).

Los "errores de diciembre" (como los bautizó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quizá para explicar la debacle que sobrevino después del día 22 de ese mes y defender así su estrategia de deslizamiento del peso), es decir, las decisiones tomadas en los primeros 20 días del gobierno de Ernesto Zedillo, iniciaron la crisis que, ahora se ve, había sido evitada durante algunos meses de manera artificial.

Pero discutir si fue o no un error la traumática devaluación de diciembre de 1994 resulta ocioso, y siempre lo fue. En realidad no se trata de un error operativo, sino de las consecuencias del modelo económico neoliberal que, como hemos visto, fue impuesto al pueblo de México por Miguel de la Madrid, fortalecido por Carlos Sa-

linas, seguido sin cambios sustanciales en el gobierno de Ernesto Zedillo²⁹ y que, al parecer, se mantendrá con pocos cambios en el del panista Vicente Fox.

Una de las primeras consecuencias de la devaluación de diciembre de 1994, fue el reinicio del proceso inflacionario. Asimismo, la deuda contratada en dólares experimentó un crecimiento en pesos que la hizo, todavía más, onerosa. Además, el ritmo de crecimiento de la economía sufrió un severo quebranto y la recesión se hizo inminente. Al mismo tiempo, el gobierno empezó a contratar nueva deuda para cumplir con los compromisos de pago del servicio de los créditos externos y los acreedores foráneos llegan a exigir la aceptación de condiciones que van más allá de lo económico, al grado de vulnerar la soberanía nacional.

La magnitud de la crisis provocada por el sector especulativo puede apreciarse por la caída en 6.2 por ciento del PIB en 1995, la más profunda desde 1932 cuando el capitalismo mundial vivía una de sus peores crisis. Pero eso no es todo, según el propio ex presidente Zedillo, en total el costo de la crisis iniciada en diciembre de 1994 alcanzó los 70 mil millones de dólares, que representaron el 20 o 25 por ciento del PIB, "en comparación con el impacto del tres por ciento del PIB que significó la crisis de 1982". (Periódico *El Financiero*, 13 de junio de 1996: 41.)

Por otro lado, la crisis iniciada en 1994 hizo que, sin renunciar a lo fundamental del modelo neoliberal delineado por Carlos Salinas desde que era secretario de Programación y Presupuesto con el presidente Miguel de la Madrid, el gobierno de Ernesto Zedillo modificara la estrategia económica para sustentarla, ahora, en la atracción de la inversión extranjera directa (IED), con el propósito de impulsar la

²⁹ A pesar de la crisis, los personeros del gobierno zedillista no dejaban de enfatizar su inflexible posición respecto de la estrategia económica. "No habrá cambios en la política económica", declaró enfático el 17 de enero de 1996 Alejandro Valenzuela, vocero de la "Alianza para la Recuperación Económica", como respuesta a las críticas que sobre la conducción económica habían formulado 255 diputados del PRI. (Periódico *Síntesis*, Puebla, 18 de enero de 1996.) Más tarde, el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, afirmaría ante diputados y senadores integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión: "No se modificarán las políticas monetaria y cambiaria". (Periódico *La Jornada*, 17 de octubre de 1996: 41.)

actividad manufacturera de exportación para hacer crecer la economía.³⁰

La inversión extranjera directa

De acuerdo con el cuadro 2, en 1996, después de la profunda caída de la inversión extranjera total motivada por la fuga del capital especulativo, la inversión foránea en cartera tiene un fuerte impulso llegando a representar casi el 60 por ciento del total de la inversión extranjera. Sin embargo, a partir de 1997 la IED siempre ha superado a la ubicada en cartera, de tal manera que en 1999 la IED resultó cinco veces superior a la registrada en 1991.

Aun más, a lo largo de la administración de Ernesto Zedillo, el país recibió poco más de 68 mil millones de dólares como IED, cifra que duplicó la correspondiente al periodo 1990-1994, que ascendió a poco más de 27 mil millones de dólares. (Cuadro 3.)

Cuadro 3
México: distribución de la inversión extranjera
acumulada por periodos (1990-2000)
(Miles de dólares)

INVERSIÓN EXTRANJERA	1990-1994	%	1995-2000	%
Total	98,415.1	100.0	85,121.9	100.0
Directa	27,148.8	27.6	68,219.8	80.1
De Cartera	71,266.3	72.4	16,902.1	19.9

FUENTE. Cuadro 2.

Importa destacar que si bien durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el 72 por ciento de los recursos externos se ubicaron

³⁰ En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND, 1995-2000: 138), correspondiente al gobierno de Ernesto Zedillo, se puede leer lo siguiente: "En el corto plazo, la recuperación de la actividad económica estará apoyada, principalmente, en el dinamismo del sector de bienes y servicios comerciables internacionalmente [...] Así, este sector habrá de constituirse en el principal motor de crecimiento para superar la crisis que atraviesa actualmente nuestra economía."

en cartera, en el gobierno de Ernesto Zedillo las cosas se invirtieron y el 80 por ciento de la inversión extranjera fue inversión directa, lo cual modifica las condiciones de estabilidad financiera pues resulta más sólido disponer de esos recursos para hacer frente al desequilibrio externo que pudiera ocasionar el crecimiento económico, que hacerlo con recursos de corto plazo, altamente volátiles e incontrolables.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se modificó también la tendencia a la colocación de la IED, orientándose ahora primordialmente hacia la actividad industrial. En efecto, tal y como muestra el cuadro 4, a lo largo del sexenio de Carlos Salinas el sector industrial perdió importancia mientras la ganaban los servicios y el comercio. Así por ejemplo, en 1992 a la industria se canalizaba apenas el 30 por ciento de la IED total; mientras los servicios y el comercio atraían el 68 por ciento. En cambio, a partir de 1995, el primer año del gobierno de Ernesto Zedillo y en plena crisis, la actividad industrial empieza a atraer un mayor volumen de capital foráneo hasta llegar a captar, en 1999, el 76 por ciento de la IED colocada en México. En cambio, en todo el periodo neoliberal el capital foráneo muestra muy poco interés por los sectores extractivo y agropecuario, hacia los cuales se canalizan montos realmente marginales. (Cuadro 4.)

Dentro de la Industria Manufacturera, que resulta ser el principal sector de atracción de la IED, más del 50 por ciento de los recursos foráneos se destinaron al sector de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo y poco más del 16 por ciento a la de Productos Químicos y Plásticos. Así las cosas, un análisis elaborado por el "Grupo de Economistas y Asociados" (GEA, 2000: 12), concluye de la siguiente manera: "La inversión extranjera directa se destina en su mayoría a sectores vinculados con mercados de exportación".

Un informe elaborado por la Dirección General de Inversión Extranjera de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), donde se presentan los resultados del análisis elaborado sobre la cuantía y distribución de la inversión extranjera entre 1995 y 1999 (Periódico *La Jornada*, 4 de febrero del 2000: 55), concluye confirmando las tendencias mostradas en el cuadro 4:

En los últimos cinco años —señala el informe de la Secofi—, casi 75 por ciento de los capitales extranjeros que han llegado se han dirigido a la industria manufacturera; 8.3 al comercio; 4.9 a los

servicios financieros y 2.7 al sector extractivo. Continúa siendo marginal la inversión foránea en el sector agropecuario y prácticamente inexistente en el de transportes y comunicaciones y en el extractivo.

Cuadro 4
México: distribución porcentual
de la inversión extranjera directa canalizada
por sector económico
1983-1998

Año	Industrial	Servicios	Comercio	Extractivo	Agropecuaria
1983	87.3	1.8	8.5	2.1	0.3
1984	88.6	8.1	2.3	0.4	0.6
1985	67.3	25.2	6.3	1.0	0.2
1986	79.1	13.3	6.2	1.3	0.1
1987	62.3	31.0	5.6	0.7	0.4
1988	32.3	59.5	7.0	0.8	0.4
1989	39.3	44.1	15.4	0.4	0.8
1990	32.0	59.3	4.6	2.5	1.6
1991	81.2	14.5	1.2	1.5	1.6
1992	30.6	47.2	20.9	0.2	1.1
1993	47.3	35.3	15.6	1.1	0.7
1994	57.2	29.7	12.1	0.9	0.1
1995	56.6	30.0	12.3	1.0	0.1
1996	57.9	30.4	10.1	1.2	0.4
1997	60.4	21.1	17.4	1.0	0.1
1998	72.1	18.5	8.4	0.6	0.4
1999	76.0	9.1	8.3	5.2	1.4

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi.

La misma fuente indica que el capital proviene, casi en un 75 por ciento, de Estados Unidos y Canadá, mientras que de la Unión Europea procede el 18 por ciento. (Periódico *El Universal*, 24 de mayo de 2000: D1.) Asimismo, se reforzó la ubicación de la IED en

todos aquellos sectores, en su mayor parte, dependientes del mercado externo.

De esta manera, como ocurre con los países incapaces de financiar sus proyectos de inversión con ahorro interno, México se ha vuelto estructuralmente dependiente del ahorro externo que llega al país en forma de IED. Así, mientras la inversión interna, entre 1993 y 1997, cayó 1.2 por ciento con relación al PIB, la inversión foránea en ese mismo lapso creció hasta representar el 3.1 por ciento del producto interno (Castellanos, 1999: 21) para sostenerse en 2.2 y 2.4 por ciento en 1999 y 2000, respectivamente.

Por último, debe observarse que al parecer empieza a ocurrir un vuelco dramático en la orientación de la inversión extranjera. Por lo menos en el año 2000, el sector de seguros y fianzas captó más de 4 mil millones de dólares procedentes del exterior, lo que representó el 40.8 por ciento de los capitales que arribaron al país ese año. Esto, por supuesto, hace todavía más concentrada la IED en los centros urbanos del país.

En efecto, territorialmente hablando la IED amplió la brecha de desarrollo entre las entidades del país. Al cierre del 2000, esto es al concluir el gobierno de Ernesto Zedillo, el Distrito Federal concentró el 55.2 por ciento de todos los recursos foráneos que llegaron a México en forma de inversión directa entre 1995 y el año 2000. Junto con el Distrito Federal, otras cinco entidades (Nuevo León, Baja California, México, Chihuahua y Jalisco), concentraron el 84 por ciento de toda la IED en ese mismo lapso. Esas entidades son las de mayor crecimiento relativo y las de mayor urbanización; en cambio 22 entidades federativas no lograron captar siquiera un uno por ciento del capital extranjero; y diez de ellas tan sólo atrajeron el 0.1 por ciento de los recursos foráneos. Durante esos años, la IED fue nula en estados como Chiapas, Campeche y Oaxaca. (Ver, Cuadro A-4.)

Política monetaria restrictiva

La estrategia zedillista, al tener como base el impulso a la economía real orientada a la exportación y sustentada en la IED, dejó de requerir un tipo de cambio fijo para controlar la inversión, así como los recursos provenientes de la banca privada del país que empezó a

desempeñar un papel irrelevante en el financiamiento a la actividad productiva,³¹ aunque el gobierno mantuvo con fuerza la apertura comercial y financiera de la economía, así como las acciones empeñadas en reducir tanto el poder adquisitivo de los salarios como el gasto gubernamental para contener la inflación.

En este sentido, el Banco de México con el propósito de limitar el crecimiento de la demanda agregada y restar liquidez al sistema financiero para reducir las presiones inflacionarias, decidió pasar de una política monetaria neutra a otra activa-restrictiva, para lo cual aplicó el llamado *corto* (retiro diario de la circulación de una determinada cantidad de dinero), medida iniciada en el mes de marzo de 1998 con 30 millones de pesos diarios, hasta llegar en diciembre de ese mismo año a 130 millones, pasar a 200 millones a partir del 16 de mayo de 2000 y a 230 millones desde el 26 de junio de ese mismo año, según anunció el Banco de México. (Periódico *La Jornada*, 27 de junio de 2000: 22.) Más tarde, en agosto de 2000, el *corto* aumentó a 280 millones de pesos y en diciembre era ya de 350 millones de pesos. El gobierno de Vicente Fox, siguiendo la misma política monetaria restrictiva para contener el consumo y con ello la inflación, decidió elevar a partir del 12 de enero de 2001 el *corto* para ubicarlo en los 400 millones de pesos al día. (Periódico *La Jornada*, 13 de enero de 2001: 16.)

La política restrictiva para restar liquidez al sistema financiero, ha traído como resultado el aumento de las dificultades para lograr una tasa de interés capaz de estimular el ahorro y la inversión encaminada a lograr la expansión de la producción para el mercado interno. Además, la inflación no cede y hasta 1999 se mantuvo en los dos dígitos (Ver, Cuadro 1) lo cual muestra que buena parte de ella obedece a factores distintos al tipo de cambio o el exceso de demanda, aunque persiste la tendencia a la elevación del desempleo. (Ramírez, 1999: 13.)

³¹ A fines de marzo de 1999, en un seminario auspiciado por la correduría estadounidense Moody's, dos días después de que Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, calificara al estancamiento del crédito como "el más grave de la historia del país", Patricia Armendáriz, vicepresidenta de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmaría: "Nunca en la historia del país había ocurrido un estancamiento crediticio de tal envergadura", como el que ocurre en estos momentos en México; y urgía a la banca "a dejar atrás su reticencia a tomar riesgos crediticios". (Periódico *La Jornada*, 26 de marzo de 1999: 21.)

La tesis detrás de esta política restrictiva, consiste en creer que al concentrarse el ingreso y reducirse tanto el consumo privado como la inversión privada y el gasto gubernamental, particularmente el gasto social, se generan excedentes para la exportación y ahorro para la inversión privada, lo cual permite que, sin modificar la oferta interna, se eviten las presiones inflacionarias y se reduzca el déficit en la balanza comercial. Este enfoque, propuesto por el FMI, significa que la inflación sólo puede detenerse con crecientes niveles de desempleo, bajos salarios y reducido gasto social, es decir, aumentando los niveles de pobreza de la población.

Un resultado más de esta estrategia ha sido la aparición de presiones intermitentes para dolarizar la economía, propuesta que encuentra cada vez más adeptos entre quienes consideran esa decisión como la única posibilidad de disminuir la tasa de interés, terminar con la inestabilidad cambiaria, reducir la inflación y estabilizar la economía, aunque se soslayan cuestiones —menores, dirían algunos neoliberales— como puede ser la soberanía nacional, entre otras, y algunas más consideradas premodernas.

Por último, si bien esta política monetaria ha logrado contraer la inversión y la demanda internas, el número de empresas manufactureras vinculadas al sector externo ha crecido sustancialmente, la mayor parte de ellas financiadas por el capital extranjero. La razón es que el dinamismo y cálculo de la ganancia de ese tipo de empresas depende más del comportamiento del mercado estadounidense que del mexicano.

En síntesis, la estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo tuvo como elementos sustantivos el aumento de la IED en la industria vinculada a la exportación; el abandono de la convertibilidad y la paridad inamovibles, que fueron sustituidas por el tipo de cambio flexible con el propósito de evitar las abruptas devaluaciones, enfrentar las crisis externas y frenar la inflación interna, lo que repercutió en el comportamiento favorable de algunos indicadores macroeconómicos, aunque no pueda decirse lo mismo en las cuestiones referidas al bienestar social.

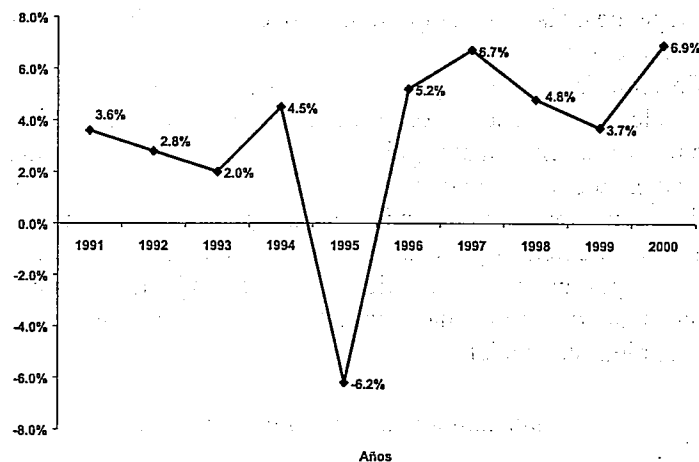
Comportamiento del producto interno bruto

A lo largo de la década de los años noventa, el PIB en México mantuvo un comportamiento sumamente errático, aunque con Ernesto

Zedillo se lograron cinco años de crecimiento continuo, los posteriores a la crisis de 1995.

En efecto, al iniciarse ese decenio el PIB mantiene la tendencia a disminuir, tendencia que sólo se revertirá en 1994, último año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se alcanzó un modesto 4.5 por ciento, por cierto el más alto de ese sexenio. Sin embargo, la crisis iniciada en diciembre de 1994 provocó, al año siguiente, la más profunda caída del PIB (-6.2 por ciento) registrada desde la crisis general del capitalismo de 1929-32. Pero con excepción de 1995, los años siguientes han significado para la economía mexicana tasas positivas de crecimiento, aunque decrecientes a partir de 1997 y hasta 1999 (donde fue 3.7 por ciento), lográndose volver en el 2000 a un elevado crecimiento de 6.9 por ciento, con lo cual en tres años del sexenio zedillista el PIB registra aumentos superiores a 5 por ciento, tasa sensiblemente mayor a las observadas a lo largo de la década de los noventa. (Ver, Gráfica 2.)

Gráfica 2
México: comportamiento del Producto Interno Bruto
1991-2000



FUENTE: Cuadro 1

Notorio resulta también que el promedio anual del crecimiento del PIB durante el gobierno zedillista, sea superior al obtenido con Miguel de la Madrid (lo cual, de ninguna manera es un mérito pues con De la Madrid el crecimiento fue nulo) y muy similar al logrado en el sexenio de Carlos Salinas. En efecto, en el primer gobierno neoliberal el promedio anual del crecimiento PIB, fue de -0.05 por ciento; mientras en el de Carlos Salinas fue 3.3 por ciento. En cambio, en la administración de Ernesto Zedillo el promedio de crecimiento de la economía fue 3.8 por ciento (Cuadro 5), aunque si deja de considerarse el año de 1995, cuando la caída del PIB llega a -6.2 por ciento, la economía ha crecido a una tasa promedio anual entre 1995 y el 2000 de 4.5 por ciento, de cualquier manera bastante limitado.

No obstante que esto parezca un logro importante y que el sustento del crecimiento sea diferente al utilizado en el gobierno de Carlos Salinas, no se han podido alcanzar las tasas de crecimiento anual registradas en los tres últimos gobiernos del nacionalismo revolucionario. Efectivamente, tanto en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz como en el de Luis Echeverría y el de José López Portillo, los promedios anuales de incremento del PIB fueron superiores o cercanos al 6 por ciento. (Cuadro 5.)

Cuadro 5
México: crecimiento promedio anual
Comparado del PIB

Presidente		PROMEDIO ANUAL DE INCREMENTO (%)
Gustavo Díaz Ordaz	(1964-1970)	6.23
Luis Echeverría	(1970-1976)	5.95
José López Portillo	(1976-1982)	6.50
Miguel de la Madrid	(1982-1988)	-0.05
Carlos Salinas	(1988-1994)	3.16
Ernesto Zedillo	(1994-2000)	3.80

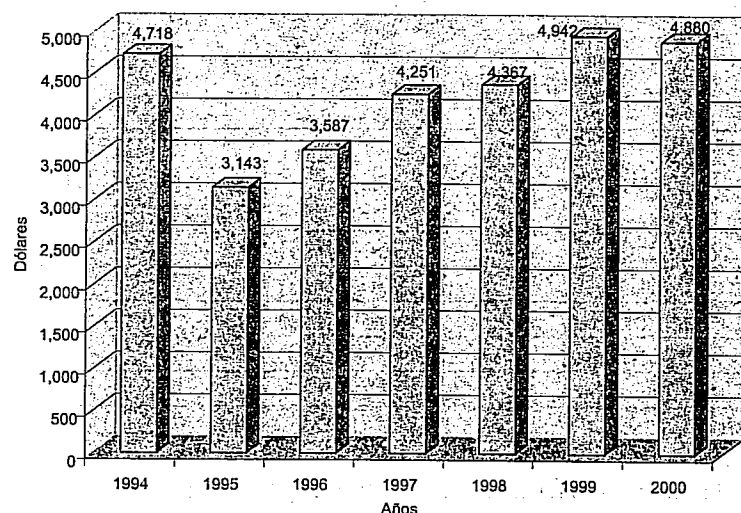
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México.

Pero además, con la estrategia neoliberal seguida por el gobierno de Ernesto Zedillo se reforzó y profundizó la dependencia de la

economía mexicana hacia la norteamericana y se hizo muy sensible la actividad productiva en México hacia el comportamiento de la expansión económica estadounidense.

Una medida ciertamente imperfecta, pero que nos aproxima a conocer la manera como se distribuye el PIB entre la población es el PIB *per cápita*. Este indicador, a partir de 1994 y hasta el 2000, indica que pese al crecimiento de la producción la situación para la población ha mejorado poco. En efecto, si bien entre 1996 y 1999 el PIB observó un incremento promedio anual de 5.1 por ciento, el PIB *per cápita* en el 2000 fue de 4 mil 880 dólares, cantidad apenas superior a la de 1994, que había sido de 4 mil 718 dólares, esto es 162 dólares menos. Así las cosas, puede decirse que el sexenio de Ernesto Zedillo constituyó otro tiempo perdido en términos de la distribución de PIB entre la población, ya que este indicador por vez primera superó en 1999 el nivel alcanzado en 1994. (Gráfica 3.)

Gráfica 3
México: PIB per cápita



FUENTE: Banco Bilbao Vizcaya con datos del INEGI. *La Jornada*, 27 de febrero de 2000, p. 122. Para el 2000, cálculo propio con datos del INEGI.

La producción industrial

Como puede observarse en el cuadro 6, el volumen de la producción industrial entre 1994 y el año 2000 creció en 31 por ciento, es decir, a un promedio anual de 5.2 por ciento, superior al promedio del PIB en ese mismo lapso que fue de 3.8 por ciento.

Dentro del sector industrial, la rama con mayor dinamismo fue la manufactura cuyo crecimiento en el sexenio fue de 39 por ciento y un promedio de 6.5 por ciento anual, tasas ambas superiores a las observadas en el conjunto de la industria. Por su parte, el peor desempeño en el sexenio zedillista lo observó la construcción que, con una impresionante caída en 1995, ha tenido una lenta recuperación que le permitió alcanzar, en el 2000, un nivel de producción apenas superior al correspondiente a 1994. (Cuadro 6.) Entre 1994 y el 2000, la actividad de la construcción apenas creció en 5.5 por ciento, lo que significó un promedio anual inferior al uno por ciento, preocupante situación si se considera la importancia de esta actividad en la generación de empleo.

Cuadro 6
México: producción industrial
índice de volumen físico (1993 = 100)

DIVISIONES	ÍNDICE PROMEDIO ANUAL							VARIACIÓN %
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000/1994
Total de la Industria	104.8	96.6	106.4	116.2	123.5	128.8	137.2	30.9
Minería	102.5	99.8	107.9	112.7	115.8	113.4	117.9	15.0
Construcción	108.4	83.0	91.1	99.6	103.8	106.9	114.4	5.5
Electricidad, gas y agua	104.8	107.0	111.9	117.8	119.9	129.4	137.4	31.1
Manufactura	104.1	98.9	109.6	120.5	129.4	134.8	144.3	38.6
Maquila de exportación	111.1	124.0	148.7	169.2	188.5	210.8	242.0	117.8

FUENTE: David Márquez Ayala, "Producción y comercio internos 1994-2000", *Reporte Económico*, Unidad Técnica de Economía, *La Jornada*, México, lunes 5 de marzo de 2001, p. 30.

Por su parte, las ramas más dinámicas de la manufactura fueron la de Producción de Bienes de Capital (54 por ciento), pero sobre todo la industria maquiladora de exportación que alcanzó en esos años un crecimiento de 118 por ciento, esto es, creció a un promedio anual de casi 20 por ciento. De esta manera, las industrias de exportación y las maquiladoras que orientan toda su producción al mercado externo, en otras palabras al norteamericano convertido en el importador de primera y última instancia tanto para las empresas exportadoras como para las maquiladoras localizadas en el territorio nacional, son el sostén del crecimiento industrial, el que a su vez determina la dinámica del PIB.

En el 2000, la maquila de exportación se convirtió en la actividad de mayor dinamismo dentro de la industria al registrar, el volumen físico de la producción, un incremento de 14.8 por ciento de incremento respecto de 1999, esto es duplicó a la manufactura y fue casi tres veces mayor que el crecimiento en la minería. Por supuesto, en el 2000 la producción de bienes de capital, con 5.5 por ciento, mantuvo el segundo sitio en términos del crecimiento del volumen de producción.

En el nivel de ramas, el mayor crecimiento en el sexenio lo registró la de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo, con un incremento promedio anual de 11 por ciento, seguida por la Industria Metálica Básica con 8.5 por ciento y la Textil y del Vestido con 5.5 por ciento; en el otro extremo, el peor comportamiento correspondió a la Industria Maderera y a la de Productos No Metálicos, ambas con un crecimiento inferior al 2 por ciento.

En síntesis, las actividades industriales vinculadas al dinamismo del sector externo mantuvieron a lo largo de gobierno zedillista ritmos de crecimiento tales que han sostenido el aumento observado en el PIB nacional.

El sector externo

El crecimiento del PIB de México en los cinco años posteriores a la crisis de 1995, pese a la caída internacional del precio del petróleo que en 1998 significó para nuestro país una pérdida aproximada de 4 mil millones de dólares –situación, por cierto, que se revirtió en 1999 cuando los precios internacionales del crudo se elevaron sustancialmente–, tiene mucho que ver con el sostenido ritmo de incremento en la exportación de manufacturas, lo cual impacta favorablemente al

PIB. De esta manera, la prolongada expansión de la economía norteamericana, advierte Márquez Ayala (periódico *La Jornada*, 12 de abril de 1999), permitió que el componente más dinámico de la demanda de los cuatro últimos años (1996-1999) haya sido la exportación, es decir, “la satisfacción de la demanda externa, que ha crecido 87.2 por ciento respecto de 1994”.

No obstante y a pesar de que mientras las exportaciones –sin incluir las maquiladoras– en el sexenio zedillista crecieron en 173 por ciento y las importaciones lo hicieron en 120 por ciento, se registró un saldo negativo acumulado en la balanza comercial en ese sexenio de casi 80 mil millones de dólares. (Cuadro 7.)

Cuadro 7
México: balanza comercial 1994-2000
(Millones de dólares)

CONCEPTO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	TOTAL
Exportaciones	48,439	59,080	65,265	64,377	72,537	87,037	385,964
Importaciones	46,274	58,964	73,476	82,816	91,566	112,764	465,860
Saldo	2,165	116	-8,211	-18,439	-19,029	-25,727	-79,896
Saldo Maquiladoras	4,925	6,416	8,834	10,526	13,444	17,678	61,823
Saldo Total	7,088	6,532	623	-7,913	-5,585	-8,049	-18,073

FUENTE: Márquez Ayala, David. “México. Comercio exterior 1994-2000”, *Reporte Económico*, Unidad Técnica de Economía, *La Jornada*, México, lunes 19 de febrero de 2000, p. 28.

El saldo negativo disminuye a 18 mil millones de dólares si se considera la industria maquiladora de exportación, es decir, a pesar de que esta rama tiene a lo largo de seis años un saldo positivo de casi 62 mil millones de dólares, fue insuficiente para mejorar la situación de la balanza comercial, que tan sólo en el 2000 presentó un déficit de aproximadamente 26 mil millones de dólares en tanto que, en ese año, el saldo de las maquiladoras de exportación alcanzó casi los 18 mil millones de dólares. (Cuadro 7.)

Ahora bien, si a la economía exportadora que opera desde México le ha favorecido el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) y, finalmente, el prolongado crecimiento de la economía de Estados Unidos que ha sido capaz de absorber volúmenes crecientes de mercancías exportadas por las empresas establecidas en México, la consecuencia es que, ahora, la salud de la economía mexicana depende más, o para mejor decirlo depende absolutamente de la economía norteamericana,³² al grado de poder decir, con poco riesgo de equivocación, que una buena proporción de las empresas industriales ubicadas en territorio mexicano deberían censarse como parte de la economía estadounidense y no como integrantes de la planta productiva nacional.

La creciente dependencia de la economía mexicana de la dinámica de las ventas al exterior, esto es del mercado norteamericano hacia donde se dirige el 89 por ciento de las exportaciones y, en general, de la evolución de la economía norteamericana, provocó la aparición de signos preocupantes en el comportamiento de la economía mexicana. En efecto, en la media que desde la segunda mitad del 2000 se empezó a observar el desaceleramiento de la economía norteamericana,³³ las exportaciones mexicanas pierden dinamismo, en tanto las importaciones, dada la sobrevaluación del peso, lo ganan. De esta manera, la "fortaleza del peso", que en 1999 y el 2000 se revaluó continuamente, actúa alentando las compras al exterior y desalentando las exportaciones.

³² Esa **dependencia**, entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia (Marini, 1977: 18), produce dependencia en otros campos, por ejemplo en política exterior, para reproducir la dependencia económica. Así, señala Anguiano Roch (1998: 10): "Aunque el discurso gubernamental sigue impregnado de referencias a principios como los de la libre autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de las naciones y la no-intervención, la característica de la nueva diplomacia es su subordinación al deseo gubernamental de hacer de México un aliado leal y confiable de Washington", la capital del país de donde proviene la mayor parte de la IED, hacia donde se dirigen casi todas nuestras exportaciones y al que debemos una enorme fortuna.

³³ "El crecimiento de la economía estadounidense se desaceleró drásticamente en el tercer trimestre de 2000 a su ritmo más débil en más de un año [...] El Departamento de Comercio dijo que el Producto Interno Bruto creció a una tasa de 2.7 por ciento en el tercer trimestre de 2000, menos de la mitad de la tasa de 5.6 registrada en el segundo trimestre, y más baja que la tasa de 4.8 por ciento del primer trimestre." (Periódico *La Jornada*, 28 de octubre de 2000: 22.)

La reaparición del déficit en la balanza comercial, que fue aproximadamente 8 mil millones de dólares en 1997, ascendió a más de 18 mil millones al año siguiente y se ubicó en casi 26 mil millones en el 2000 (Cuadro 7), reaviva de manera intermitente las preocupaciones del estallido de la crisis económica en México.

De cualquier manera, los apologistas gubernamentales explican que la economía mexicana se ha convertido en una potencia exportadora, debido a los siguientes hechos:

1. En 1989, la economía mexicana ocupaba el vigésimo lugar por su volumen de exportaciones; en cambio, al iniciarse el año 2001 se ha convertido en la octava economía comercial del mundo, la mayor exportadora de América Latina y el segundo socio comercial de Estados Unidos de Norteamérica.
2. En 1980 las exportaciones mexicanas equivalían a 8 por ciento del PIB, mientras que en el 2000 representaban más de la tercera parte.
3. En 1982 casi el 70 por ciento de las exportaciones del país provenían de la industria petrolera, en tanto que en el 2000 esa cifra descendió a 10 por ciento. Actualmente, las exportaciones manufactureras constituyen la mayor parte de las exportaciones del país.
4. Por último, casi la mitad de los nuevos empleos creados desde agosto de 1995, están vinculados al sector exportador.

Pero esta proclamada fortaleza, resulta aparente y es la principal debilidad de la economía mexicana, pues el crecimiento del sector exportador ha estado determinado por la coyuntural expansión de la economía norteamericana que empezó a desacelerarse en el año 2000, situación que ha puesto en verdadero peligro a la economía mexicana, primero por su exclusiva dependencia hacia el sector exportador y, enseguida, porque las ventas al exterior sólo se hacen hacia el mercado norteamericano. Pero hay algo más, la expansión del sector exportador en muy poco ha contribuido a mejorar las condiciones de bienestar de los mexicanos, ni siquiera de los trabajadores que se ubican en ese sector. El esfuerzo ha sido de los trabajadores mexicanos, mientras las ganancias se las han llevado los capitalistas.

La industria maquiladora de exportación

La industria maquiladora de exportación, establecida en México hacia 1965 cuando se instalaron 12 establecimientos que ocuparon

a 3 mil personas, hoy tiene una importancia fundamental en el crecimiento tanto de la producción como del empleo.³⁴

En 1990, existían mil 594 establecimientos de este tipo que ocupaban a 424 mil 652 personas. Para 1999, existían repartidas por todo el país 3 mil 384 empresas maquiladoras de exportación y el número de trabajadores empleados llegó a un millón 195 mil 71, que representan el 28 por ciento del empleo total en la industria manufacturera. Al iniciarse el año 2001, el INEGI reporta la existencia de 3 mil 713 empresas que daban ocupación a un millón 310 mil 171 trabajadores.

Dentro de la ocupación generada por esta industria, destaca el empleo de personal de bajo nivel de capacitación y el femenino, que representa más de la mitad de los obreros ocupados en esta actividad. (Bendesky, 2000: 17.)³⁵

A pesar de que el valor bruto de la producción en las maquiladoras de exportación, entre 1994 y el año 2000, se conformó en promedio de 77 por ciento de insumos importados y 23 por ciento de valor agregado nacional, en ese mismo lapso esta actividad generó un superávit comercial acumulado de aproximadamente 62 mil millones de dólares; en cambio, el sector exportador no maquilador, excluyendo al petróleo, registró un déficit de 17 mil 500 millones de dólares en ese mismo lapso. (Cuadro 7.)

Asimismo, entre 1995 y 2000 la industria maquiladora de exportación creció a una tasa promedio anual de 18 por ciento, siendo así la rama más dinámica de la actividad económica que se desarrolla en México.

Un estudio realizado por la consultoría Campen/Oxford Economic Forecasting (1998) sobre el comportamiento de la IED en

³⁴ "La entrada oficial de plantas maquiladoras en territorio mexicano se inició en 1965 con el Programa de Industrialización Fronteriza. Desde entonces, empresas norteamericanas (y de cualquier otro origen) dedicadas al ensamble, acabado y procesamiento de materias primas y bienes intermedios se han establecido en las principales ciudades de la frontera norte de México, con el objeto de reducir costos de producción a través del empleo de mano de obra barata". (Carrillo, 1985: 19.)

³⁵ "Desde su establecimiento en la frontera norte de México las plantas maquiladoras se han caracterizado por dar trabajo preferentemente a mujeres jóvenes." Asimismo, diversos estudios han llegado "a la conclusión de que existe una tendencia general de las maquiladoras a utilizar un sector específico de trabajadores, principalmente no calificados". (Carrillo, 1985: 103.)

México, concluye de la siguiente manera: "Durante los últimos cuatro años, la IED se concentró en las industrias ligadas a la exportación, esencialmente las manufacturas", incluyendo la industria maquiladora de exportación que ha podido aprovechar la prolongada expansión de la economía norteamericana.

En resumen, la industria maquiladora debido a las características del modelo neoliberal ha crecido de manera muy rápida e importante. En este momento, da ocupación a más de un millón 300 mil personas, mostrando en este aspecto un dinamismo superior al de la economía en su conjunto: "De hecho, uno de cada tres empleos en la industria manufacturera, entre 1980 y 2000, fue proveído por la maquila [...] y uno de cada seis empleos creados desde 1980 viene de la maquila."

Ciertamente, en una economía estancada, con lento crecimiento, como la mexicana, con serios problemas de desempleo, la industria maquiladora de exportación se convirtió en una bendición (Schettino, 2000: 15), o por mejor decirlo, en una falsa solución. Pero lo más importante, es que el prolongado saldo positivo de la maquila evitó una nueva crisis en los tres últimos años del siglo XX, aunque parece incapaz de evitarla en los años siguientes.

La desaceleración de la economía estadounidense y el desequilibrio cada vez más profundo de las cuentas con el exterior, con niveles elevados de desempleo, creciente pobreza, un mercado interno sin posibilidades de convertirse en sustento de la actividad económica y un frustrado intento de ingresar al Primer Mundo, fueron parte del entorno donde se desarrollarían las elecciones federales del 2 de julio de 2000.

El 2 de julio de 2000: una jornada histórica

En México, durante muchos años las elecciones fueron un rito donde no se decidía nada, en realidad los votos se asignaban y se evitaba la *molestia* de contarlos. Por eso, el 2 de julio de 2000 el país vivió una jornada electoral, al final de cuentas, histórica en tanto por primera vez en 71 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la elección del presidente de la República.

Con ello, el partido creado por Plutarco Elías Calles en marzo de 1929 y que se autodesignó garante de los postulados de la Revolución Mexicana, dejó el gobierno de manera pacífica en manos de

una alianza conservadora encabezada por el Partido de Acción Nacional (PAN), fundado por Manuel Gómez Morín en 1939 para enfrentar el "radicalismo" del presidente Lázaro Cárdenas y que, ahora, asume el poder desplazando a uno de los gobiernos más conservadores de la historia reciente mexicana.

La derrota del PRI, esperada y todo, no dejó de sorprender. Muchos, sin embargo, preveían una fuerte resistencia del partido oficial para dejar el poder: se equivocaron. Se equivocaron también aquellos que esperaban la solución de los resultados electorales en el litigio ante los tribunales y no en las urnas. En cambio, acertaron quienes apostaron al hartazgo ciudadano ante más de siete décadas de un gobierno autoritario y que si bien decía actuar en representación de los intereses nacionales y de la Revolución Mexicana, desde 1982 se mantuvo más cerca de las posiciones de la derecha política que de los intereses populares, rompiendo así con la alianza impuesta por la fracción triunfante en la Revolución a los sectores populares desde la tercera década del siglo XX.

Así, el último año del segundo milenio contempló el triunfo electoral de un bloque político donde el PAN agrupó a buena parte de los empresarios del país encubiertos bajo el nombre de "Amigos de Fox"; así como a diversos grupos creados por la derecha ultramontana, tales como Provida y la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem); o al oportunista Partido Verde Ecologista de México (PVEM) convertido por su *propietario* en un verdadero negocio familiar; a grupos de priistas resentidos y/o coptados (por ejemplo, Alfonso Durazo, quien en su momento fuera secretario particular de Luis Donaldo Colosio y ocupa el mismo cargo con el presidente Vicente Fox, o Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas y ahora con Fox titular de esa dependencia); a diversos grupos de izquierda que, invocando el "voto útil" para derrotar al PRI quisieron participar, por fin, en un desfile triunfal "aunque fuera de la derecha"; pero sobre todo, cabe destacar la participación de una corriente, la más compacta y poderosa en términos económicos, cuyo origen se encuentra en el conservadurismo del siglo XIX: "Nos referimos a la creencia hispanófila y defensora de la Colonia, que concibe a México como un bastión de la catolicidad romana y, en consecuencia, la necesidad de normar la vida pública con principios emanados de esa fe." (Martínez, 2001: 19.)

Con todo y ello, también fue evidente la participación de muchos ciudadanos sin partido atraídos por el carisma de Vicente Fox sin considerar sus propuestas políticas, ideológicas o económicas. Quizá, la participación popular en el proceso electoral —junto con la derecha tradicional y buena parte del sector empresarial—, es uno de los hechos más destacados del proceso electoral que culminó el 2 de julio de 2000 con la derrota del PRI en las urnas.

A partir de estos hechos, la tesis de partida para los propósitos de su interpretación consiste en considerar a la coalición encabezada por Vicente Fox si no la única sí la opción más viable para continuar con el proyecto neoliberal emprendido desde 1982 por Carlos Salinas de Gortari cuando era el titular de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto y Miguel de la Madrid se decía presidente de la República.

En efecto, la pérdida de legitimidad del PRI y de los gobiernos priistas debido a los resultados del ajuste estructural de orientación al mercado, permitían prever que aun ganando la elección el candidato del PRI, Francisco Labastida, el conflicto político que Vicente Fox y la derecha estaban dispuestos a emprender de no reconocerles el triunfo impediría la necesaria estabilidad política para llevar adelante una segunda generación de reformas estructurales *sugeridas* al gobierno mexicano por el FMI y el BM.

Era, pues, imprescindible proponer un cambio para continuar el proyecto neoliberal con nuevo apoyo popular sustentado en el carisma del candidato y en la esperanza de, "ahora sí", mejorar las condiciones de vida de la población. Es decir, el pragmatismo de la cúpula del poder (incluido el presidente Ernesto Zedillo), al reconocer la incapacidad del PRI para continuar el proyecto neoliberal requirió de la derecha política para garantizar la imposición de nuevas reformas estructurales tendientes a reforzar el modelo económico sustentado en el libre mercado. La similitud del proyecto de Vicente Fox con la estrategia seguida por los tres gobiernos anteriores, así como el apoyo decidido del FMI y el BM a las propuestas foxistas, pueden ser claves para demostrar la hipótesis planteada líneas arriba.

Las elecciones, por otra parte, mostraron una notoria incapacidad de la izquierda para enfrentar política e ideológicamente las propuestas neoliberales. Agrupados en la "Alianza por México", encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que

tuvo como candidato a la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, los sectores democráticos sufrieron una derrota que los puso al borde de la marginación política. No fue suficiente proponer la defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales, o sostener la independencia económica, política y cultural del país, para convocar a los ciudadanos a un verdadero cambio de régimen político. Los sufragantes se movieron por algo más simple: "Sacar al PRI de Los Pinos", como proclamó Vicente Fox a lo largo de su campaña.

Lo que seguiría después, nadie lo planteó.

La presentación y análisis de la propuesta económica de Vicente Fox a los mexicanos para obtener su voto, así como las primeras acciones en materia económica emprendidas por el gobierno foxista, ocupan las siguientes páginas.

*Nada del cambio prometido:
el proyecto económico de Vicente Fox Quesada
(2000-2006)*

El día 18 de diciembre de 1999, la Alianza por el Cambio (AC) integrada por el PAN y el PVEM, entregó al Instituto Federal Electoral (IFE) la documentación exigida por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFPE) para el registro formal de su coalición: Convenio, Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción, Plataforma Política, Programas del Ejecutivo y el Legislativo.

Los dos primeros documentos se refieren, fundamentalmente, a los términos en que se conformó la coalición, así como las normas que regirían su funcionamiento, mientras los otros cinco aluden a la visión del país que propone la coalición y la manera como se puede alcanzar desde el Ejecutivo y el Congreso.³⁶

En términos generales, AC propone que México sea un "país plena e integralmente desarrollado", sin definir de manera alguna el significado del desarrollo pleno e integral, aunque redundando en que eso significa "alcanzar el desarrollo de la sociedad mexicana en

³⁶ La información que se presenta a continuación, se obtuvo del texto elaborado por el secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Salvador Beltrán del Río, publicado en la revista *Voz y Voto*, correspondiente al mes de marzo del año 2000.

todas sus dimensiones; social, económica, educativa y cultural; ecológica, política y ética". Pero si estas propuestas se mantienen en la vaguedad conceptual, el periodo para alcanzar ese "desarrollo integral" se determina sin especificar los criterios seguidos para ello y sólo se dice que forma "parte de un proyecto de nación a largo plazo, de la proyección de un México hacia 2020-2050 fundado en los grandes consensos nacionales".

"Para llegar a ese México", AC estableció diez compromisos: 1) más empleos y mejores salarios; 2) superación de la pobreza y justa distribución del ingreso; 3) acceso a la educación de calidad; 4) ataque frontal a la corrupción; 5) construir un país seguro; 6) un gobierno al servicio de los ciudadanos; 7) impulsar el desarrollo regional equilibrado; 8) establecer una nueva relación entre todos los mexicanos; 9) gobierno ecologista; y 10) papel activo de México en el mundo.

Si bien este decálogo nada tiene de especial ni novedoso y es apenas un listado de buenos deseos, responde ciertamente a la coyuntura político-electoral y en los documentos de AC se ahonda en estos 10 compromisos con un marcado voluntarismo. Por ejemplo, en materia de elevación del empleo y mejoría en el salario, se habla de la necesidad de:

Crear las condiciones para que la economía crezca a tasas del 7 por ciento y genere cuando menos un millón 300 mil empleos anuales, garantizar la estabilidad de los indicadores fundamentales de la economía y asegurar la solidez del sistema financiero, combatir el rezago laboral y el subempleo en el que viven millones de personas, aumentar el poder adquisitivo de todos los mexicanos, democratizar la economía distribuyendo las oportunidades para todos y en todas las regiones del país.

Este es el tono de todo el documento, que en otra parte propone el "diseño y la instrumentación de una política social de Estado con visión de largo plazo y la aplicación de medidas que disminuyan los niveles de pobreza en el corto plazo", y así por el estilo buenos propósitos y compromisos tan generales que muy bien podrían ser signados por cualquier partido político.

La diferencia con otras formaciones políticas, entonces, no está en las propuestas de AC sino en la manera como propone que podrían alcanzarse, es decir, en los instrumentos y la estrategia económica diseñados para cumplir las promesas electorales en el sentido de

acabar con la pobreza, incrementar el empleo, distribuir la riqueza, o alentar el desarrollo regional equilibrado.

Las promesas de campaña

Durante su campaña electoral, Vicente Fox planteó “un proyecto económico distinto” al del PRI, sustentado en las siguientes cuatro estrategias: 1) Lograr un crecimiento de la economía con calidad; 2) Incrementar la productividad de la inversión; 3) Atraer grandes volúmenes de inversión extranjera; y 4) Impulsar la generación de empleo.

A continuación se presenta cada una de estas propuestas de estrategia, tal y como se manejaron en la campaña de Vicente Fox y la manera como se empezaron a instrumentar en los primeros cien días de su gobierno.

1. Crecimiento de la economía con calidad.

Para la AC, se dice en su programa, “no se trata de crecer por crecer, sino de hacerlo con calidad: que el crecimiento no se concrete en unos pocos estados, ni en unas pocas empresas, ni mucho menos en unas cuantas manos. El crecimiento debe tener efectos redistributivos”.

Por otra parte, como desde el punto de vista de AC “es equivocado pensar que la política económica debe tener como finalidad el crecimiento y la política social debe concentrarse en la distribución”, se plantea considerar que el crecimiento y la equidad son producto tanto de la política económica como de la política social, “ambas inciden tanto en el crecimiento como en la distribución”, por lo que se propone:

- a. Un cambio cualitativo en los programas de superación de la pobreza orientando la generación de oportunidades de inversión, producción y empleo hacia todos los mexicanos.
- b. Un cambio cuantitativo, duplicando a lo largo del sexenio 2000-2006 los recursos aplicados a la política social.
- c. Democratizar la economía mediante un programa de intervención selectiva y temporal del gobierno con instrumentos que generen capacidades y abran oportunidades para que los ciudadanos excluidos se integren productivamente al proceso de desarrollo.

d. Captar de manera masiva el ahorro popular a través de un gran sistema nacional de microcrédito y banca social que permita hacer de los excluidos nuevos emprendedores.³⁷

e. Impulsar un desarrollo regional equilibrado, con especial atención en el sur de la República y en las áreas rurales. “Para generar empleos permanentes en las zonas rezagadas y los municipios más marginados y captar las inversiones que permitan a los mexicanos tener la oportunidad de emplearse en su propia tierra, el gobierno de la Alianza por el Cambio mejorará la infraestructura para la producción en estos municipios y establecerá un sistema de incentivos a la inversión”. (Beltrán, 2000: 10.)

Asimismo, para lograr el crecimiento con calidad se propone en el proyecto económico de Vicente Fox: “Una reforma fiscal que simplifique las tasas y exenciones, que privilegie impuestos al consumo y establezca estímulos a la inversión y al ahorro de las personas físicas y morales”. (Beltrán, 2000: 9.)³⁸

Para Fox (2000: 44), la reforma fiscal se convierte en pieza clave en su proyecto económico:

Una piedra angular en el México que queremos edificar [...] como vía para estimular el ahorro, las inversiones y transformar la recaudación en motor del desarrollo. Sus criterios serán de equi-

³⁷ Esta propuesta concreta otra similar que aparecía en la estrategia para “Promover el ahorro del sector privado” incluida en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide, 1996: 5) que guió la estrategia económica del gobierno de Ernesto Zedillo, expuesta de la siguiente manera: “Realizar acciones para promover el ahorro popular”, sin especificar ninguna de ellas. En cambio, el gobierno foxista, anunció en febrero del 2001 que: “El Programa de Microcréditos para ‘changarros’, mediante el cual se otorgarán financiamientos de entre 700 (setecientos) a 30 mil pesos, arrancará la segunda quincena de marzo [...] El gobierno federal —dijo la coordinadora del Programa— canalizará 200 millones de pesos en una primera etapa al financiamiento de ‘changarros’ por medio de organismos no gubernamentales que estarán encargados de la administración de los recursos, evaluación de proyectos y el establecimiento de las ‘garantías sociales.’” (Periódico *La Jornada*, 20 de febrero de 2001, p. 16.)

³⁸ Esta propuesta se parece mucho a las medidas aplicadas por Ronald Reagan al inicio de su primera gestión, a principios de los años ochenta y que iniciaran las políticas neoliberales en diversos países del mundo, tal y como se expuso en el inciso titulado “La modernización conservadora”, incluido en el capítulo 1 de esta obra.

dad en las cargas, simplificación del pago y eficacia en la administración. Su objetivo será disponer de mayores recursos para beneficiar a los más pobres: para incluir a los excluidos.

El fin de esta reforma es simple, por un lado se trata de disminuir el impuesto a los sectores de mayores ingresos³⁹ y, se dice, que con ello se incrementa de inmediato el ingreso nacional en la misma proporción de la disminución impositiva; como la población de mayores ingresos no eleva su consumo con la reducción del impuesto, el monto disminuido se canaliza al ahorro, lo cual automáticamente incrementará la inversión. Al mismo tiempo, para reducir la demanda y controlar la inflación se propone gravar el consumo para disminuirlo,⁴⁰ es decir, homologar la tasa del IVA a 15 por ciento, consistente en la eliminación de la tasa cero a los alimentos y medicinas, libros, colegiaturas, estancias hospitalarias, etcétera. Con estas medidas, el programa foxista considera posible “incrementar el ahorro interno del sector privado de un 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 25 por ciento hacia el tercer año del gobierno”.⁴¹

Este primer planteamiento parte de reconocer implícitamente al sector externo como la variable que impulsará el crecimiento de la economía nacional, por lo cual el mercado interno, a corto plazo, importa menos, esperando que el abatimiento de la inflación permita, en el mediano plazo, elevar el poder adquisitivo de los consumidores.⁴²

³⁹ En la propuesta de Reforma Fiscal del presidente Fox, se propone disminuir la tasa máxima del Impuesto sobre la Renta (ISR) del actual 40 por ciento a 32 por ciento. Los empresarios, por su parte, proponen reducirla hasta el 25 por ciento. (Periódico *La Jornada*, 20 de marzo de 2001: 20.)

⁴⁰ En el proyecto de Fox, se propone reducir el consumo de un crecimiento real de 8.1 en el 2000 a 3.5 en el 2001. (Ver Cuadro 8.)

⁴¹ En el Pronafide (1996: 5) zedillista, se propuso también elevar el ahorro interno, aunque en cuantía más modesta, del 16.1 por ciento al 17.7 por ciento del PIB. Para lograr este incremento de 1.6 puntos, se contaba con la privatización del sistema de pensiones que movilizaría el ahorro de los trabajadores; en cambio, el gobierno de Fox supone posible incrementar el ahorro privado en 3 puntos sólo con “estímulos a la inversión y al ahorro de las personas físicas y morales”.

⁴² De acuerdo con dos funcionarios de alto nivel del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial: “Los mercados internacionales ofrecen enormes oportunidades para aumentar el empleo y el ingreso en la agricultura, las manufac-

De manera similar al “Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000” (Pronafide), que en materia económica fue la guía estratégica del gobierno de Ernesto Zedillo, el proyecto de Vicente Fox propone “incrementar los niveles de ahorro del sector público del actual 2 por ciento del PIB a por lo menos un 3 por ciento, proponiendo como objetivo el obtener un equilibrio operacional en las finanzas públicas al cuarto año del gobierno”. (Beltrán, 2000: 9.)⁴³

Respecto a la balanza de cuenta corriente, el proyecto foxista considera deseable mantener el déficit “a niveles aceptables” sin precisar cuál podría ser ese “nivel aceptable”, aunque se proyectó para el 2001 un crecimiento de medio punto. Además, se propone que “el ahorro disponible en México, interno y externo, pase del 25 al 30 del PIB”.⁴⁴

2. Incremento de la productividad de la inversión.

El proyecto foxista plantea elevar la productividad de la inversión y se propone pasar de un cociente de Inversión/PIB de 5.25 por ciento de ahorro para una tasa de crecimiento del 5 por ciento del PIB, a otro de 4, con lo cual si se realiza una inversión de 30 por ciento del PIB se lograría un crecimiento a tasas superiores al 6 por ciento “lo que, en conjunto, con las demás acciones mencionadas, podría permitir que nuestra tasa de crecimiento llegara hasta el 7.5 por ciento anual.” (Beltrán, 2000: 10.)

Para lograr incrementar la productividad, en el programa económico de Vicente Fox se propone:

turas y los servicios. Todos los países donde el ingreso ha aumentado sustancialmente han hecho uso del comercio internacional, y los beneficios han sido mayores en los países con una infraestructura y con instituciones que sustentan una firme respuesta a la oferta”. (Lustig y Stern, 2000: 5.)

⁴³ En el Pronafide (1996: 5), este propósito se redactó de la siguiente manera: “El mantenimiento de finanzas públicas sanas es una condición necesaria para incrementar el ahorro público. Para el año 2000 se espera lograr un balance cercano al equilibrio.”

⁴⁴ Nuevamente viene a cuento del Pronafide (1996: 4), que se planteaba lograr para el año 2000 un ahorro total de 25.4 por ciento respecto del PIB, dividido así: 22.2 por ciento, ahorro interno (público y privado) y 3.2 por ciento de ahorro externo. Con Fox, la propuesta es descansar la inversión, en mayor medida, en el ahorro externo, que se propone alcance el 5 por ciento del PIB sin señalar el momento para lograrlo.

- a. Realizar las reformas necesarias en aquellos sectores de mayor posibilidad de atracción de inversión del sector privado nacional y extranjero: el agropecuario, el financiero, el energético, el de transportes y las telecomunicaciones, entre otros.
- b. Mejorar los servicios públicos mediante la reducción de costos de operación de empresas paraestatales clave (CFE, PEMEX, ISSSTE e IMSS) y minimizar costos de tramitación de actividades del sector privado. Apoyar la inversión en infraestructura básica de transportación, puertos y comunicaciones que reduzcan los costos de transacción de las empresas privadas.
- c. Asegurar, mediante la política industrial, la innovación y la competitividad, una inserción exitosa de nuestro aparato productivo en la era del cambio tecnológico, la globalización y la economía del conocimiento. "Una política industrial enfocada no a producir, sino a cómo producir mejor. Una política industrial dirigida a reducir la brecha en la productividad que tenemos con nuestros principales socios comerciales."

3. Incremento del flujo de inversión extranjera.

Con el fin de atraer a la inversión extranjera, que desempeña en este modelo un papel clave, el proyecto foxista propone llevar a cabo las siguientes tres acciones:

- a. Establecer reglas de competencia claras y transparentes en los mercados de la economía mexicana.
- b. Ofrecer garantías jurídicas con leyes modernas y adaptadas a la nueva inserción de México en el mundo.
- c. Apertura a alianzas estratégicas de las empresas paraestatales.

En todo caso, el proyecto foxista se propone abolir cualquier obstáculo a la llegada de las inversiones extranjeras eliminando toda restricción a su ubicación, evitando cualquier posible regulación de sus actividades y ofreciendo a las empresas estatales como posibles receptoras de capital foráneo.

Desde este punto de vista, el foxismo resulta un despropósito, francamente desnacionalizador y obstinado en atraer la inversión extranjera a cualquier costo. En este sentido, para alentar a la IED, el proyecto de Fox, señala: "En concreto, se reforzarán los mecanismos que eliminan los elementos que generan incertidumbre y los obstáculos que reducen de manera artificial los rendimientos del capital invertido" (Criterios, 2001: 17), dejando a la imaginación los elementos a eliminar para evitar la incertidumbre y los obstáculos a superar para elevar la ganancia del capital.

4. Fomento del empleo.

Para generar las plazas de trabajo suficientes y dar empleo a los jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral, población calculada en un millón 300 mil personas, el proyecto económico de Vicente Fox propone también emprender tres acciones:

- a. Instrumentar el programa de reformas sectoriales y modernización del sector público para crear el marco institucional que permita a la economía pasar a una plataforma de crecimiento promedio de 7 por ciento.⁴⁵
- b. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a la industria local, para reducir el costo de generación de un empleo formal en la economía a niveles entre los 70 y los 90 mil dólares. Este valor permitirá la generación de 1.5 millones de empleos con una tasa de inversión equivalente a entre 24 y 31 por ciento del PIB.
- c. Sostener un programa de impulso a la capacitación en el trabajo de escolarización formal que permita mejorar las condiciones de empleo y remuneración de los trabajadores.

Muchas cuentas alegres. Incluso, al momento de plantear que el empleo se hará mediante el apoyo a la mediana y pequeña empresa se pierde de vista que la mayor parte de este tipo de empresas está vinculada al mercado interno que, como hemos visto, no se considera prioritario en el corto plazo y, además, carece de la potencia y el dinamismo capaz de alentar el crecimiento de la inversión y la economía. Al parecer, tampoco se tomó en cuenta el hecho de que las empresas pequeñas y medianas, proveedoras de las grandes compañías exportadoras, dependen de la dinámica importadora de Estados Unidos, economía cuyo proceso recesivo afecta, sin duda, las exportaciones mexicanas y, por tanto, a las pequeñas y medianas empresas exportadoras indirectas.

Pero además, cuando este proyecto económico ofrecido por Vicente Fox para apoyar su candidatura a la Presidencia de la República, se dice dirigido a todos y "en especial para aquellos a quienes los gobiernos del PRI" les ha negado la oportunidad de vivir en una sociedad "solidaria, equitativa, incluyente, en la que impere la justi-

⁴⁵ "Las medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento del Estado y de las instituciones sociales fomentan el crecimiento y la equidad, al reducir las restricciones burocráticas y sociales para la acción económica y la movilidad social." (Lustig y Stern, 2000: 6.)

cia social", se quiere hacer creer que las condiciones de pobreza y exclusión, dependen de quien gobierne y no del modelo económico imperante. De esta manera, Fox justifica la continuidad del proyecto neoliberal y supone que sus efectos sociales negativos pueden evitarse con un gobierno proveniente de un partido distinto al PRI, del cual surgieron los presidentes promotores de la era neoliberal. En fin, el proyecto propuesto por Vicente Fox a los mexicanos tiende fundamentalmente a mantener el modelo neoliberal, aunque ahora se le quiera dar un "rostro humano", cambiando apenas lo necesario para que todo siga igual.

Por último, sorprende que a lo largo del proyecto económico de Fox en ningún momento se hiciera referencia a los efectos que sobre la economía nacional pudieran traer consigo el precio internacional del petróleo y el comportamiento de la economía norteamericana. (Situación que se corrige en los *Criterios Generales de Política Económica para el 2001*.) Ese descuido provocó que muchas expectativas creadas en la campaña electoral hayan tenido que ser revisadas y modificadas quitándoles todo el peso del optimismo.

Bienvenidos a la realidad

El mes de octubre del 2000, al dar a conocer Luis Ernesto Derbez y Eduardo Sojo, coordinadores del equipo económico de transición, las metas económicas para el año 2001 las cosas se presentaron muy distintas a las ofrecidas durante la campaña electoral, pues la disminución del ritmo de crecimiento de la economía, así como lo reducido de los recursos fiscales disponibles y la previsión de una disminución del precio del petróleo, hicieron perder el optimismo del candidato y ofrecieron la cara adusta del presidente electo.

Para Derbez y Sojo:

La desaceleración de la economía así como la reducción del precio del petróleo, aunado a la dinámica regularizable de algunos componentes del gasto público permiten prever que será necesario un esfuerzo de reducción del gasto de alrededor del 0.7 por ciento del producto para el próximo año.

Además, al dar coherencia al proyecto económico se previó un crecimiento de 4.5 por ciento del PIB, en lugar del 7 por ciento ofre-

cido en la campaña electoral, incluso menor al logrado en el año 2000 que fue de 6.9 por ciento; el precio internacional promedio del barril de petróleo se calculó en 18 dólares; y el ajuste de 0.7 por ciento en el presupuesto de egresos significó una reducción de 35 mil millones de pesos, respecto al aprobado para el año 2000. Además, la inflación se previó en 6.5 por ciento; el déficit fiscal en 0.5 por ciento del PIB y el de la cuenta corriente en 3.6 por ciento del producto.

El tipo de cambio se estableció en 10.10 pesos por dólar y, por supuesto, el salario mínimo se propuso elevarlo 7 por ciento en promedio (que fue lo único cumplido), dada la inflación esperada. Todo lo anterior, explicaban los integrantes del equipo de Fox, requería captar 20 mil millones de dólares anuales en IED a partir del 2001.

Estas propuestas se mantuvieron en los *Criterios Generales de Política Económica para el 2001*, según puede verse en el cuadro 8.

Cuadro 8
México: marco macroeconómico

VARIABLE	2000	2001
Producto Interno Bruto (Tasa anual de crecimiento)	7.1	4.5
Inflación (Tasa anual de crecimiento)	8.9	6.5
Tipo de Cambio Nominal	9.5	10.1
Cuenta Corriente (% del PIB)	-3.3	-3.8
Balance Público (% del PIB)	-0.9	-0.5
Petróleo: Precio Promedio del Barril (en dólares)	25.8	18.0
Consumo (Tasa anual de crecimiento)	8.1	3.5
Importaciones (Tasa anual de crecimiento)	22.1	10.5
Exportaciones (Tasa anual de crecimiento)	15.4	12.5

FUENTE: *Criterios Generales de Política Económica para 2001*, Poder Ejecutivo Federal, diciembre de 2000.

Las críticas y el debate sobre las propuestas económicas no se hicieron esperar. Incluso, desde el propio equipo de Fox surgieron algunas advertencias. Por ejemplo, Mario Rechy Montiel, integrante del grupo foxista de transición en el sector agrario, señaló que si los recursos públicos para el campo en el año 2001 son iguales o

menores al año 2000 (alrededor de 23 mil millones de pesos), no se podría superar la crisis del agro y la pobreza se extendería y profundizaría. A su vez, diputados del PRI y el PRD señalaron que “de los 120 proyectos que tenía en la agenda el presidente electo, Vicente Fox, en el mejor de los casos podrán cumplirse 12”, es decir, apenas el 10 por ciento. (Pérez y Aponte, 2000: 5.)⁴⁶

Ante esta situación se podía prever que el Congreso haría modificaciones al presupuesto presentado por el Ejecutivo, cosa que finalmente ocurrió a fines de diciembre del 2000.⁴⁷

Las primeras acciones

El primero de diciembre, en su mensaje de toma de posesión ante el Congreso de la Unión, Vicente Fox (2000: 44) advirtió:

El programa económico que proponemos contempla una participación eficaz y ponderada del gobierno para promover la equidad entre las regiones, las empresas y los hogares; una política de desarrollo empresarial para la pequeña y mediana empresa y una política económica con sentido social para los trabajadores por su cuenta.

Así, al asumir la Presidencia de la República Vicente Fox mantuvo su propósito de fortalecer la actividad empresarial privada ofreciendo a los empresarios las facilidades necesarias para su expansión, incluyendo a los trabajadores por su cuenta, aunque nada dijo de los asalariados a quienes, más adelante en el mismo mensaje, les advirtió sobre la necesidad de “actualizar la legislación laboral” para alentar la inversión.

⁴⁶ Más agresivo se mostró el conocido economista norteamericano Rudiger Dornbusch, quien aseguró que Vicente Fox decepcionaría, “pues no tiene ideas, no tiene equipo, ni un Congreso controlado”. (Periódico *La Jornada*, 25 de septiembre de 2000: 3.)

⁴⁷ En efecto, en un hecho sin precedente el Congreso añadió 22 mil millones de pesos a la propuesta original y fueron reasignados 30 mil millones para fortalecer el gasto social. Así, el aumento provocó un incremento del déficit fiscal proyectado en 30 por ciento y pasó de 0.5 por ciento del PIB a 0.66 por ciento. Particularmente, se elevó en 4 mil millones de pesos el gasto programable para el apoyo productivo al desarrollo rural; a la educación pública se destinaron 405 millones más y se asignaron otros 6 mil millones de pesos a la seguridad social. (Revista *Proceso*, número 1261, 31 de diciembre de 2000, pp. 18 y 19.)

Por supuesto, esa es la dirección que han seguido las acciones en los primeros meses del gobierno de Fox. Por ejemplo, el último día de febrero se instaló el “Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos”, con lo que dieron inicio las reformas en materia de trabajo a fin de “flexibilizar las relaciones laborales”. Al evento, asistieron “académicos e investigadores, quienes colaborarán en la elaboración de programas orientados a la educación para el trabajo productivo y la vinculación de los planes formales de educación con la capacitación y productividad.” (Periódico *La Jornada*, jueves 1 de marzo de 2001: 18.)

Por su parte, la reforma fiscal propuesta se sustenta en la pretensión de aplicar el IVA a todas las actividades económicas en el país para generalizar el pago de este impuesto al consumo, complementándose con reducciones a los impuestos al ingreso. Sin embargo, la propuesta foxista de eliminar la tasa cero, a medicinas y alimentos, al parecer tendrá dificultades para ser aprobada en el Congreso.⁴⁸

Una primera apreciación

Al cumplirse los primeros cien días del gobierno de Vicente Fox, las expectativas por alcanzar un crecimiento económico sólido empezaron a disolverse rápidamente. El compromiso de alcanzar un “nuevo milagro mexicano”, definido por un crecimiento sostenido de 7 por ciento, su calidad, la oferta abundante de empleos, el mejor ingreso y la robustez fiscal, entre otras virtudes “que permitirán resolver todos los problemas del país”, se encuentra en suspenso.

Aun más, las proyecciones de crecimiento de 4.5 por ciento, hechas a finales del año 2000, se ajustaron hasta el 3 por ciento debido a que la desaceleración de la economía norteamericana ha sido más acentuada de lo previsto. Finalmente, incluso la previsión oficial de un crecimiento del PIB de 4.5 por ciento para el año 2001 significa la imposibilidad de crear el millón 300 mil empleos ofrecidos por Fox en su campaña electoral.

Según el presidente, existen serias dificultades para cumplir las promesas de campaña debido a que “la mitad del Presupuesto Fede-

⁴⁸ “El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, reconoció que ‘va a ser difícil que la iniciativa de reforma fiscal sea aprobada por los congresistas tal cual.’” (Periódico *La Jornada*, 19 de marzo de 2001: 20.)

ral de Egresos paga errores del pasado”: el peso de los rescates bancario y carretero, así como el costo de la reforma al sistema de seguridad social, hacen que el gobierno carezca de recursos para cumplir sus objetivos y promesas. No obstante, los llamados “errores del pasado”, fueron siempre producto de las concertaciones entre el PAN, que encabezó la alianza que lo postuló como candidato a la Presidencia de la República y el PRI. Sobre todo, vale recordar que el modelo neoliberal nunca fue cuestionado por Fox, ni por el PAN. Las privatizaciones, el reducido papel del estado, el IPAB (alias actual del Fobaproa), el rescate carretero, la apertura comercial indiscriminada o la desregulación financiera, nunca han sido sometidos a la crítica por Fox y parece que jamás lo serán.

Por su parte, el “choque externo” que significa la desaceleración de la economía de Estados Unidos puede arrastrar a la economía mexicana a la recesión. En nuestro país, desde los últimos meses del 2000 la disminución del ritmo de crecimiento empieza a ser evidente y alarmante: “El ritmo de las exportaciones cayó a la mitad, debido sobre todo a las menores compras de EU (el 89 por ciento del total se destinan a ese mercado); la producción, la inversión y el empleo empiezan a descender.” (Chávez, 2001: 22.) Muchas otras cifras podrían apoyar esas afirmaciones,⁴⁹ pero una puede ser significativa. Según el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista, al reconocer la preocupación del gobierno mexicano por la desaceleración económica de Estados Unidos previó que las exportaciones mexicanas registrarán una caída de 50 por ciento respecto al nivel de los últimos cinco años y, en consecuencia, que “las ventas al exterior crezcan 8 por ciento, en lugar del 15 por ciento” previsto originalmente (periódico *La Jornada*, 17 de enero de 2001: 18), lo cual afectaría severamente el crecimiento de la econo-

⁴⁹ En enero del 2001, Luis Ernesto Derbez, secretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, advirtió que las exportaciones mexicanas descenderían 50 por ciento debido a la desaceleración de la economía norteamericana. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señaló que tan sólo en diciembre del 2000, en la industria maquiladora se perdieron 23 mil 737 empleos; a su vez, la empresa automotriz Chrysler anunció el despido de 2 mil 600 trabajadores. El Centro de Análisis Macroeconómico (CAN) de la Facultad de Economía de la UNAM, encontró que durante el gobierno de Ernesto Zedillo el salario mínimo perdió 51 por ciento de su poder de compra, tendencia que no se ha detenido en los cien primeros días del gobierno de Vicente Fox.

mía mexicana cuyo comportamiento positivo depende de sus exportaciones.

Lo realmente dramático es que ante las crecientes dificultades económicas, los estrategas del foxismo han empezado a emplear la misma “amarga medicina” zedillista de la contención monetaria y fiscal, que fatalmente terminan por acentuar la pobreza y la desigualdad. Es un hecho que la alternancia en el poder no significa necesariamente cambio alguno en el modelo económico de las últimas dos décadas y, más bien, lo que puede verse es una profundización del mismo.

Tan es así, que la propuesta de reforma fiscal enviada al Congreso por el gobierno foxista despertó un rechazo generalizado ya que se sustentó en la eliminación de las tasas cero y todas las exenciones a rubros de consumo básico (con la excepción de la renta y compra de vivienda), como alimentos, medicinas, colegiaturas, y libros, entre otros. Un elemento más de la reforma fiscal propuesta por Vicente Fox, es la disminución de la tasa máxima del impuesto sobre la renta (ISR) a las personas físicas y las empresas de 40 a 32 por ciento. Además, se propone gravar las prestaciones sociales que actualmente no lo están. A cambio, de los 120 mil millones de pesos que se prevé recaudar, se canalizarán 6 mil 480 millones de pesos más en repartir mensualmente 108 pesos (ciento ocho pesos) entre los 5 millones de familias en condiciones de pobreza extrema (aquellas cuyo ingreso es inferior a un dólar), además de subsidiar con 780 millones de pesos la canasta básica de 100 medicamentos y con 350 millones para costear a las familias más pobres sus consultas médicas gratuitas, es decir, se destinará a los pobres un total de 7 mil 580 millones de pesos, sin que sea claro el destino de los restantes 112 mil 420 millones que se calcula recaudar.

En fin, el cambio prometido no llega y la población empieza a desesperar.

El modelo neoliberal mexicano. Sus principales rasgos

De lo expuesto, podemos decir que el modelo económico impuesto en México desde la década de los ochenta, consolidado sobre todo en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, tesoneramente continuado por el de Ernesto Zedillo y que al parecer poco o nada cambiará con el gobierno de Vicente Fox, tiene las siguientes características, a saber:

- a. Una cada vez menor intervención del Estado en la economía, cuya contraparte es el creciente papel de los mecanismos de mercado en la asignación de los recursos productivos y la formación de los precios. Al Estado sólo se le permite actuar para garantizar el buen funcionamiento del mercado.
- b. Se transfiere todo tipo de propiedad del sector público al privado, incluso se privatizan los servicios públicos que el sector privado exige para convertirlos en fuente de ganancias.
- c. Traslado al sector privado de las definiciones respecto del rumbo e intensidad del crecimiento económico.
- d. Apertura de la economía al comercio y al flujo de capitales del exterior.
- e. La elevada prioridad concedida a los equilibrios macroeconómicos, como la estabilidad monetario-cambiaria, la fiscal y los precios.⁵⁰
- f. Preservación de un tipo de cambio antiinflacionario (moneda nacional sobrevaluada) como instrumento para abatir la inflación y modernizar la planta productiva interna.
- g. La existencia de programas temporales y específicos (como Solidaridad o Progresía) orientados a mitigar la pobreza más que a eliminarla.
- h. En el campo se promueve la reforma jurídica modificando el artículo 27 constitucional y las leyes reglamentarias, con la finali-

⁵⁰ Estas características forman parte de las políticas de estabilización aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo fundamento es la teoría ortodoxa de la balanza de pagos. "Según este enfoque, para ajustar el déficit exterior la devaluación debe ser acompañada de una política de reducción de la demanda global, de una apertura total del comercio exterior y del libre movimiento de los precios según las leyes del mercado." (Guillén, 1984: 54.)

Por su parte, Rudiger Dornbusch (1993: 11 y 13) señala que el enfoque tipo FMI "únicamente considera restricciones de la demanda para combatir la inflación [...] lo cual requiere de niveles altos de desempleo para romper con la inflación de salarios". Es decir, según Dornbusch, "debido a que los programas ortodoxos de control de la demanda no afrontan directamente la inercia inflacionaria, deben contrarrestar esto creando desempleo. Éste debe tener tasas lo suficientemente altas como para empujar la inflación salarial por debajo de la tendencia de la inflación de precios. El desempleo es, por lo tanto, el mecanismo de desinflación".

dad de terminar con el reparto agrario e impulsar la privatización y la capitalización de la agricultura nacional.⁵¹

- i. En tanto se considera que la intervención del Estado para fomentar una actividad específica (sector, rama o empresa) deja sin oportunidad a otras, se rechaza el diseño y aplicación de políticas estatales (industrial, agrícola, etcétera) pues, se dice, esos apoyos pueden permitir seguir en el mercado a empresas o sectores de la actividad económica ineficientes. Lo cual resulta injusto para aquellas empresas que, sin apoyos gubernamentales, se mantienen en el mercado invirtiendo recursos para mejorar su eficiencia y calidad. Esto sugiere que el mercado decide el número y tipo de empresas que se mantienen en la actividad económica.

⁵¹ Para el efecto se impuso el Plan Nacional de Modernización del Campo (*Pronamoca*), que "fue un instrumento de política agraria en el que se plantearon los lineamientos, objetivos, normas y procedimientos para la modernización del campo, una modernización mediante profundas transformaciones de los sistemas y de las formas de tenencia y organización, de la concepción de una agricultura eficiente y competitiva cuyo paradigma es la gran propiedad y de manera implícita la liquidación de la reforma agraria". (Tarrío *et al.*, 1995: 27 y 33.)

III LOS RESULTADOS

Introducción

En estos momentos, quizá más que nunca porque la pobreza se generaliza y el deterioro ambiental atenta contra el futuro, la legitimidad social de cualquier modelo económico radica en su capacidad para hacer crecer la producción a largo plazo de manera sustentable⁵² y alentar una forma de distribución de la riqueza que favorezca el aumento del ingreso de los trabajadores. Asimismo, el crecimiento y distribución de la riqueza han de transcurrir en un ámbito donde se aliente la participación ciudadana en las definiciones esenciales del presente y el futuro de la nación, es decir, donde la democracia sea modo de vida social.

En esta perspectiva, las siguientes líneas tienen el propósito de revisar los resultados económicos y sociales provocados por la estrategia económica neoliberal seguida en México a lo largo de sus tres últimos gobiernos. Conviene advertir que si bien el neoliberalismo no inventó la crisis económica, el desempleo, la pobreza o la enorme deuda externa, sí ha sido incapaz de superar los problemas que enfrentó y no sólo eso sino que ha profundizado los efectos más perniciosos del capitalismo.

Una economía dependiente y extranjerizada

Tal y como se ha insistido, la dinámica económica en México tiene como base el crecimiento de ramas industriales productoras, fun-

⁵² La ONU define el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (*Informe*, 1992: 8, recuadro 2.)

damentalmente, de mercancías destinadas al mercado externo; en nuestro país, cuando se habla de mercado exterior nos referimos, cada vez más, exclusivamente al de Estados Unidos de Norteamérica.

En esta perspectiva, una parte importante del modelo económico impuesto por los gobiernos neoliberales en nuestro país es la creciente preocupación por el continuo mejoramiento de las condiciones locales exigidas por el capital foráneo para establecerse. Estas condiciones son, entre otras, la flexibilidad laboral; la eliminación de cualquier restricción respecto de los campos donde puede actuar el capital extranjero o de las proporciones que debe guardar éste en las empresas donde participe; e impulsar la privatización de empresas públicas cuyo destino es terminar, las más lucrativas por supuesto, en manos del capital trasnacional.

Pero pedir al capital externo establecerse en el país requiere de algo más que buenos deseos, por ejemplo un mercado en expansión o con poder adquisitivo suficiente, ambas condiciones inexistentes en el país; entonces se ofrece parte del territorio nacional como la puerta de entrada al mercado de los Estados Unidos, el más importante del mundo, por cierto. En consecuencia, las maquiladoras de exportación o aquellas empresas manufactureras cuyo propósito sea atender las necesidades del consumidor norteamericano, encuentran campo fértil y condiciones siempre mejores para establecer la totalidad o parte de sus procesos productivos en distintas regiones de la República donde el capital extranjero encuentra mano de obra barata y calificada; infraestructura adecuada; y, sobre todo, autoridades siempre solícitas a cumplir los deseos y necesidades del inversionista.

Por supuesto, hacer crecer la actividad económica requiere incrementar la inversión. En este caso, el crecimiento de la industria manufacturera y del PIB en México se ha basado en el sustancial incremento de la inversión extranjera directa (ver cuadro 6), debido a que los capitalistas mexicanos invierten en otras partes y la banca, al no haber podido resolver su propia crisis, dejó de ser factor sustantivo en la intermediación del crédito,⁵³ lo que dificulta orientar el

⁵³ A pesar de los apoyos recibidos por la banca privada, el gobierno mexicano emprendió una nueva e imponente operación de rescate del sistema bancario. Al respecto, "la *Standard and Poor's*, la compañía que califica la calidad de las inversiones financieras, estima que el total del rescate bancario llegará hasta 20 por ciento del producto interno bruto del país. Esto equivale a 80 mil millones de dólares", o 960 mil millones de pesos al tipo de cambio actual (Bendesky, 1999: 20). Como finalmente ocurrió.

ahorro interno hacia las actividades productivas, pese a los ofrecimientos de eficiencia hechos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, cuando justificaban la necesidad de privatizar la banca, o el de Ernesto Zedillo al momento de sustentar el proyecto privatizador de la administración de los fondos de retiro de los trabajadores.

Es un hecho: el comportamiento de la inversión extranjera poco tiene que ver con la situación económica interna. Por ejemplo, 1995 fue un año de profunda crisis en México y, en consecuencia, solamente es posible explicar el aumento de la IED observado ese año debido a la bonanza de la economía norteamericana. Esto explica también por qué, a pesar de la incapacidad de la banca privada establecida en México para ofrecer fondos de inversión, la economía mexicana ha seguido creciendo sin utilizar ahorro interno y, sobre todo, sin responder a una visión estratégica del país.

De esta manera, empieza a ser lenguaje metafórico hablar de economía mexicana, pues las actividades de producción que se desarrollan en nuestro país la convierten, apresuradamente, en una *economía extranjerizada*, en la cual los sectores más dinámicos de la "economía nacional" son exclusivamente aquellos orientados a satisfacer la demanda externa. Precisamente, en esos sectores se obtiene el mayor volumen y valor de la producción, además de realizarse en ellos las inversiones nacionales y extranjeras más cuantiosas.

Los sectores empresariales vinculados al mercado interno expresan continuamente su preocupación por la cada vez más deteriorada capacidad de compra de los trabajadores mexicanos, pero su inquietud realmente radica en la estrechez de la demanda doméstica, de manera tal que si pudieran encontrar un "nicho de mercado" en Estados Unidos, o integrarse a la cadena productiva de alguna gran empresa exportadora, sin mucho pensarlo abandonarían su preocupación por un mercado, como el interno, cuyas perspectivas de crecimiento son casi nulas dada la continua pérdida de poder de compra del salario y la concentración del ingreso, peculiares del capitalismo, pero acentuadas en el modelo neoliberal.

La crisis del campo

El sector agropecuario, que en 1994 aportaba el 6.3 por ciento al PIB nacional redujo su participación al 5.8 por ciento en 1998 y al 5.6 por ciento en el 2000, carece de las condiciones mínimas indis-

pensables para superar la crisis en la que se encuentra inmerso desde hace ya varias décadas, agudizada por las reformas promovidas por Carlos Salinas de Gortari y el propio Ernesto Zedillo.

El proceso ha sido largo y tortuoso. En 1995, en plena crisis, el gobierno zedillista eliminó los subsidios a la comercialización y el sistema Conasupo que incluía la compra, almacenamiento, transporte y transformación, comercialización, distribución y venta al menudeo de los productos agrícolas básicos; asimismo, entre 1995 y 1998 se transfirieron las bodegas de granos básicos de "Bodegas Rurales Conasupo" (Boruconsa) y "Almacenes Nacionales de Depósito Sociedad Anónima" (ANDSA) a los grandes productores y agentes privados. Pero el golpe definitivo se dio en 1998, cuando desaparece la Conasupo. Todo esto, más las reformas al artículo 27 constitucional impulsadas por Carlos Salinas de Gortari y realizadas en 1992 para "promover el mercado de tierras y las economías de escala en el campo", sumieron al agro en una profunda postración sin ofrecerle los elementos necesarios para superarla.⁵⁴

Por muchos motivos, uno de los aspectos más alarmantes de la situación actual del país es la producción de granos básicos. En 1995, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aceptó la existencia de un déficit de aproximadamente 6 millones de toneladas de granos básicos y reconoció la existencia de "una disminución global de la producción de alimentos, ya que mientras en otros años se llegó a los 31 millones de toneladas, este año (1995) no se rebasarán los 25 millones". (Periódico *La Jornada*, 22 de septiembre de 1995: 57.) En efecto, la caída de la producción fue brutal y la cosecha más afectada fue la de maíz, cuya demanda global interna se calcula en 17 millones de toneladas, mientras que apenas se produjeron 15.5 millones en 1995. Como resultado de esta situación, la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, admitió que en 1995 la importación de granos básicos tendría que elevarse de 7 a 9 millones de toneladas necesaria para cubrir la demanda nacional. (Periódico *La Jornada*, 16 de junio de 1995.)

Pero lo peor estaba todavía por venir y en el primer semestre de 1996 se alcanzó el récord histórico de importación de maíz. Tan sólo en ese lapso se compraron al exterior 615.6 millones de dólares

⁵⁴ Incluso, entre 1994 y 1999 los recursos provenientes de los apoyos directos al campo por parte del gobierno federal pasaron de 4 mil 704 millones de pesos a 3 mil 254 millones, en pesos de 1994.

de ese grano básico en la dieta de los mexicanos, lo que convirtió al maíz en el principal producto agrícola de importación con una participación de 28 por ciento sobre el total de productos del campo adquiridos en el exterior. El monto destinado a la compra de maíz en los seis primeros meses de 1996, significó un aumento de 474 por ciento, respecto de las adquisiciones del grano hechas en el mismo lapso de 1995.

Debido a esta situación ha sido necesario elevar continuamente las importaciones de alimentos de origen norteamericano, provocando esta situación que entre 1988 y 1999 la "Balanza Comercial Agroalimentaria" con Estados Unidos haya registrado un déficit de 26 mil 478 millones de dólares. La razón: en este lapso, con excepción de 1995 cuando por la crisis se redujeron las importaciones, en los años restantes la situación crítica en el sector agrícola ha hecho indispensable elevar la compra de alimentos. (Cuadro 9.)

Cuadro 9
México: balanza comercial agroalimentaria
con Estados Unidos 1988-1999

AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO
1988	2,275	2,933	658
1989	2,297	3,920	-1,623
1990	2,651	4,625	-1,974
1991	3,107	4,629	-1,522
1992	2,828	5,985	-3,157
1993	3,340	5,760	-2,420
1994	2,855	4,513	-1,658
1995	3,805	3,519	286
1996	3,735	5,430	-1,695
1997	4,078	5,179	-1,101
1998	4,653	6,152	-1,499
1999	4,848	5,622	-775
SALDO	36,858	63,336	-26,478

FUENTE: De 1988 a 1993: Carlos Salinas de Gortari, *VI Informe de Gobierno*, 1994, Anexo, pp. 28, 29 y 163.

De 1994 a 1999: <http://www.fas.usda.gov/scripts/bico.frm.idc#country>.

Así pues, las reformas al artículo 27 constitucional que tienden a la eliminación del ejido y a la privatización de la actividad productiva; la falta de una política de apoyo a la producción agrícola; el rezago en infraestructura debido a la falta de inversión pública; la falta de crédito oportuno y barato han desalentado la producción de granos básicos y las elevadas tasas de interés han acrecentado desmesuradamente la cartera vencida de los agricultores; la nula asistencia técnica y la carencia de riego, han hecho que nuestro país se encuentre cada vez más lejos de la autosuficiencia alimentaria, condición elemental para cualquier nación con pretensiones de ser soberana, o mantener su soberanía, propósito que en estos tiempos de globalización parece estar muy lejos de representar alguna preocupación para los gobiernos neoliberales.

En general, la producción de granos básicos a lo largo de los años noventa ha permanecido estancada, con un promedio de 30 millones de toneladas, cantidad similar a la obtenida a principios de los ochenta, pero con la diferencia de 20 millones más de habitantes.

No es de extrañar entonces, que por ejemplo en 1998 fuera necesario adquirir en el exterior, es decir, de Estados Unidos, 13.3 millones de toneladas de los siete principales granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya y cebada), "la cantidad más elevada de los últimos 13 años", según informara el Banco de México (periódico *La Jornada*, 18 de febrero de 1999: 44) y que, paulatinamente, México se haya convertido para Estados Unidos en el tercer mercado en importancia para ese tipo de productos, tan sólo después de Canadá y Japón. Tampoco extraña la creciente dependencia alimentaria hacia ese país, que cubre ya el 100 por ciento de las importaciones mexicanas de maíz y sorgo, así como el 80 por ciento del consumo nacional de carne.

La crítica situación del campo la sintetizan investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, quienes en un estudio al respecto (periódico *El Financiero*, 13 de noviembre de 1996: 24), concluyen con la siguiente observación:

Las distorsiones que el neoliberalismo ha introducido en la economía rural de México —con menor oferta de crédito y tendencia a la desaparición de la figura del ejido, de agricultura familiar— se traducen en menor autosuficiencia alimentaria, y en una distribución inequitativa de los alimentos: aunque las importaciones crecen y hasta ahora ha habido suficiente oferta de productos, quedan desprotegidas las zonas pobres y los lugares de mayor poder adquisitivo resultan favorecidas.

En todo esto se advierte, sin duda, el fracaso de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional mediante las cuales se pretendió "modernizar" el campo y convertirlo en una actividad atractiva para el capital extranjero. Por supuesto, no era ese el camino. La destrucción del ejido no resolvió la crisis en el campo mexicano que, en estos momentos, sobrevive en medio de una profunda y desalentadora desolación productiva.

Poco cambia si nos referimos a la ganadería. Esta actividad generaba a principios de los años noventa, alrededor de 4 mil 600 millones de dólares anuales, con aproximadamente un millón 400 mil unidades de producción y cerca de 4 millones 700 mil empleos directos. Pero al abrirse el mercado al exterior, se provocó una caída de 11 por ciento en la producción con la consecuente pérdida de alrededor de 400 mil empleos, según informó al finalizar el año 2000 la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado. (Periódico *La Jornada*, 29 de noviembre de 2000: 12.) En estos momentos, México se ha convertido en el segundo mercado más importante para la exportación de carne bovina de Estados Unidos, desplazando con ello a Canadá que pasó a ocupar el tercer sitio.⁵⁵

En general, la actividad pecuaria se ha enfrentado al desplazamiento de alimentos importados —en gran parte desechos— provenientes de Estados Unidos, lo cual ha profundizado la crisis de la ganadería, junto con la agricultura, desde hace ya varias décadas.

Nada pues, bajo el neoliberalismo, parece redimir la situación de los millones de mexicanos que viven en el campo.

Deuda externa

A lo largo de los gobiernos neoliberales se ha reforzado la tendencia a depender, cada vez más, del débito externo.

⁵⁵ El caso de la carne resulta realmente dramático. A partir de 1988 las importaciones de carne quedaron libres de aranceles, pero sería hasta 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuando comenzaron a crecer de manera significativa porque su precio resulta mucho menor al del mercado nacional. En estos momentos, se adquieren a Estados Unidos de Norteamérica 420 mil toneladas, que representan el 39 por ciento del consumo nacional; sin embargo, se estima que por la vía del contrabando llegan al país otras 400 mil toneladas, lo que en conjunto representa el 80 por ciento de lo que consumen los mexicanos de ese alimento. (Periódico *La Jornada*, 22 de enero de 2001: 16.)

Entre 1993 y 1994 se contrataron 22 mil millones de dólares más de deuda externa, con lo cual al finalizar el último año mencionado la deuda del país con el extranjero se colocó en 135 mil millones de dólares. Si a eso se agrega que en 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo recurrió a un nuevo endeudamiento con el gobierno de Estados Unidos por 20 mil millones de dólares y uno más por 18 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y diversos bancos privados "para superar la emergencia económica", estaríamos hablando de un adeudo externo en 1995 de aproximadamente 173 mil millones de dólares, con lo cual desde ese momento México desplazó a Brasil como la nación más endeudada del Tercer Mundo.⁵⁶

De acuerdo con información del Banco de México, el FMI y la Secretaría de Hacienda, en 1999 la deuda total del país, que incluye los pasivos públicos (internos y externos), privados, bancarios y los generados por el rescate carretero y de la banca, alcanzó 304 mil 398 millones de dólares, cantidad 64 por ciento superior a la existente en diciembre de 1994, cuando inició la gestión de Ernesto Zedillo.

La distribución de la deuda total del país, entre 1994 y 1999, es decir el lapso del gobierno de Ernesto Zedillo, puede observarse en el cuadro 10.

Cuadro 10
México: las cuentas por pagar
(Millones de dólares)

Concepto	1994	1999
Deuda pública	131,323	138,927
Externa	85,436	91,055
Interna	45,887	47,872
Deuda privada	50,522	60,641
Empresas	25,428	16,952
Bancos	25,094	43,689
Banco de México	3,860	6,000
Rescate bancario	0	98,830
TOTAL	185,705	304,398

FUENTE: Banco de México y Standard and Poor's, tomado del periódico *La Jornada*, 2 de septiembre de 1999: 26.

⁵⁶ A principios de abril de 1996, la deuda externa de Brasil se calculaba en 151 mil 500 millones de dólares.

En enero del 2001, el recién nombrado secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, informó sorprendido que la deuda pública de México era muy alta: 2 billones 874 mil millones de pesos, equivalentes a 47.9 por ciento del PIB. (*La Jornada*, 12 de enero de 2001: 21.)

Por otra parte, en los últimos 10 años han salido del país 445 mil 225 millones de dólares para pagar la deuda externa, monto superior al valor previsto del PIB de 2000, calculado en 419 mil millones de dólares. Tan sólo en 1999, la salida de recursos del país para cubrir las erogaciones por el servicio de la deuda externa sumaron 13 mil 348 millones de dólares (periódico *La Jornada*, 13 de marzo de 2000: 17), cantidad superior tanto a los 11 mil 568 millones de dólares que ingresaron al país por concepto de IED ese año, como a los correspondientes al 2000 que alcanzaron los 13 mil 162 millones de dólares. (Ver, Cuadro 2.) Por último, entre 1995 y el año 2000 se transfirieron al exterior 64 mil 803 millones de dólares, equivalentes a un tercio del incremento del PIB en ese mismo lapso.

Pero las cosas no terminan ahí. Tan sólo entre 1999 y el año 2003, se deberán hacer transferencias al exterior por 69 mil 266.5 millones de dólares para cubrir el servicio de la deuda, lo cual significa el uso de recursos generados por el esfuerzo exportador, pero como son insuficientes, sobre todo en la perspectiva de la prolongación de la desaceleración de Estados Unidos de Norteamérica y la caída de las exportaciones mexicanas, habrá de recurrirse al viejo expediente de endeudarse para pagar. Pero cualquier procedimiento que se utilice, significa para el país perder cuantiosos recursos indispensables para atender las necesidades de su crecimiento y la atención a los seculares rezagos en materia de bienestar social que afectan a la mayor parte de los mexicanos.

Privatizaciones

Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) hasta el de José López Portillo (1976-1982), los aparatos gubernamentales aumentaron continuamente su presencia en la economía, la sociedad y la política mexicanas. A lo largo de todo ese tiempo, el gasto público y la creación de un sector paraestatal en todos los campos de la actividad económica se convirtieron en los instrumentos fundamentales de la acción gubernamental. En efecto, entre la creación de toda la

banca nacional de desarrollo (con excepción del Banco Nacional de Crédito Agrícola que había sido fundado en 1926) y la expropiación del petróleo durante el gobierno cardenista y la nacionalización de la banca, el sector paraestatal creció sustancialmente tanto en la producción de bienes y servicios, como en las esferas de la distribución y el consumo.

El sector paraestatal mexicano se constituyó sustentado en tres razones, utilizadas con distinto énfasis e intensidad a lo largo de los distintos gobiernos del periodo nacional revolucionario, a saber:

1. La respuesta de los gobiernos *emanados de la Revolución* a las necesidades del desarrollo capitalista en cada momento histórico, lo que en el discurso oficial significó el propósito de "sentar las bases de un desarrollo soberano", para lo cual se emprendían proyectos de inversión necesarios al proceso de acumulación cuyos periodos de maduración, rentabilidad, localización o riesgo, los hacían poco atractivos a la inversión privada.
2. La nacionalización de empresas extranjeras que operaban en sectores, en algún momento, considerados básicos o estratégicos de la economía.
3. La absorción, por parte del gobierno de numerosas empresas privadas que, por diversas causas, amenazaban con cerrar "cancelando empleos, fuentes de producción y —en ocasiones— creando condiciones propicias para la gestación de monopolios". (Tamayo, 1988: 646.)

De esta manera, en diciembre de 1982, al comenzar el gobierno de Miguel de la Madrid, existían en México mil 115 entidades paraestatales, distribuidas de la siguiente manera: 102 organismos descentralizados; 744 empresas de propiedad mayoritaria estatal; 78 de propiedad minoritaria; y 231 fideicomisos.

En ese momento, la participación del Estado en la economía, a través de las empresas del sector paraestatal, se concentraba tanto en la generación de infraestructura básica, como en la producción de bienes intermedios y de capital e insumos para la industria nacional. En varios sectores (petróleo, petroquímica, acero, azúcar, comunicaciones, transportes y energía eléctrica), las empresas públicas eran importantes monopolios, es decir, actuaban como capitalistas concentrando la producción y centralizando el capital, manteniendo una significativa participación en el mercado, aunque las decisiones de inversión o localización se guiaban por consideraciones ajenas a la ganancia.

En particular, al inicio de la década de los ochenta el peso del sector industrial paraestatal tanto en el conjunto de la industria como en la economía nacional era de fundamental importancia. En un diagnóstico de este sector, hecho al comenzar el gobierno de Miguel de la Madrid por el entonces secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa (1983: ix), se concluía lo siguiente:

Integrado por 376 empresas en las que trabajan aproximadamente 750 mil personas, con un flujo de caja que se acerca a los 3 billones 700 mil pesos, con participación en 66 ramas industriales diferentes que generan poco más de la tercera parte del producto industrial bruto del país y cerca de la tercera parte de la deuda pública externa, el sector [industrial paraestatal] tiene una importancia decisiva para el país.

A pesar de ello, pronto el Estado mexicano impondría un nuevo modelo económico y social donde el sector de empresas paraestatales dejaba de tener la importancia estratégica que se le atribuyó bajo el nacionalismo revolucionario en el logro de los objetivos nacionales y los del propio gobierno.

Como se ha dicho antes, en 1982 estalla la crisis atribuida al agotamiento del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y a los excesos de gasto público en que se incurrió para sostenerlo. (Ortiz, 1998: 47.) Para enfrentarla, el gobierno de Miguel de la Madrid emprendió el *cambio estructural de la economía* con orientación al mercado, en donde la reforma al Estado se convierte en el eje central. La propuesta neoliberal es sencilla, pero trascendente: pasar de un Estado propietario a un Estado rector.

En realidad, la privatización de los activos públicos es una parte esencial en el modelo neoliberal. Así ha sido en México y en el mundo entero, sin embargo la rapidez con que ocurrió en nuestro país el proceso de desincorporación del patrimonio nacional es realmente sorprendente. En 1983, con cierto sigilo, el gobierno empieza su sistemática acción encaminada a liquidar el sector paraestatal, proceso que se apresura en 1989 desde el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En este sexenio, la privatización, extinción, liquidación, fusión o transferencia de las entidades paraestatales, fueron los procedimientos mediante los cuales el patrimonio nacional pasó a manos del capital privado nacional y extranjero y la velocidad del proceso fue tal que en 1994 existían apenas 219 enti-

dades paraestatales, distribuidas de la siguiente manera: 82 organismos descentralizados; 107 empresas de propiedad estatal mayoritaria y ninguna de propiedad minoritaria; y 30 fideicomisos, es decir, habían desaparecido, en apenas una docena de años, 936 entidades paraestatales, todo ello bajo el discurso de la modernidad, o como escribiera Jacques Rogozinski (1997: 105 y 111. Cuadro 4.2), el encargado de llevar a cabo el programa privatizador en el gobierno salinista:

La privatización en México se concibió en todo momento como una parte importante del proceso integral de ajuste macroeconómico y reforma estructural de la economía, siendo los objetivos generales de la política económica sentar las bases para lograr un crecimiento económico sostenido que se traduzca en un mayor nivel de bienestar de la población.

La estrategia seguida por los gobiernos neoliberales para iniciar un proceso de privatización, ha sido generar un clima de alarma con el propósito de legitimar el traspaso de la empresa pública al capital privado.

Pero ¿cuál ha sido la experiencia de las privatizaciones en México? ¿Para qué han servido los recursos obtenidos? ¿Se ha elevado la calidad de los bienes y servicios, o han disminuido sus precios, razones con las cuales se ha justificado cualquier privatización?

Un informe del Banco Mundial, difundido a principios de abril del 2001, reveló que entre 1990 y el 2000 México obtuvo por la privatización de empresas públicas ingresos por 31 mil 749 millones de dólares, la tercera cifra más alta en el conjunto de las naciones latinoamericanas, después de Brasil (que captó 71 mil 129 millones de dólares) y Argentina (con 44 mil 651 millones). Y si uno de los motivos explícitos de las privatizaciones fue reducir el saldo de la deuda externa nacional, el negocio fue pésimo a juzgar por los resultados alcanzados en términos de flujo de divisas, aunque sí se logró consolidar una nueva, poderosa e influyente clase empresarial.

Los 31 mil 749 millones de dólares obtenidos con las privatizaciones, según información de la Secretaría de Hacienda, representan menos de la mitad de los 63 mil 928 millones de dólares que, entre 1990 y el 2000, pagó el gobierno mexicano para cubrir exclusiva-

mente los intereses de su deuda externa. De esta manera, el propósito de privatizar empresas para disminuir el saldo de la deuda externa con los recursos obtenidos de la venta estuvo lejos de cumplirse. Así, "mientras el Estado entregó a particulares cerca de un millar de empresas públicas, entre ellas las siderúrgicas, ingenios, bancos, carreteras y Teléfonos de México, la deuda externa bruta aumentó de 77 mil 770.3 millones de dólares en 1990 a 90 mil 160.3 millones de dólares a mediados del 2000, lo que representa un incremento de 16 por ciento en el periodo". (Periódico *La Jornada*, 15 de abril de 2001: 16.)

Por otra parte, en nuestro país las privatizaciones nunca han sido acompañadas de la disminución de precios. Con las privatizaciones, por ejemplo, ni las tarifas telefónicas disminuyeron, ni las autopistas se manejaron de manera eficiente y cuotas reducidas; la banca no ha mejorado su eficiencia, o bien operado con tasas de interés pertinentes. Por el contrario, ha ocurrido que luego de las privatizaciones han sido *necesarios* cuantiosos rescates, como el de la banca a través del desaparecido Fobaproa, cuyo alias hoy es el de Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), o el de las carreteras y los ingenios azucareros que han costado al pueblo mexicano verdaderas fortunas.

Pero también se ha dicho que las privatizaciones permitirían al gobierno obtener más recursos para incrementar su gasto en el renglón social. Sin embargo, con Carlos Salinas de Gortari la privatización de cientos de empresas con el pretexto de obtener recursos para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza, no logró mejorar las condiciones de vida de la población y sólo benefició a un puñado de empresarios cercanos al aparato gubernamental del salinismo, algunos de ellos incorporados ya al selecto grupo de los hombres más ricos del mundo. En estos momentos, todavía muchos mexicanos se preguntan qué ocurrió con el "Fondo de Contingencia Económica", constituido en 1990 con más de 63 mil millones de pesos provenientes de la desincorporación de la banca y Telmex, entre otras empresas paraestatales.

Ahora, la llamada segunda generación de cambios estructurales tiene como sustento la privatización de lo poco que aún queda en poder del gobierno. Actualmente, se presiona continuamente para apresurar la privatización de los sectores eléctrico y petrolero, e in-

corporar a los trabajadores al servicio del Estado al sistema privado de pensiones para el retiro y, desde el 2 de julio de 2000, el sector privado apoyado en lo que consideran su triunfo en las urnas, va por todo. Por ejemplo, para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es preciso mantener:

Las presiones sobre el Ejecutivo y el Legislativo para que se aprueben las reformas por las que han peleado durante años: nuevo régimen fiscal, cambios en la Ley Federal del Trabajo, apertura del sector energético a inversionistas extranjeros y nacionales, y mayor participación privada en la educación (Zúñiga, 2001: 23).

Aún más, John M. Bruton, vicepresidente ejecutivo de la American Chamber México, dijo tener claro que la necesidad de elevar la captación de capitales foráneos hacia México, "tiene la premisa de la apertura mexicana en diversos sectores reservados; es decir, se fincará en las privatizaciones que lleve a cabo el gobierno foxista". (Periódico *La Jornada*, 1 de marzo de 2001: 26.)

Vistas desde el otro lado, la privatización de la infraestructura y los servicios ha sido el peor negocio para los sectores mayoritarios de la sociedad pues se entrega al gran capital privado nacional y trasnacional el uso de bienes públicos (agua, suelo, subsuelo, etcétera) sin recibir ningún beneficio a cambio. En esta estrategia se usan recursos públicos para financiar proyectos "privados" se forman grandes monopolios u oligopolios privados que reemplazan a los públicos; no existe libre competencia y, por tanto, acuerdos monopolísticos permiten el aumento de las tarifas al usuario sin que se garantice un buen servicio; no hay control social-político sobre bienes y servicios de interés público; y al final, la sociedad paga los desastres ocasionados por el deficiente manejo privado, como ocurrió con el rescate carretero, el bancario, azucarero y el de las aerolíneas. Sin duda, la preocupación de muchos sectores por la privatización es mayúscula en tanto después del sector eléctrico y el petróleo, para privatizar sólo queda el territorio nacional, que por cierto ya empezó a enajenarse.⁵⁷

⁵⁷ El 11 de abril de 2001, el diario *La Jornada* publicó una pequeña nota con el siguiente texto: "El secretario estatal de Desarrollo y Fomento Económico de Baja

A pesar de todo, el afán privatizador no se detiene. En abril del 2001, se conoció que autoridades federales impulsan la privatización de los servicios urbanos y obras de infraestructura, "hoy reservadas al sector público", según reveló Antonio Madrigal Ortiz, director general de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República. Vicente Fox, pues, sigue el mismo camino de los presidentes priístas. La vida parece seguir igual.

El sistema bancario

Ocho años después de haber sido nacionalizada la banca, se inició su desincorporación del sector público. En efecto, en agosto de 1990 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas leyes que en lo sucesivo regirían la actividad bancaria y los grupos financieros. Poco después se llevó a cabo la sexta Reunión Nacional de la Banca en Ixtapa-Zihuatanejo, donde el secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, se refirió a los ocho principios fundamentales que habrían de regir el proceso de desincorporación.

Los principios propuestos por el gobierno de Salinas de Gortari para llevar adelante el proceso de privatización de la banca, fueron, de acuerdo con Guillermo Ortiz Martínez (1994: 216-217), los siguientes:

1. Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo.
2. Garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración.
3. Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización.
4. Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos.
5. Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones.
6. Buscar obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos.

California Sur, Jesús Druk González, dio a conocer que inversionistas canadienses comprarán en 3.5 millones de dólares las 340 hectáreas que abarca la isla El Mogote, ubicada frente a la bahía de La Paz [...] Según el funcionario estatal, los términos de la compraventa del Mogote ya fueron acordados y sólo resta que el Congreso autorice su desincorporación de la insula para que se cierre la operación."

7. Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado.
8. Propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias.

Más tarde, el 4 de septiembre de 1990 el presidente Carlos Salinas de Gortari expidió el "Acuerdo que establece los principios y bases del proceso de desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple y crea el Comité de Desincorporación Bancaria", con lo cual se inició formalmente la privatización de la banca.

A la distancia, no sólo se pueden lamentar los escasos resultados alcanzados, sino observar el engaño. El punto 4, sobre todo, parece una ironía mordaz contra los mexicanos, pues sin duda el negocio de la privatización consistió en vender a grupos nacionales, cuya vocación nada tenía que ver con el ser banqueros pues fueron más bien mercaderes ávidos de ganancias rápidas y fáciles para lo cual al momento de adquirir alguno de los 18 bancos subastados inmediatamente buscaron en el extranjero grupos de capitalistas que los adquirieran.⁵⁸

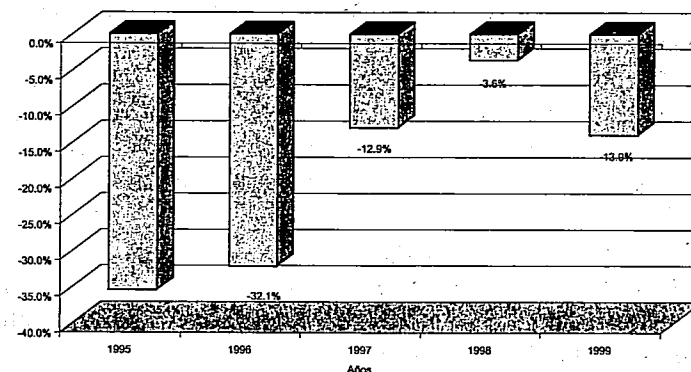
En los seis años del último gobierno encabezado por priistas, el de Ernesto Zedillo, la banca recién privatizada transitó de la bonanza a la mediocridad, que la hizo incapaz de financiar la actividad económica del país provocando la necesidad de una mayor participación de la banca de desarrollo en los apoyos financieros al sector productivo. De acuerdo con el entonces director del Banobras, José Luis Flores, "el financiamiento de la banca comercial de 1994 a 1999 a empresas y familias se desplomó 71 por ciento". (Periódico *La Jornada*, 21 de enero del 2000: 16.) En realidad a lo largo del gobierno zedillista, la banca privada mostró un comportamiento negativo respecto del financiamiento a la actividad económica del país.

Asimismo, un reporte del Banco de México estableció que en el 2000 el crédito bancario total al sector privado reportó una contracción en términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario, de 11.5 por ciento. (Gráfica 4) "Con esa cifra, concluye el reporte, acumu-

⁵⁸ Los 18 bancos privatizados, puestos a la venta fueron: en un primer paquete, Multibanco Mercantil de México, Banpaís y Banca Cremi; en un segundo paquete: Banca Confía, Banco de Oriente, Banco de Crédito y Servicio, Banco Nacional de México; el tercer paquete lo formaron Bancomer y el Banco BCH; el cuarto, Banca Serfin, Multibanco Comermer y Banco Mexicano Somex; el quinto, Banco del Atlántico, Banca Promex y Banoro; el sexto y último paquete puesto a la venta lo integraron el Banco Mercantil del Norte, el Banco Internacional y el Banco del Centro. (Ortiz, 1994.)

ló entre 1995 y 2000 una caída, también real, de 40 por ciento." Pero la situación es más aguda en el caso del crédito directo a empresas y particulares, que entre 1995 y 2000 acumuló una caída real de 68 por ciento. (Periódico *La Jornada*, 28 de marzo de 2001: 26.)

Gráfica 4
Financiamiento bancario al sector privado



FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. Periódico *El Financiero*, 2 de marzo de 2000: 4.

Sujeto a una parálisis como intermediario en el crédito, el sistema bancario existente en México se ha convertido en el principal prestamista del gobierno federal hacia el que canaliza la mayor parte de los recursos captados de los ahorradores para ser convertidos en bonos de deuda interna. Esto y los intereses que obtienen del IPAB, permiten a la banca comercial obtener grandes utilidades sin realizar la función para la que fue creada.

Las razones invocadas en su momento para privatizarla, crear una banca mexicana, eficiente, competitiva y promotora del desarrollo, quedaron en mera declaración de propósitos frustrados, o engaño premeditado. En este momento, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el conjunto de la banca mexicana tiene un capital contable de 11 mil millones de dólares, monto infe-

rior al valor de una sola empresa trasnacional –la española Terra Networks, dedicada al negocio de la Internet, cuyo capital contable asciende a 12 mil 500 millones de dólares–. Así de pobre e inútil ha resultado la banca privatizada en México, ahora en su mayor parte en manos del capital extranjero.

De hecho, desde su privatización la banca en México ha servido poco, o para mejor decirlo nada, al desarrollo nacional. Por el contrario, su rescate cuesta ya 98 mil millones de dólares que los contribuyentes mexicanos habrán de pagar a lo largo de los próximos 30 años. El camino de la reestructuración bancaria ha resultado oneroso y desnacionalizador. De los 18 grupos de accionistas mexicanos que participaron en la privatización del sistema, se mantienen sólo dos como propietarios: el de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, a quienes pertenece Banamex, y el de Roberto González, propietario de Banorte; el resto ha hecho negocio entregado los bancos, o parte de ellos, al capital extranjero. En el 2000, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, realizó una operación por mil 500 millones de dólares para adquirir Bancomer.

Con todo y ello, se mantiene el programa de rescate de la banca a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), alias del desprestigiado “Fondo Bancario para la Protección del Ahorro Bancario” (mejor conocido como Fobaproa). En el año 2000, por ejemplo, el gobierno mexicano, fiel militante de la doctrina del libre mercado, mediante el IPAB realizó una operación de rescate de Banca Serfin, destinando para ello 20 mil millones de pesos y una vez saneado el banco los dueños lo traspasaron al capital español. También el IPAB acudió al rescate de Bancrecer, que costó 82 mil 400 millones de pesos, para sanearlo y entregarlo luego al capital foráneo.

Los saldos sociales: salario, ingreso y empleo

De acuerdo con información presentada en el cuadro 11, al iniciarse la era de los gobiernos neoliberales los salarios en México participaban del 36 por ciento del ingreso nacional y las empresas del 56 por ciento; a lo largo de los siguientes tres lustros, la situación cambió en perjuicio de los ingresos de los trabajadores que en 1996 obtenían apenas el 29 por ciento del ingreso nacional, mientras que las empresas se apropiaban del 62 por ciento; en el primer caso, es

el porcentaje más bajo de los últimos 20 años, mientras las empresas en 1996 alcanzaron la proporción más elevada del ingreso en el mismo lapso.

Cuadro 11
México: distribución del ingreso (1980–1996)

TIPO DE INGRESO	1980	1990	1996
Impuestos a la Producción y al Comercio Exterior	9.7	10.1	9.3
Excedente Bruto de Operación (Ingreso de las Empresas)	56.3	61.5	62.2
Remuneración al Trabajo (Sueldos, Salarios y Prestaciones)	36.0	29.5	29.1
Subsidios	-2.0	-1.2	-0.7

FUENTES: Para 1980: Quinto Informe Presidencial, 1993. Para 1990 y 1996, INEGI, *Cuentas de Bienes y Servicios 1988–1996*, tomo 1, noviembre de 1997. Tomado de David Márquez Ayala, “Reporte Económico”, *La Jornada*, 15 de noviembre de 1999.

Y quizá estemos hablando de una de las distribuciones más injustas del mundo. En efecto, un estudio elaborado por el Banco Mundial concluye de la siguiente manera: “A pesar de las amplias reformas económicas realizadas en el país, la distribución del ingreso en México se mantuvo entre las más desiguales del mundo.” (Periódico *La Jornada*, 14 de marzo de 2001: 22.) No obstante, la nota del BM debió advertir que ese resultado se obtuvo debido al tipo de reformas emprendidas por el gobierno mexicano. No lo hace así el BM para evitar reconocer el fracaso de la estrategia *recomendada* por el propio organismo financiero a los gobiernos neoliberales mexicanos, pero los hechos son contundentes e irrefutables.

Bajo los tres gobiernos posteriores a 1982, la participación del 40 por ciento de los hogares más pobres en el ingreso nacional se ha reducido paulatinamente al pasar del 14 al 12 por ciento entre 1984 y 1998; a cambio, en ese mismo lapso se acrecentó la participación correspondiente al 10 por ciento de las familias más ricas del país que en 1998 se apropiaban ya del 38 por ciento del ingreso total. (Cuadro 12.) Pero las cosas no se detuvieron ahí y en el estu-

dio ya citado del Banco Mundial, con datos actualizados hasta diciembre del 2000, se dice "que en México el 10 por ciento de la población de menos recursos obtiene sólo 1.5 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento de los mexicanos más favorecidos económicamente concentra 42.8 por ciento del ingreso".

Cuadro 12
México: participación en el ingreso corriente
total por estratos de hogares

ESTRATO	1984	1989	1992	1994	1996	1998
40 % más pobre	14.35	12.86	12.68	10.81	13.20	12.47
40 % medio	36.15	33.59	33.14	31.65	33.10	33.45
20 % más rico	49.50	53.55	54.18	57.54	53.70	54.08
10 % más rico	32.77	37.93	38.16	41.24	37.90	38.11

FUENTE: INEGI, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, tercer trimestre de cada año.

Bajo las circunstancias descritas, esto es, las de una dinámica económica interna dependiente exclusivamente de la salud de la economía norteamericana, no resulta extraño que en nuestro país los salarios sean bajos —una de las formas de atraer al capital extranjero— y los trabajadores pierdan continuamente capacidad de compra (tan sólo entre 1994 y el 2000 el salario mínimo perdió el 30 por ciento de su poder adquisitivo. Ver Cuadro A-3), mientras la economía registra tasas de crecimiento positivas, puesto que su dinamismo dejó de depender del mercado interno para someterse al externo. De hecho, el aparato productivo existente en nuestro país ya dejó de orientarse a satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población, pues ni las maquiladoras ni las empresas exportadoras tienen que ver con la solución a las carencias seculares de los trabajadores mexicanos.

Aquí en México, a las empresas extranjeras se les presta el territorio y se les obsequia parte de nuestra infraestructura para atraerlas y dejar la mítica ilusión de los empleos y un crecimiento estadístico que, hasta el momento, jamás se ha traducido en mejoras reales en el nivel de bienestar de los trabajadores mexicanos.

Estrechamente asociada a la inequitativa distribución del ingreso, se encuentra la situación que guarda el empleo de los trabajadores. En 1994, al concluir el gobierno de Carlos Salinas, la ocupación total ascendía a 28 millones 166 mil personas, que representaban el 81 por ciento de la población económicamente activa (PEA). La profunda crisis de 1995, que significó la caída del PIB en 6.2 por ciento, hizo disminuir la ocupación en poco más de 800 mil empleos; sin embargo, al año siguiente la recuperación económica permitió elevar el empleo a 28 millones 282 mil plazas, es decir, apenas 116 mil más que las registradas en 1994, lo cual significa, calculando el crecimiento de la PEA en 2 millones 600 personas, que en los dos primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo se registró un déficit de 2 millones 484 mil empleos. (Godínez, 1999: 26.)

El crecimiento económico se prolongó a lo largo de 1997 y permitió incrementar el empleo en un millón 105 mil plazas, cantidad insuficiente como para cubrir la demanda nueva de ocupación por un millón 300 mil empleos y, mucho menos, para resolver el déficit acumulado. En 1998, el incremento anual de plazas laborales fue de 2.6 por ciento, es decir, ese año fueron abiertas sólo 287 mil nuevas plazas de trabajo. Así, entre 1997 y 1998, al crearse un millón 392 mil nuevos empleos, se generó un déficit en la creación de puestos de trabajo de un millón 608 mil plazas, las cuales agregadas al faltante en los dos primeros años del gobierno zedillista (2 millones 484 empleos), significan un déficit total acumulado de aproximadamente 3 millones 692 mil empleos, tan sólo en los cuatro primeros años del gobierno zedillista.

Pero eso no fue todo, ya que a pesar de un crecimiento del 3.7 por ciento del PIB, concentradas en los estados con mayor presencia de empresas maquiladoras o en aquellos donde tienen su asiento los grandes grupos industriales, en 1999 sólo fueron generadas en el país 706 mil 41 nuevas plazas en el sector formal de la economía, cantidad que representó apenas 54.3 por ciento de las fuentes de trabajo demandadas por las personas que se incorporaron ese año a la PEA. Con ello, los puestos de trabajo creados ese año quedaron por debajo de la meta establecida en el "Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000", fijada en 800 mil nuevos empleos, los cuales, desde que fueron propuestos, resultaban absolutamente insuficientes para atender la demanda de trabajo del millón 300 mil mexicanos que ese mismo año se incorporaron al mercado laboral.

En el "Informe de Ejecución 1999 del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000", elaborado por la Presidencia de la República, se concluye que entre 1995 y 1999, "el sector formal de la economía generó 2 millones 70 mil 800 puestos de trabajo, en un periodo en que al menos 5 millones 600 mexicanos se incorporaron al mercado laboral", es decir, oficialmente se aceptó un déficit superior a los 3 millones y medio de empleos, muy cercano al calculado por nosotros líneas arriba.

De esta manera, la generación de empleo se ha convertido en una de las principales debilidades del modelo neoliberal. En estas condiciones, millones de mexicanos han tenido la disyuntiva de incorporarse a la economía informal (donde se ocupa ya el 50 por ciento de la PEA),⁵⁹ o bien emigrar a Estados Unidos de Norteamérica. Tan importante es este último rubro, que el envío hacia México de divisa por parte de los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos, entre 1995 y el año 2000, según el Banco de México, alcanzó los 28 mil millones de dólares, equivalentes al 83 por ciento de la inversión norteamericana en el país, que en ese mismo lapso fue de 33 mil 676 millones de dólares. (Periódico *La Jornada*, 30 de octubre de 2000.)

*La pobreza*⁶⁰

Pero si todo lo anterior resulta lamentable, su consecuencia lo es tanto o más: el persistente aumento de la pobreza provocado por la estrategia económica neoliberal.

En México, millones de pobres se han sumado a los ya existentes como herencia del nacionalismo revolucionario, que fue tan incapaz, como el neoliberalismo lo ha sido, de abatir la pobreza. En otras palabras, si bien el neoliberalismo no inventó la pobreza ni a

⁵⁹ En septiembre de 1999, la Secretaría del Trabajo, señalaba que el 50 por ciento de la PEA (19 millones de personas) se ocupaba en la economía informal. (Periódico *La Jornada*, 6 de septiembre de 1999: 46.)

⁶⁰ Aunque existen distintos conceptos de pobreza y métodos para medirla (ver, Boltvinik y Hernández, 1999, capítulo 1), para los fines de este trabajo se considerarán hogares pobres aquellos "que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica normativa de satisfactores esenciales de Coplamar que incluye además de alimentos, vestido y calzado, vivienda, higiene, transporte y comunicaciones, recreación y cultura". (Boltvinik, 2000: 26.)

los pobres, ha hecho crecer a la una y a los otros con una eficiencia digna de mejor propósito. (Cuadro 13.)

Cuadro 13
México: evolución de la pobreza 1984-1999

	1984		1992		1999	
Población	Millones	%	Millones	%	Millones	%
Total	71.4	100	84.3	100	94.6	100
Pobre	30.0	42	37.1	44	40.6	43
En pobreza extrema	11	15	13.5	16	26.5	28
En pobreza media	19	27	23.6	28	14.1	15
No pobre	41.4	58	47.2	56	54.0	57

FUENTE: Elaborado con información contenida en la revista *Examen de la Situación Económica de México*, Volumen LXXV, Número 879, Banamex-Accival, México, marzo de 1999, p. 91.

Al inicio de los años ochenta, existían en México 30 millones de personas pobres, que representaban el 42 por ciento de la población total. De ese total de pobres, 11 millones se encontraban en pobreza extrema, mientras que 19 millones vivían en condiciones de pobreza media. Mientras tanto, en 1999 la población total pobre sumaba casi 41 millones, un incremento de 37 por ciento respecto a 1984. En ese lapso, si bien disminuyó el porcentaje de personas que se encontraban en condiciones de pobreza media (pasó de 19 a 15 por ciento del total de los pobres); en cambio, el número de pobres extremos se elevó tanto en términos absolutos como relativos, ya que pasaron de 11 millones a 26 y medio millones, lo que significó elevar su porcentaje del 15 al 28 por ciento de todos los pobres. En síntesis, en estos momentos más de 40 millones de mexicanos se debaten en la pobreza, de los cuales casi 27 millones viven en la pobreza extrema.

Como puede observarse en el cuadro 12, a lo largo de la era neoliberal en México se ha registrado una degradación generalizada de los niveles de ingreso de las mayorías nacionales; los estratos medios se empobrecieron, los pobres descendieron a la miseria y los

miserables vieron aumentar la morbilidad y mortalidad por desnutrición de sus hijos.

Otra investigación, realizada por Enrique Hernández Laos, titulada *Prospectiva demográfica y económica de México* y publicada a principios del año 2001 por el Consejo Nacional de Población (Conapo), advierte que el 80 por ciento de los mexicanos carece de recursos suficientes para adquirir la canasta normativa de satisfactores esenciales, diseñada por Coplamar hace 20 años. Además, se resalta que entre 1983 y 1999 el país tuvo un crecimiento de 150 por ciento de habitantes pobres, al pasar de 30 millones a 74 millones de mexicanos en esas condiciones. La crisis de 1995 hizo dramático el crecimiento de la pobreza. Tan sólo en el bienio 1995-1996, fueron arrojados 7 millones 800 mil personas a la pobreza (4.8 millones a las condiciones de pobreza extrema y 3 millones a la pobreza moderada), cuando la población creció en 3 millones 200 mil personas, es decir, concluye el estudio, "la pobreza creció dos veces más que el crecimiento de la población".

Para Víctor Manuel Soria, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, en su investigación titulada *El último gobierno del PRI. Balance del sexenio zedillista*, en el capítulo "Desigualdad y empobrecimiento en la administración zedillista", señala que aun y cuando la economía se recuperó a partir de 1997, después de los años de crisis (1995-96), el rezago en el empleo formal y el incremento en los empleos precarios, sumado a la pérdida en los salarios reales, además de otros factores, ocasionaron que el total de pobres en México pasara de 65.2 millones en 1996 a 70.9 millones en 1999.

En términos territoriales, a mediados de la década de los noventa, según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol):

En las 91 regiones prioritarias del país, donde se registran los índices de pobreza y marginación más altos, habitan 24 millones de personas. En ellas se concentra el 60 por ciento de la población ocupada en el ámbito nacional que no percibe ingresos y sólo 20 por ciento obtiene más de un salario mínimo. (Periódico *La Jornada*, 11 de noviembre de 1996: 26.)

En el campo, la pobreza presenta sus expresiones más brutales y desalentadoras: "El 70 por ciento de la población más pobre del país se localiza en el sector campesino." (Domville, 1994.) Ahí, el

porcentaje de niños de uno a cuatro años con desnutrición severa en el medio rural pasó del 7.7 por ciento en 1979 a 15.1 por ciento en 1989. (Calva, 1995b: 33.)

Pero además, en todo el país la mortalidad por desnutrición en los niños de uno a cuatro años se elevó en 221 por ciento entre 1982 y 1992 y en los menores de un año, en 127 por ciento. Sin embargo, eso no es todo. De acuerdo con el doctor Abelardo Ávila del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán" (periódico *El Sol de Puebla*, 14 de octubre de 1994), antes de la crisis del 95, en México morían anualmente 50 mil niños de hambre y 110 de cada mil recién nacidos fallecían por desnutrición. Después de la crisis las cosas empeoraron.

Investigadores del mismo Instituto Zubirán presentaron ante la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma, Italia, en noviembre de 1996, los resultados de una investigación donde se advierte que de 1960 a 1982 la alimentación en México mejoró al grado que la desnutrición severa, grado II, se redujo en 50 por ciento, sin embargo en los siguientes 14 años (de la era neoliberal) "la situación se ha estancado debido a la crisis y el programa de ajuste económico [...] que afecta a las regiones más pobres donde el 80 por ciento de los niños nace en los hogares de 20 por ciento de las familias con pobreza absoluta". (Periódico *El Financiero*, 13 de noviembre de 1996: 24.)

A pesar de las advertencias, las cosas no se detuvieron y de acuerdo con los resultados arrojados por la "Encuesta Nacional de Nutrición 1999", levantada por el Instituto Nacional de Salud Pública, "el 30 por ciento de la población infantil menor de cinco años de edad (casi tres millones) padece anemia, mientras que dos millones viven con desnutrición crónica y en cerca de 220 mil las deficiencias son tan grandes que hay elevados riesgos de enfermedad y muerte, además de efectos adversos en el desarrollo mental de los infantes".

Una de las causas de esta crítica situación, que el sistema capitalista es incapaz de resolver y se agudiza con la política neoliberal, tiene como origen el propósito de lograr el equilibrio fiscal, para cuyo fin se reduce el gasto público en los renglones sociales. En México, el gasto social *per cápita* bajó de 2 mil 180 pesos en 1994 (1994=100) a mil 787 pesos en 1996. Empezó a subir en 1997 hasta alcanzar 2 mil 52 pesos en 1999 y ser en el 2000 de 2 mil 113 pesos. Como se puede observar, en el último año del siglo XX el gasto

social por persona aún no alcanzaba el nivel de 1994. El renglón más afectado ha sido el de la educación, cuya caída fue de 6.4 por ciento; además de haber perdido presencia dentro del gasto social, al pasar de 43.3 por ciento a 39 por ciento en ese mismo lapso. (Gutiérrez, 1994: 44.)

En el caso de la salud, el gasto público mantiene proporciones por debajo de las registradas en países con desarrollo similar al de México y, por supuesto, muy por debajo del destinado por las naciones desarrolladas a este rubro. Así, en nuestro país en el 2000 se destinó a la salud el 3.4 por ciento del PIB, mientras que en 1982 era de 3.6 por ciento y el requerimiento internacional señala un mínimo de 5 por ciento. Canadá y Estados Unidos destinan a la salud el 9 y el 12 por ciento de su PIB, respectivamente, lo que permite una cobertura del 100 por ciento en el primero y del 85 por ciento en el segundo. (Carrasco *et al.*, 1994: 19 y 21.)

Larga puede ser la relación para documentar la pobreza y los agravios que el modelo y la estrategia neoliberal han provocado al pueblo de México. Pero aun sin presentarla, podemos decir que el neoliberalismo, tanto como el capitalismo, ha demostrado su inviabilidad para combatir la pobreza. Aun más, en estos momentos el país vive los resultados de las políticas de estabilización y ajuste estructural aplicadas por el gobierno mexicano más atento siempre a escuchar y cumplir las sugerencias del Fondo Monetario Internacional que a iniciar el camino para resolver las grandes carencias de los mexicanos.⁶¹

La estrategia fondomonetarista ha traído consigo una elevada dosis recesiva y el creciente deterioro del bienestar social, ya que al considerar fundamentalmente restricciones a la demanda se requieren niveles altos de desempleo para romper la inflación de salarios.

A pesar de todo, las cosas no parecen mejorar y aunque algunos funcionarios han reconocido en su momento la gravedad de la situación no ha existido la voluntad política para dar el golpe de timón y realizar los cambios necesarios y superar las limitaciones y

⁶¹ Como se ha dicho antes, las llamadas medidas "ortodoxas" recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, incluyen políticas monetarias, fiscales, comerciales y salariales restrictivas, que hacen decrecer los distintos elementos de la demanda agregada. La monetaria afectando principalmente al crédito y la inversión; la fiscal el gasto público; la comercial las importaciones y exportaciones y la salarial el consumo. (Ver, Jarque y Téllez, 1993: 39.)

carencias del modelo neoliberal. Así por ejemplo, en la "Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social", Carlos Rojas, secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Ernesto Zedillo, aceptó que el país "enfrenta el desafío de brindar oportunidades de ingreso y bienestar a cerca de 14 millones de mexicanos que sufren niveles de marginación inaceptables". (Periódico *El Financiero*, 8 de marzo de 1995.) No obstante esa declaración donde se empequeñeció el número de pobres, y muchas otras más en el mismo sentido, la estrategia no cambió y millones de mexicanos se mantuvieron en condiciones extremas de pobreza.

Pero eso no es todo: la crisis iniciada en diciembre de 1994, de acuerdo con datos de la ONU, propició el deterioro del desarrollo humano en México y al abrirse la brecha entre pobres y ricos se cambió de *injusta* a *inhumana* la calidad de vida de cuando menos 14 millones de mexicanos. Incluso, recientemente el Instituto Nacional de Nutrición reveló que "en México, cada 24 horas 350 personas mueren por hambre o desnutrición y la mayoría son niños".

Frente a todo esto resulta difícil comprender las razones para sostener un modelo económico empobrecedor, excluyente, desnacionalizador y que ofrece pocas perspectivas a la necesidad de mejoría del bienestar de millones de mexicanos. Si se persiste en incorporar al país a la globalización teniendo como sustento un modelo cuyo eje es el mercado, pocas esperanzas hay para aquellos mexicanos que aún viven en la pobreza sin perspectivas ciertas de abandonarla en un plazo previsible.

IV LA PERSPECTIVA

En este momento la perspectiva para superar la situación en la que viven millones de mexicanos pobres y extremadamente pobres, resulta inviable si se mantiene el modelo neoliberal.

El errático funcionamiento de la economía, pero sobre todo la situación de crecimiento con elevados niveles de pobreza y desempleo, se mantienen como peculiaridades del modelo impuesto a los mexicanos desde 1982 y que el nuevo gobierno de Vicente Fox parece no tener la intención de cambiar.

Por su parte, el mercado interno, sistemáticamente destruido, no parece tener la posibilidad de ser el factor fundamental de la reactivación económica. Así, mientras se mantenga el modelo neoliberal, cuya impotencia estratégica para superar los principales problemas de la economía nacional resulta evidente, difícilmente mejorarán el empleo y el ingreso de los trabajadores y sí se mantendrán las altas tasas de interés que impiden reanimar la inversión y, en consecuencia, crecerán la inestabilidad social y la debilidad gubernamental para actuar en el proceso económico evitando sus perversiones.

Hay quienes prevén en forma optimista, por ejemplo el gobierno federal, un crecimiento del PIB del 4.5 por ciento al finalizar el 2001; nada parece permitir ese optimismo, mucho menos cuando para lograrlo se requerirían 30 mil millones de dólares de inversión, que el sector privado no está en condiciones de realizar por el estrangulamiento del mercado doméstico y el sector público no desea hacer. Más bien, aunque en forma pesimista, hay quienes creen que el PIB apenas si crecerá en entre 3 y 3.5 por ciento, dado que los recursos para la inversión seguirán siendo caros y cada vez más escasos. A su vez, la IED tan importante en los últimos seis años, difícilmente podrá sostener su ritmo ascendente debido a la desaceleración de la economía norteamericana.

También, con toda seguridad, tendremos mucha publicidad gubernamental advirtiéndonos que "la medida es amarga pero en beneficio de todos", o se insistirá en un mítico "sacrificio equitativo", cuando la realidad es que el ingreso se encuentra cada vez más concentrado y los pobres crecen sin pausa.

La reforma fiscal impulsada por el gobierno de Vicente Fox, fundamentada en la eliminación de la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes y servicios como alimentos, medicinas, libros y colegiaturas, sólo contempla la recaudación y soslaya su impacto social. Además, en el nuevo gobierno de Vicente Fox tampoco aparecen propuestas encaminada a sustituir al neoliberalismo.

Un cambio necesario y verdadero

La situación de crisis que se vive en el país actualmente, evidencia que, por sí mismas, las fuerzas del mercado son incapaces de generar los recursos productivos y financieros necesarios para lograr una dinámica económica sostenida.

Por el contrario, en la ya prolongada era de gobiernos neoliberales el mercado ha profundizado los rezagos productivos y provocado fuertes presiones sobre las cuentas del sector externo, que en 1994 desataron la crisis y provocaron la inestabilidad financiera.

Esto demuestra que sigue siendo falsa la disyuntiva que plantea: "todo al mercado o todo al Estado". Ambos, Estado y mercado, han mostrado su incapacidad para resolver los problemas del crecimiento sostenido y la justicia distributiva.

Por eso, los mexicanos debemos reflexionar seriamente sobre el modelo que deberemos seguir ya, desde ahora y en donde la inmediatez del mercado sea superada por la visión estratégica del Estado.

Una de las principales debilidades del modelo neoliberal y de la políticas estabilizadoras que le corresponden, se puede encontrar en su profunda dependencia foránea y extrema vulnerabilidad, por tanto, frente a las fluctuaciones del ahorro foráneo; de tal forma que cuando el inicio de la reactivación de la economía norteamericana y sus síntomas inflacionarios obligaron al gobierno de Clinton a elevar las tasas de interés se provocó la reorientación de los flujos de capital, la reducción de la liquidez mundial y el encarecimiento del costo del fondeo. Con ello, la fuga de capitales de México no se hizo esperar, provocando la crisis de 1995, que por cierto puso en

duda la viabilidad del proyecto neoliberal y que, el gobierno de Ernesto Zedillo, mediante el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), el PARAUSEE, la APRE, el Plan Nacional de Desarrollo o la Alianza para el Crecimiento Económico, sostuvo a contrapelo de la opinión y situación de muchos mexicanos.

El nuevo modelo, por lo menos, debe superar las debilidades expuestas, es decir, habrá de evitar su extrema dependencia de los recursos externos, sobre todo de aquellos de corto plazo que tanto daño han hecho a la estabilidad financiera y económica del país y lograr, mediante un nuevo pacto social, establecer los propósitos y límites de la acción estatal y del mercado. En éste predomina la ganancia y el corto plazo; en un Estado democrático deben plasmarse los intereses sociales y la visión estratégica del país que los mexicanos queremos.

En México debe volverse a hablar de desarrollo. El funcionamiento del mercado atiende, exclusivamente, a las transacciones en donde los agentes económicos que participan en ellas procuran maximizar su ganancia. Por eso, cuando se habla de desarrollo, es decir, de crecimiento a largo plazo con distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, el mercado no sirve a esos propósitos y, mucho menos, para garantizar un modo de vida democrático. Por esa razón, la obligada intervención del Estado en la economía debe explicarse dada la necesidad de impulsar el desarrollo y solventar ausencias o insuficiencias del mercado, así como por la necesidad de promover el bienestar y procurar la equidad social, en un modo de vida democrático, cuestiones difíciles de lograr si se dejasen sólo a las fuerzas del mercado.

Un Estado renovado

En tal virtud, resulta de fundamental importancia abandonar la idea de un Estado mínimo que sólo sirva al funcionamiento del mercado, para incorporar la concepción estratégica de un nuevo Estado que aliente la participación social en las decisiones de política económica y cuyas funciones no se limiten a ejercer una labor meramente administrativa. En suma, se trata de un Estado Renovado al servicio de la sociedad y el hombre más que del mercado y la ganancia.

Aun haciendo una revisión somera de la situación actual de la sociedad y la economía mexicanas, muy pocos podrán negar la necesidad de la intervención del Estado tendiente a superar las condi-

ciones de pobreza y exclusión en las que viven millones de mexicanos, o a tratar de solventar las gravísimas insuficiencias de empleo e ingreso que el sector privado ha sido incapaz de resolver y que, incluso, muchas veces su acción profundiza y perpetúa.

El Estado de Bienestar, tal y como lo conocimos en México, si bien era funcional para el capitalismo de los años cincuenta, sesenta y parte de los setenta, como forma de garantizar la demanda efectiva, se convirtió en disfuncional ante las nuevas condiciones creadas por la crisis de los años ochenta y las nuevas necesidades de la acumulación de capital, y por eso: "fue en este momento cuando se hizo perceptible la llamada crisis de legitimación, consecuencia a su vez de la crisis fiscal: la incapacidad del Estado para hacer frente, en un clima de caída de la rentabilidad, a las crecientes demandas sociales de nuevas prestaciones". (Paramio, 1988: 72)

De ninguna manera se trata de restaurar aquel Estado de Bienestar, sino aprovechar la experiencia obtenida de su existencia, tanto como la lograda en los años del neoliberalismo, para diseñar un Estado capaz de intervenir en todos aquellos campos demandados por el desarrollo económico y que si bien debido a la carencia de capital y tecnología, pero sobre todo por la falta de un espíritu de desarrollo más allá del lucro, el sector privado no ha atendido y, seguramente, jamás atenderá de no contar con el incentivo de la ganancia.

Un Estado Renovado, como el que requiere en estos momentos nuestro país, debe construir una estrategia económica que deje de basarse en el sacrificio de los trabajadores y el dominio de los monopolios, para llevar adelante una política de crecimiento y distribución apoyada en la ampliación y fortalecimiento del mercado interno, la distribución equitativa de la riqueza y el fomento al empleo, la articulación e integración de los sectores productivos, el uso sustentable de los recursos naturales y la orientación de su acción a reducir los desequilibrios sectoriales y regionales existentes en la República.

Un Estado así, de ninguna manera sugiere reeditar la experiencia del expansionismo estatal desordenado, abusivo e indiscriminado, pero sin duda su participación tendrá que ser de primer orden en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, el cumplimiento del derecho universal a la educación gratuita en todos sus niveles, la salud y el empleo, la prevención de la degradación ambiental, y la orientación de su inversión hacia proyectos localizados

en áreas estratégicas para el fortalecimiento de la soberanía nacional, como la generación y distribución de energía eléctrica, el petróleo, las comunicaciones y la producción de alimentos en el campo.

En este momento, sin duda, el desarrollo económico no sólo depende de las transacciones económicas en el mercado y el comportamiento del sector privado en la economía, sino también de los bienes y servicios, de las leyes y normas que mantengan bajo control social el funcionamiento del mercado, de la educación en todos los niveles, del bienestar social y de la infraestructura que pueda proporcionar el Estado.

Por eso, hoy se requiere un Estado conductor de un proyecto nacional consensado con todas las fuerzas sociales, más que administrador del sistema y exclusivo promotor de las ventajas para los inversionistas, lo cual significa expropiar la política económica al pequeño grupo que en su beneficio la ha usufructuado y convertirla en un asunto propio de la sociedad. Además, el Estado Renovado para enfrentar los retos que ofrece la situación actual del país, debe afrontar dos grandes problemas que antes fueron las mayores debilidades del Estado interventor: ser eficiente y garantizar la democracia en tanto modo de vida.

En otras palabras, el problema del nuevo Estado frente a la sociedad es hacer compatible su eficiencia con la democracia y para eso no basta ampliarlo, al menos en su forma tradicional, sino que se requiere replantear estratégicamente su extensión, sus prioridades y la forma en que puede participar la población en la toma de las decisiones fundamentales.

Un Estado autoritario, excluyente, sin visión de futuro y sin representar los intereses nacionales, de poco o nada puede servir de cara al siglo XXI, al cual por cierto México entra en condiciones sumamente desventajosas, sin los instrumentos esenciales para superar el atraso y la dependencia, pero con enormes deseos de cambio.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, Alonso. "Acerca de la naturaleza de la crisis actual", en *Naturaleza de la actual crisis*, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1986.
- Aguilera Verduzco, Manuel. *Una lectura keynesiana del liberalismo de los ochenta. La teoría general: nueva y vieja ortodoxia*, Colección Economía de los 90, Facultad de Economía de la UNAM, México, 1992.
- Álvarez Bejar, Alejandro. "México 1995: entre los desequilibrios macroeconómicos y la crisis política", revista *Investigación Económica*, volumen LV, número 212, Facultad de Economía, UNAM, abril-junio de 1995, pp. 197/219.
- Amín, Samir. *El capitalismo en la era de la globalización*, Paidós, Colección Estado y Sociedad, Barcelona, España, 1999.
- Anderson, Perry. "Balánce del Neoliberalismo: Lecciones para la izquierda", *mimeo*. Conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1995.
- Anguiano Roch, Eugenio. "México alinea su política exterior a Estados Unidos", revista *Análisis XXI*, año 1, número 3, agosto de 1998, pp. 10/11.
- Aspe Armella, Pedro. *El camino mexicano de la transformación económica*, Fondo de Cultura Económica, Colección Textos de Economía, México, 1993.
- Banco de México. "Informe anual, 1994", revista *El Mercado de Valores*, Nacional Financiera, año LV, número 6, México, junio de 1995, pp. 13/20.
- Banco de México. "La Política Monetaria de México para 1995", en *El Mercado de Valores*, Nafinsa, año LV, número 3, México, marzo de 1995, pp. 15/20.
- Bautista Romo, Jaime. "El neoliberalismo económico: ¿un grave retroceso histórico para México?", revista *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, volumen XXII, número 84, México, enero-marzo de 1991, pp. 45/62.
- Beltrán del Río, Salvador. "El Cambio de la Alianza", revista *Voz y Voto*, número 85, México, marzo del 2000, pp. 8/10.
- Bendesky, León. (2000.) "Bancos: El costo de intervenir", periódico *La Jornada*, 25 de enero de 2000, p. 17.
- _____. (1999) "Bancos: el costo de intervenir", *La Jornada*, 5 de julio, p. 20.

- Bioy Casares, Adolfo. *Plan de evasión*, Editorial Kapeluz, Buenos Aires, Argentina, 1974.
- Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos. (1985.) "Orígenes de la crisis industrial: el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Un análisis preliminar", en Rolando Cordera (compilador). *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*, Fondo de Cultura Económica, Serie Lecturas, número 39, 2ª reimpresión, México, pp. 456/533.
- _____. (1999.) *Pobreza y distribución del ingreso en México*, Siglo XXI Editores, México.
- Boltvinik, Julio. (1995) "Modelo económico pauperizante", periódico *La Jornada*, México, 17 de febrero.
- _____. (2000) "Economía Moral. Ingresos y trabajo en el censo de 2000", periódico *La Jornada*, 24 de noviembre, p. 26.
- Brochier, Hubert. *El concepto de la crisis*, Ediciones Megalópolis, Buenos Aires, Argentina, 1979.
- Calva, José Luis. (1995a.) "La estrategia neoliberal recesiva y la alternativa", periódico *El Financiero*, México, 3 de marzo, p. 26.
- _____. (1995b.) "La deuda social y la oferta de bienestar para la familia", periódico *El Financiero*, México, 10 de marzo, p. 33.
- Campen/Oxford Economic Forecasting. "Comportamiento de la inversión extranjera", revista *Análisis XXI*, año 1, número 3, México, agosto de 1998, p. 2.
- Carrasco Licea, Rosalba, Clemente Ruiz Durán y Enrique Provencio. *Sistemas de bienestar social en Norteamérica. Análisis comparado*, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y periódico *El Nacional*, México, 1994.
- Carrillo, Jorge y Alberto Hernández. *Mujeres fronterizas en la industria maquiladora*, SEP/Cultura, Colección Frontera, México, 1985.
- Castellanos, Antonio. "México cuarto en la OCDE en inversión extranjera", periódico *La Jornada*, 20 de mayo de 1999: 21.
- Chávez M., Marcos. "Expectativas descompuestas", periódico *La Jornada*, México, 10 de marzo de 2001, p. 22.
- Colín, Marvella. "Descapitalización en la industria de bienes de capital por la falta de inversión y baja competitividad", periódico *El Financiero*, México, lunes 11 de diciembre de 1995, p. 3 A.
- Córdova Montoya, José. "Diez lecciones de la reforma económica en México", revista *Nexos*, número 158, México, febrero de 1991, pp. 31/48.
- Criterios Generales de Política Económica para 1996*, revista *El Mercado de Valores*, Nacional Financiera, año LVI, número 1, México, enero de 1996, pp. 3/11.

- Criterios Generales de Política Económica para el 2001*. Poder Ejecutivo Federal, México, diciembre de 2000.
- Cruz Hernández, Isabel. "Transformaciones en el financiamiento rural mexicano durante el sexenio salinista -balance de las tendencias- (1988-1994)", revista *Cuadernos Agrarios*, Federación Editorial Mexicana, Nueva Época, año 5, números 11 y 12, México, enero-diciembre de 1995, pp. 95/120.
- Domville, Lucía. "Pobreza, lastre del modelo económico", periódico *El Financiero*, México, 10 de julio de 1994.
- Dos Santos, Theotonio. "Neoliberalismo: doctrina y política", revista *Comercio Exterior*, volumen 49, número 6, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, junio de 1999, pp. 507/526.
- Dornbusch, Rudiger. Presentación al libro de Carlos Jarque y Luis Téllez, *El combate a la inflación. El éxito de la fórmula mexicana*, Grijalbo, México, 1993.
- Feijóo Valenzuela, José. "El modelo neoliberal, contenido y alternativas", *Investigación Económica*, volumen LV, número 211, Facultad de Economía, UNAM, México, enero-marzo de 1995, pp. 9/47.
- Forrester, Viviane. *El horror económico*, Fondo de Cultura Económica, México, 11ª reimpresión, México, abril de 1998.
- Fox, Vicente. "Mensaje al Congreso de la Unión. Primero de diciembre de 2000", revista *Voz y Voto*, número 94, México, diciembre de 2000, pp. 38/46.
- Foxley, Alejandro, Eduardo Animat y José Pablo Arellano. *Las desigualdades económicas y la acción del Estado*, Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
- Foxley, Alejandro. *Experimentos neoliberales en América Latina*, Albafeta Impresores, Colección Estudios Cieplan, número 59, Santiago de Chile, marzo de 1982.
- Friedman, Milton y Rose Friedman. *Libertad de elegir*, Ediciones Orbis, Biblioteca de Economía, número 2, Madrid, España, 1983. 1ª edición en inglés, 1980.
- Fugii G., Gerardo y Genaro Aguilar G. "Distribución del ingreso en México, 1984-1992: Un estudio por componentes", revista *Comercio Exterior*, volumen 45, número 8, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, agosto de 1995, pp. 609/614.
- Fukuyama, Francis. (1990.) "El fin de la Historia", *El Gallo Ilustrado*, suplemento cultural del periódico *El Día*, México, 29 de abril.
- _____. (1994.) *El fin de la historia y el último hombre*, Planeta-Agostino, Barcelona, España.
- Godínez, Víctor Manuel. "Las cuentas del empleo", periódico *La Jornada*, México, 19 de mayo de 1999, p. 26.

- Gómez Cruz, Miguel Ángel y Rita Schwentesius Rindermann. "El impacto de la devaluación en el sector agropecuario: Agudizamiento de la crisis agrícola", periódico *El Financiero*, México, 27 de febrero de 1995.
- Guerrero, Omar. *El Estado en la era de la modernización*, Plaza y Valdés, México 1992.
- Guillén Romo, Héctor. (1997.) *La contrarrevolución neoliberal*, ERA, México.
- _____. (1984.) *Orígenes de la crisis en México 1940-1982*, ERA, México.
- Gurría, Ángel. *Perspectivas para el desarrollo económico en América Latina*, mimeo, ponencia presentada a la XII Conferencia de la Asociación de Facultades Escuelas e Institutos de Economía de América Latina (AFEIEAL), México, 14-16 de octubre de 1996.
- Gutiérrez, Elvia. "Crisis y debilitamiento social: Costos de las políticas de estabilización aplicadas en México en la última década", periódico *El Financiero*, México, 9 de julio de 1994, p. 44.
- Hayek, Friedrich A. *Camino de servidumbre*, Alianza Editorial, 2ª reimpresión de la 1ª edición en español, Madrid, 1990. La 1ª edición en inglés está fechada en 1944.
- Heilbroner, Robert. *Capitalismo en el siglo XXI*, Editorial Nueva Imagen, México, 1997.
- Huerta González, Arturo. "La crisis y la inviabilidad de la política actual para superarla", *Investigación Económica*, volumen LV, número 212, Facultad de Economía, UNAM, México, abril-junio de 1995, pp. 23/49.
- Huerta Quintanilla, Rogelio. "La medición de la ventaja comparativa en el sector manufacturero de México", revista *Investigación Económica*, volumen LV, número 211, Facultad de Economía, UNAM, México, enero-marzo 1995, pp. 69/96.
- Informe sobre el Desarrollo Mundial 1992. Desarrollo y Medio Ambiente* (Resumen) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, Washington, DC, 1992.
- Informe de Ejecución 1999 del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000*, Presidencia de la República, México, abril del 2000.
- Jarque, Carlos M. y Luis Téllez K. *El combate a la inflación. El éxito de la fórmula mexicana*, Grijalbo, México, 1993.
- Jiménez Cabrera, Edgar. "El modelo neoliberal en América Latina", en *Sociológica*, año 7, número 19, UAM, México, mayo-agosto de 1992.
- Keynes, John Maynard. *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, Fondo de Cultura Económica, México, 7ª edición, 1965. La 1ª edición en inglés está fechada en 1936.

- Labastida Ochoa, Francisco. Prólogo al libro de Alejandro Carrillo Castro y Sergio García Ramírez, *Las empresas públicas en México*, Porrúa Editor, México, 1983.
- Lekachman, Robert. *Historia de las doctrinas económicas*, Editorial Víctor Leru, Buenos Aires, Argentina, 1959.
- Loria Díaz, Eduardo. "Las nuevas restricciones al crecimiento económico de México", *Investigación Económica*, volumen LV, número 212, Facultad de Economía, UNAM, abril-junio de 1995, pp. 51-85.
- Lustig, Nora y Nicholas Stern. "Expansión de los programas de reducción de la pobreza: Oportunidad, empoderamiento y seguridad", revista *Finanzas y Desarrollo*, Fondo Monetario Internacional, Washington, DC, diciembre del 2000, pp. 3-7.
- Lustig, Nora. "México y la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa", revista *Comercio Exterior*, volumen 45, número 5, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, mayo de 1995, pp. 374/382.
- Marini, Ruy Mauro. *Dialéctica de la dependencia*, ERA, Serie Popular, número 22, 3ª edición, México, 1977.
- Márquez Ayala, David. "El tiempo de la tecnocracia es el futuro", periódico *La Jornada*, México, 1 de abril, de 1996.
- Martínez García, Carlos. "De los cristeros a Fox", periódico *La Jornada*, México, 19 de febrero de 2001, p. 19.
- Ortiz Martínez, Guillermo (1994.) *La reforma financiera y la desincorporación bancaria. Una visión de la modernización de México*, Fondo de Cultura Económica, México.
- _____. (1995.) "Cómo estamos manejando la crisis del peso", revista *El Mercado de Valores*, Nacional Financiera, año LV, México, febrero de 1995, pp. 16/18. Originalmente este artículo se publicó en el diario norteamericano *The Wall Street Journal*, el 5 de enero de 1995.
- Ortiz Wadgymar, Arturo. *Política económica de México 1982-1995. Los sexenios Neoliberales*, Edición Nuestro Tiempo, 3ª edición ampliada y puesta al día, México, 1995.
- Owers, James E. y Stephen P. Coelen, "Empresas públicas y privatización: Problemas y evidencia", revista *Empresa pública. Problemas y desarrollo*, Departamento de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), volumen 1, número 2, México, mayo-agosto de 1986, pp. 45/57.
- Paramio, Ludolfo. "La crítica marxista del Estado de Bienestar", revista *Economía Informa*, número 163, Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, agosto de 1988, pp. 61/72.

- Pérez Silva, Ciro y David Aponte. "Sólo 10 por ciento de los proyectos de Fox podrán cumplirse en 2001", periódico *La Jornada*, México, 9 de noviembre de 2000, p. 5.
- Perrotini, Ignacio. "Estabilidad macroeconómica e inestabilidad monetaria: *parturient montes, nascetur ridiculus mus*", revista *Investigación Económica*, volumen LV, número 212, Facultad de Economía, UNAM, México, abril-junio de 1995, pp. 87/111.
- Perzabal, Carlos. *Acumulación capitalista dependiente y subordinada XXI* Editores, México, 1979.
- PND 1989-1994. *Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994*, Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Programación y Presupuesto, México, mayo de 1989.
- PND 1995-2000. *Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000*, Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 1995.
- Pronafide. "Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000", Poder Ejecutivo Federal, México, junio de 1996.
- Ramírez de la O, Rogelio. "La economía mexicana al cierre de 1998 e inicios de 1999", revista *Este país. Tendencias y opiniones*, número 94, México, enero de 1999, pp. 10/14.
- Rivera Ríos, Miguel Ángel. *El nuevo capitalismo mexicano. El proceso de reestructuración en los años ochenta*, ERA, México, 1992.
- Rodríguez Castañeda, Rafael. *Operación Telmex. Contacto en el poder*, Grijalbo, México, 1995.
- Rogozinski, Jacques. *La privatización en México. Razones e impactos*, Trillas, México, 1997.
- Rosenthal, Gert. *El futuro del desarrollo económico de América Latina en el contexto mundial*, mimeo. Ponencia presentada a la XII Conferencia de la Asociación de Facultades Escuelas e Institutos de Economía de América Latina (AFEIEAL), México, 14-16 de octubre de 1996.
- Salgado, Alicia. "Sube el costo del servicio de la deuda externa", periódico *El Financiero*, México, 8 de abril de 1996.
- Salinas de Gortari, Carlos. (1992.) "Liberalismo social, nuestro camino", revista *Examen*, Partido Revolucionario Institucional, año 3, número 535, abril.
- _____. (1990.) "Reformando al Estado", revista *Nexos*, número 148, México, abril, pp. 27/32.
- Schettino, Macario. "Lo bueno y lo malo de maquilar", *Este país. Tendencias y opiniones*, número 110, México, mayo de 2000, pp. 12/15.
- Smith, Adam. *Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones*, Aguilar, Madrid, 1961. La 1ª edición en inglés está fechada en 1776.

- Soros, George. *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, Plaza & Janés, México, 1999.
- Tamayo, Jorge. "Las entidades paraestatales en México", en *México 75 años de Revolución. El desarrollo económico*, dos tomos, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, tomo 2, pp. 663/760.
- Tarrio, María, Cristina Steffen y Luciano Concheiro. "La modernización en crisis: análisis de la evolución de los principales productos agroalimentarios -Un balance de la política salinista para el campo-", revista *Cuadernos Agrarios*, Federación Editorial Mexicana, Nueva Época, año 5, números 11 y 12, México, enero-diciembre de 1995, pp. 27/43.
- Torres Gaytán, Ricardo. *Teoría del comercio internacional*, Siglo XXI Editores, 3ª edición, México, 1975.
- Trejo Reyes, Saúl. "Los patrones de crecimiento industrial y la sustitución de importaciones en México", en Leopoldo Solís (compilador), *La economía mexicana*, dos tomos, Fondo de Cultura Económica, Colección Lecturas Mexicanas, número 4, México 1973, tomo 1, pp. 152/161.
- Villarreal, René. *Liberalismo social y reforma del Estado. México en la era del capitalismo posmoderno*, Nafinsa-Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
- Zúñiga, David. "Coparmex presionará para obtener un nuevo régimen fiscal y cambios en la LFT", periódico *La Jornada*, México, 13 de marzo de 2001, p. 23.

APÉNDICE ESTADÍSTICO

Cuadro A-1

México: crecimiento promedio anual comparado del PIB y comportamiento sexenal de la inflación, la devaluación y la deuda externa (1964-2000)

PRESIDENTE	PIB	PRECIOS	DEVALUACIÓN	DEUDA EXTERNA
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)	6.23	23.94	0	6,091
Luis Echeverría (1970-1976)	5.95	125	59.8	14,600
José López Portillo (1976-1982)	6.50	47	647.3	58,874
Miguel De La Madrid (1982-1988)	— 0.05	4,031	1,437.7	81,003
Carlos Salinas (1988-1994)	3.16	142	50.4	85,435
Ernesto Zedillo (1994-2000)	2.84	169	186	92,292

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. Tomado de León Bendesky y Godínez, "La brecha entre el *qué* y el *cómo*", *La Jornada*, México, 5 de noviembre de 1999: 30.

Cuadro A-2

México: balanza comercial de la industria maquiladora de exportación 1995-2000 (millones de dólares)

CONCEPTO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	TOTAL
Exportaciones	31,103	36,920	45,166	53,083	63,854	79,387	309,513
Importaciones	26,179	30,505	36,332	42,557	50,409	61,709	247,691
Saldo	4,924	6,416	8,834	10,526	13,444	17,678	61,822

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, tomados de David Márquez Ayala, "México. Comercio exterior 1994 -2000", *Reporte Económico*, Unidad Técnica de Economía, *La Jornada*, México, lunes 19 de febrero de 2001, p. 28.

Cuadro A-3
México: pérdida adquisitiva del salario mínimo 1994-2000

PERIODO	SALARIO MÍNIMO			CANASTA BÁSICA		PÉRDIDA ADQUISITIVA	
	\$	Variación %	Índice (a)	Inflación Variación %	Índice (b)	Índice (a)/(b)	Variación %
1994 Enero-diciembre	13.97	7.0	100.0	6.9	100.0	100.0	0.0
1995 Enero-marzo	14.95	7.0	107.0				
Abril-noviembre	16.74	12.0	119.8	60.6	160.6	82.1	-17.9
Diciembre	18.43	10.1	131.9				
1996 Enero-marzo	18.43	0.0	131.9				
Abril-noviembre	20.66	12.1	147.9	33.3	214.1	81.2	-18.8
Diciembre	24.30	17.6	173.9				
1997 Enero-diciembre	24.30	0.0	173.9	14.9	246.0	70.7	-29.3
1998 Enero-noviembre	27.99	15.2	200.4				
Diciembre	31.91	14.2	228.4	19.0	292.7	78.0	-22.0
1999 Enero-diciembre	31.91	0.0	228.4	13.2	331.31	68.9	-31.1
2000 Enero-diciembre	35.93	10.0	251.2	8.7	360.2	69.7	-30.3

Cuadro A-4
México: distribución de la inversión extranjera directa por entidad federativa (1995-2000)

TOTAL (MILES DE DÓLARES)	68,219.8
ENTIDAD	%
Distrito Federal	55.2
Nuevo León	10.2
Baja California	6.5
México	5.6
Chihuahua	5.5
Jalisco	3.2
SUBTOTAL	84.2
Resto de las entidades	15.8
TOTAL	100.0

FUENTE: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi).

Cuadro A-5
México: participación en el ingreso por familias (1984-1998) (porcentajes)

DECILES*	1984	1989	1992	1994	1996	1998
I	1.72	1.58	1.55	1.01	1.8	1.50
II	3.11	2.81	2.73	2.27	2.9	2.66
III	4.21	3.74	3.70	3.27	3.8	3.63
IV	5.32	4.73	4.70	4.26	4.8	4.68
V	6.40	5.90	5.74	5.35	5.8	5.82
VI	7.86	7.29	7.11	6.67	7.2	7.21
VII	9.72	8.98	8.92	8.43	8.8	8.93
VIII	12.18	11.42	11.37	11.20	11.3	11.49
IX	16.73	15.62	16.02	16.30	15.8	15.97
X	32.77	37.93	38.16	41.24	37.9	38.11
ÍNDICE DE GINI**	0.43	0.47	0.47	0.51	0.47	0.48

* Los hogares al nivel nacional están ordenados en los deciles de acuerdo a su ingreso total trimestral que se compone por el ingreso corriente total y las percepciones financieras y de capital, monetarias y no monetarias.

** El Índice de Gini (IG) tiene como referencia una distribución equitativa del ingreso y sus valores van de cero a uno; cuando el IG es cero el ingreso está equidistribuido; sin embargo, si la totalidad del ingreso está en manos de un solo

individuo, es decir, si su distribución está perfectamente concentrada, el IG asume el valor 1 (Ver, Cortés Cáceres, Fernando y Rosa Ma. Rubalcava Ramos. *El ingreso de los hogares*, INEGI-El Colegio de México-Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México, 1994, p. 58).
FUENTE: INEGI, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, tercer trimestre de cada año.

Cuadro A-6
México: incrementos del PIB total
y por habitante
(Pesos corrientes de 1980)

PERIODO	PIB (% de incremento promedio anual)
Gustavo Díaz Ordaz (1965-1970)	6.84
Luis Echeverría (1971-1976)	6.17
José López Portillo (1977-1982)	6.10
1965-1982	6.37
Miguel de la Madrid (1983-1988)	-0.05
Carlos Salinas (1989-1994)	3.92
Ernesto Zedillo (1995-1999)	2.84
1983-1999	2.23

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. INEGI, *Estadísticas históricas de México*, t. II, México, 1994. De 1995 a 1998: *Examen de la Situación Económica de México*, Banamex-Accival, Vol. LXXV, núm. 879, México, marzo de 1999: 89. Para 1999: SHCP. Boletín de prensa 023/00, 16 de febrero de 2000.

Cuadro A-7
México: tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
en el gobierno de Ernesto Zedillo

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tasa Anual de Incremento del PIB	-6.2	5.2	6.7	4.8	3.7	6.9

FUENTE: De 1995 a 1998: *Examen de la Situación Económica de México*, Banamex-Accival, Vol. LXXV, número 879, México, marzo de 1999: 89. Para 1999: SHCP. Boletín de prensa 023/00, 16 de febrero de 2000. Para el 2000 y 2001: INEGI.

Cuadro A-8
México: equilibrios y desequilibrios
macroeconómicos
(Resultados por sexenios presidenciales 1935-1999)

PERIODO	Cuenta Corriente	Balanza Comercial*	Inflación	Crecimiento sexenal del PIB
Nacionalismo Revolucionario	Millones de dólares de 1998		Tasa media anual de variación del INPC**	
1935-1940***	594.01	3,970.05	5.21	30.10
1941-1946	35.85	(1'348.09)	14.33	42.90
1947-1952	(1,771.34)	(3,494.30)	9.73	39.86
1953-1958	(5,762.12)	(6,082.02)	5.43	44.85
1959-1964	(7,516.86)	(7,215.30)	2.47	47.51
1965-1970	(14,068.90)	(12,290.98)	2.57	48.75
1971-1976	(34,764.24)	(31,132.66)	12.65	43.12
1977-1982	(59,225.74)	(13,586.22)	29.41	43.11
Neoliberalismo				
1983-1988	13,142.83	49,060.87	90.46	1.09
1898-1994	(88,932.55)	(68,561.84)	16.72	25.81
1995-1999	(29,820.88)	(30,929.86)	24.22	14.39

Notas: Las cifras entre paréntesis son negativas. * Sin maquiladoras. ** Índice Nacional de Precios al Consumidor. *** Para Balanza Comercial 1935-40 y para la Cuenta Corriente 1939-40

FUENTE: Para el PIB, Balanza Comercial y Cuenta Corriente: Banco de México, *Indicadores Económicos. Acervo histórico y Carpeta electrónica*; Nafinsa, *La economía mexicana en cifras 1978*; INEGI, *Estadísticas históricas de México*; INEGI, *Sistemas de Cuentas Nacionales de México*. Para el Índice de Precios al Consumidor (INPC): De 1935 a 1993, INEGI, *Estadísticas históricas de México*, t. II, México, 1994. De 1994 a 1999, INEGI.

Cuadro A-9
México: tasa de participación de las entidades federativas en el PIB nacional
1970-1996 (1980=100)

ENTIDAD	1970	1975	1980	1985	1988	1993	1994	1995	1996
Aguascalientes	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1
Baja California	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.4	2.9	3.2	3.2
Baja California Sur	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Campeche	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	1.6	1.2	1.4	1.3
Coahuila	2.8	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.9	3.3	3.3
Colima	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
Chiapas	1.6	1.7	2.7	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7
Chihuahua	3.4	3.3	2.8	2.9	2.9	2.9	3.8	4.2	4.2
Distrito Federal	27.6	26.1	25.3	27.4	27.5	24.1	24.0	23.0	22.8
Durango	1.4	1.31	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3
Guanajuato	3.4	3.3	2.9	3.2	3.2	3.5	3.3	3.3	3.3
Guerrero	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	2.0	1.9	1.8	1.7
Hidalgo	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.6	1.5	1.3	1.4
Jalisco	7.1	7.0	6.6	6.9	6.9	6.6	6.5	6.3	6.4
México	8.6	10.2	11.0	10.8	10.7	10.5	10.2	10.1	10.4
Michoacán	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3
Morelos	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.6	1.5	1.4	1.3
Nayarit	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
Nuevo León	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.5	6.7	6.7	6.6
Oaxaca	1.5	1.5	3.3	3.1	3.1	1.7	1.7	1.6	1.6
Puebla	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4
Querétaro	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.4	1.5	1.6	1.6
Quintana Roo	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	1.3	1.3	1.2	1.2
San Luis Potosí	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8
Sinaloa	2.5	2.5	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
Sonora	3.2	2.8	2.5	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	2.8
Tabasco	1.2	1.7	4.0	3.1	3.0	1.5	1.3	1.3	2.0
Tamaulipas	3.2	3.0	3.0	2.7	2.7	2.6	2.9	3.0	3.0
Tlaxcala	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
Veracruz	6.5	6.0	5.8	5.2	5.1	4.9	4.8	4.8	4.7
Yucatán	1.1	1.4	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3
Zacatecas	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8

FUENTE: De 1970 a 1988: *Gaceta Informativa*, Vol. II, número 1, INEGI, México, enero-marzo de 1990, pp. 33-34. De 1993 a 1996: David Márquez Ayala, Unidad Técnica de Economía (UNITÉ), INEGI. *Producto Interno por Entidad Federativa 1993-1996*. Edición de 1999 y 5º Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, 1999.

El neoliberalismo realmente existente de Jaime Ornelas Delgado se terminó de reeditar en julio de 2001 en los talleres de Formación Gráfica S.A de C.V., con domicilio en Matamoros 112, colonia Raúl Romero de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México y con número de teléfono y fax 57 97 60 60.

En la edición, el diseño y la composición tipográfica son de José Luis Olazo García, el cuidado de Gerardo Lino y la coordinación de Ricardo Escárcega Méndez.

El tiraje consta de 1000 ejemplares.

Colección
Pensamiento económico

**Perfil de los recursos humanos en
Puebla (1960-1995)**

María Eugenia Martínez de Ita

**La política exterior
pragmática salinista**

Paulino Ernesto Arellanes Jiménez

**La ganadería bovina
en Puebla y México**

Susana Rappo Míguez

Keynes... hoy

Varios autores

**Treinta años de economía 1965-1995
Una visión desde Puebla**

Varios autores

**Inversiones y empresas extranjeras
globalizadas**

Paulino Ernesto Arellanes Jiménez
Jesús Rivera de la Rosa
(coordinadores)

Migración laboral internacional

Saúl Macías Gamboa
Fernando Herrera Lima
(coordinadores)